

X Por el Sr. Juan Luis Oquendo H.——

X  
**CODIFICACION DE LEYES Y  
ORDENANZAS MUNICIPALES**



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

**TESIS PREVIA AL GRADO DE DOCTOR EN JURIS-  
PRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES——**



# DEDICATORIA

Al Ingeniero señor  
don Jorge I. Moreno.

A sus palabras de aliento, forjadoras de  
espíritus, de mejores rumbos y horizontes.

Con todo respeto,

f.) JUAN LUIS OQUENDO H.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## INFORME

Quito, a 23 de mayo de 1935.

Señor Decano:

La Comisión nombrada por usted para el estudio de la Tesis de Grado que sobre «Codificación de Leyes y Ordenanzas Municipales» ha presentado el Sr. Juan Luis Oquendo, en cumplimiento de su cometido informa:

El voluminoso trabajo del Sr. Oquendo, hecho con la prolijidad necesaria, comprende el vasto campo de la actividad municipal, en su esfera jurídico administrativa. Si es verdad que la obra realizada se refiere a la labor del Municipio de Quito, Capital de la República, no es menos cierto que su celo administrativo y las prácticas por él establecidas con arreglo a normas jurídicas precisas, pueden servir de base para la clarificación de un Derecho Municipal hasta ahora desconocido en el país. La intensidad de la vida moderna, entendida como regulación de derechos y obligaciones entre los componentes humanos que conviven dentro de un agregado, representado específicamente por entidades comunales, los Municipios, exige más buenas y justas maneras de ordenar esa misma convivencia; y hacer posible el progreso vial, viable la armonía de los grupos, correcto el incentivo de mejoramiento, sano y confortable todo servicio colectivo, toca directamente a las Corporaciones Municipales. Para ello necesitan dictar normas y establecer sistemas que armonicen intereses y logren equilibrio entre los asociados, entre la comunidad interesada y los intereses particulares, apelando a métodos de justicia que acopiasen eficacia y lograsen servicio.



El Derecho Municipal, la jurisdicción municipal, ha estado siempre dispersa, trunca, ignorada en su mayor parte. La abundante jurisprudencia no se la tenía recopilada y nunca se la ordenó como era debido. A esta tarea ha tendido el trabajo del Sr. Oquendo, aunque reducida a límites locales correspondientes a la jurisdicción cantonal de Quito.

El Sr. Oquendo ha puesto empeño y entusiasmo en ordenar las distintas disposiciones legales relacionadas con las atribuciones municipales, colocando además en sus debidos lugares, el resultado jurídico o administrativo obtenido experimentalmente en el Ayuntamiento Quiteño. Desde el texto Constitucional hasta la letra de artículos de leyes sustantivas o adjetivas que, en alguna forma, tengan que ver con el ejercicio de la actividad municipal, todo ello está convenientemente acoplado en la tesis del inteligente universitario. Con toda razón, y por referirse al Concejo Cantonal de Quito, esta entidad ha premiado el meritorio esfuerzo del Sr. Oquendo, con tanta mayor justicia cuanto que esta labor significa un verdadero beneficio para la jurisprudencia municipal necesaria y urgente.

Atentas estas consideraciones, la Comisión aprueba la tesis presentada por el Sr. Juan Luis Oquendo, calificándola con la nota DIEZ, y de manera especial la recomienda para que, de no hacer el I. Concejo de Quito, al que toca de preferencia, se ordene la publicación de la tesis por cuenta de la Universidad.

Dejamos así cumplida nuestra comisión, salvo en todo caso el más acertado parecer del señor Decano.

f.) P. Jaramillo Alvarado.

f.) Víctor Gabriel Garcés.

f.) Néstor Mogollón.



Nº. 177.

Presidencia del Concejo Municipal.

Quito, a 31 de enero de 1934.

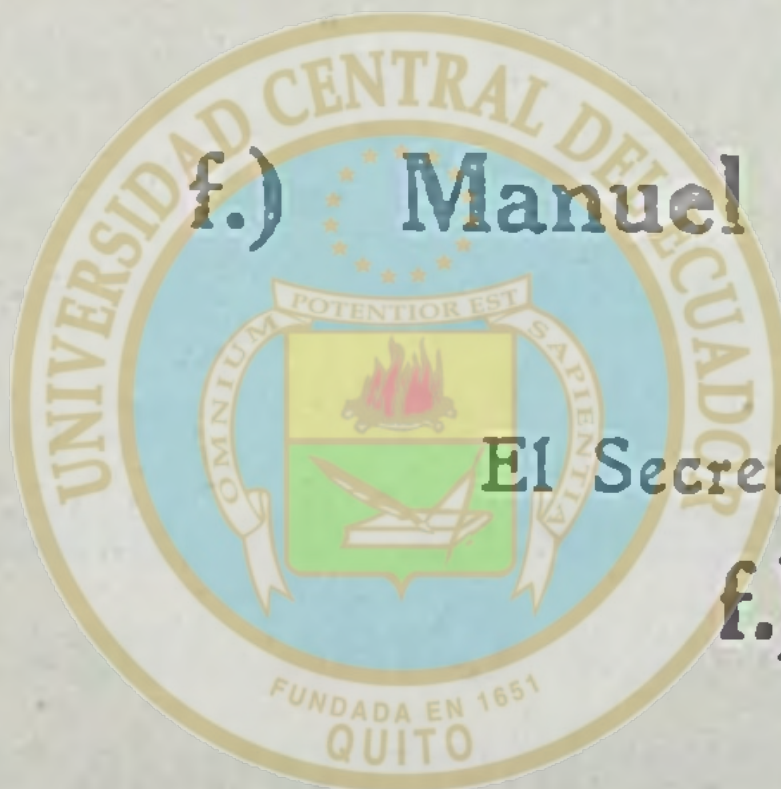
Señor don Juan Luís Oquendo, Secretario de la Dirección de Obras del Concejo.

Ciudad.

El Concejo, en sesión del 29 del presente, resolvió hacer constar en el Programa de Fiestas Patrias del 24 de mayo próximo la suma de UN MIL SUCRES que como premio ha de entregarse a usted por la obra de Codificación de las Ordenanzas Municipales de este Concejo que usted ha llevado a cabo.

Díos y Libertad,

Es Copia,



f.) Manuel Bustamante G.

El Secretario del Concejo,

f.) J. Roberto Páez.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

**Informe del Sr. Dr. Dn. Julio C. Montalvo, ex - Presidente de la  
Comisión de Legislación del I. Concejo de Quito**

Quito, a 23 de enero de 1934.

Señor don Juan Luís Oquendo H.

Ciudad.

Estimado señor Oquendo:

Complacido he leído la importante Codificación de Leyes y Ordenanzas Municipales trabajada por usted con laboriosidad e inteligencia. Una obra verdaderamente útil que merece franco aplauso y expreso reconocimiento a sus esfuerzos.

Hacia falta la Codificación arreglada por usted, pues, para consultar una Ley o una Ordenanza, se encontraba en



graves dificultades y en la duda acerca de la existencia o derogación.

La Legislación Municipal es muy abundante, y sólo una decisión fervorosa, podía llevar a la práctica, con el éxito, el trabajo realizado por usted.

Reciba mis felicitaciones y no desmaye en su firme propósito de continuar en el estudio de nuestras Leyes, en beneficio de todos los asociados.

Atentamente,

f.) Julio C. Montalvo.

Quito, a 7 de agosto de 1934.

Al señor don Juan Luís Oquendo.

En la ciudad.

Estimado señor Oquendo:

Ha hecho usted una obra de utilidad manifiesta, al compilar, siquiera en parte, las Ordenanzas Municipales del Cantón Quito, las que tienen importancia especial por pertenecer a este Cantón la Capital de la República.

Por lo menos una colección sencilla de las Ordenanzas de cada una de las Municipales, debiera, ciertamente, publicarse de tiempo en tiempo, v. g. cada cinco años, ora para la facilidad de la consulta diaria de estas leyes seccionales, ora para que se pueda estudiar en ellas la índole, capacidad, tendencias y grado de cultura de los pueblos.

Y mucha mayor valía tiene el trabajo de usted por la Jurisprudencia y sus documentos ilustrativos, que se hallan agregados en los lugares correspondientes, y por la incorporación de varias disposiciones constitucionales y legales que son la base fundamental de las Ordenanzas y sirven a no dudarlo, para la debida inteligencia y recta aplicación de las mismas.

Presenta usted como primera Parte de su obra la comprendida en los dos volúmenes en folio que se ha servido traérmelos, y que tienen el total de 729 páginas escritas en máquina de escribir.



Revea esta paciente labor el recomendable espíritu público, el buen criterio y la benedictina contracción de su Autor, por todo lo cual es justo tributarle franco elogio.

Ha dado usted la preferencia al ramo administrativo de los impuestos, para verificar, ante todo alrededor de él, la agrupación de los preceptos compilados, cediendo así, espontáneamente, al predominio que ha llegado a tener el aspecto económico en el complicadísimo haz de asuntos sobre que recaen las actividades oficiales.

Entiendo que el Título de «Impuestos Municipales» afecta, no solamente al parágrafo N°. 1 de la Primera Parte, sino a toda la Sección compuesta de 19 Parágrafos, del I al XIX, y que el Parágrafo N°. XX es ya el primero de otra Sección, la de «Varias Ordenanzas dictadas por el Concejo».

De modo que la frase «Antecedentes Legales» constituye el Título, no subtítulo, del Parágrafo I y la de «Ordenanza de Contabilidad Municipal» es el título propio del Parágrafo XX.

Estos mínimos pormenores, de la mera composición material, así como alguna variación cilla que usted pensase introducir en la colocación de las Ordenanzas, tendrán su oportunidad al tiempo de la impresión de la obra.

Ahora me va usted a perdonar que me anticipe a manifestarle la complacencia que sentiré al ver incorporado a su muy buena Compilación, cuando llegue el caso, como antecedente legal de las Ordenanzas modernas que se refieren a la instrucción pública municipal o a la educación de la Clase Obrera del Cantón, el Art. 24 del Decreto Legislativo de 21 de octubre de 1912, que encargó, expresa y señaladamente, a las Municipalidades, el mejoramiento moral, intelectual y técnico del pueblo trabajador dedicado a las artes u oficios de carácter mecánico.

Como autor del proyecto de esa reforma legal, y Miembro de la Legislatura que lo expidió, tengo predilección por ella y deploro mucho cuando es olvidada.

Palpita en usted señor Oquendo, la energía creadora, que pronto se revelará en nuevas obras de igual o mayor valer que la Compilación de Ordenanzas Municipales.

Estrecho a usted la mano, en señal de congratulación y aliento, y suscribo su afectísimo y seguro servidor.

f.) M. R. Balarezo.



## LIBRO PRIMERO

Antecedentes legales.—Sistema de Impuestos.—Ley de Impuestos Municipales.—Referencias a esta última Ley.

### CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES LEGALES.—AUTONOMIA MUNICIPAL.—  
SISTEMA DE IMPUESTOS

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Art. 141. Las Municipalidades son autónomas en el ejercicio de sus funciones e independientes de los otros Poderes Públicos, dentro de la Constitución y de las leyes generales del Estado, y sus miembros serán responsables ante los jueces respectivos por los abusos que cometan, colectiva o individualmente.

Autonomía Municipal.

Art. 142. No se ejecutarán las Ordenanzas, acuerdos o resoluciones municipales, en cuanto se opusieren a la Constitución y a las leyes. En consecuencia, a suscitarse sobre esta materia alguna controversia entre la Municipalidad y la autoridad política o cualquier ciudadano, se decidirá el caso por la Corte Suprema.

Ordenanzas, Acuerdos, Controversias.

Art. 155. No se reconocen otras instituciones de Derecho Público que el Fisco, los Consejos Provinciales, las Municipalidades y los establecimientos costeados por el Estado.

Instituciones de Derecho Público.



## LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

Art. 5º. El Municipio, en el ejercicio de su administración, es autónomo, sin más limitación que lo que disponga la Constitución de la República y las restricciones que para casos de conflictos correspondan al Poder Central. Por tanto, las autoridades del orden administrativo general no podrán ejercer respecto a los Municipios otras atribuciones que las que especialmente les confieran las Leyes.

Autonomía y Limitaciones.

Art. 6º. El órgano representativo del Municipio es, la Municipalidad, la cual se compone de un cuerpo colectivo denominado Concejo Cantonal, elegido en sufragio popular directo.

Representación Municipal.

Art. 17. N.º 21 (Atribuciones del Concejo Cantonal).

Rentas.

Proveer a la creación, determinación, administración, inversión y contabilidad de las rentas municipales, dentro de las facultades legales.

N.º 27. (Atribuciones del Concejo Cantonal).

Infracción de las Ordenanzas.

Determinar en sus ordenanzas la pena correspondiente por la infracción de las mismas; pena que será de uno a quinientos sucres.

Art. 24. Los Consejos Provinciales cuidarán de que las Municipalidades de la respectiva Provincia se ciñan a la Constitución y a las Leyes, en el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere la presente Sección y, para el efecto, podrán hacer a los Concejos Cantonales las observaciones que estimen oportunas y, en caso de que no fueren aceptadas, acudir, para la observancia de los preceptos legales, a la autoridad respectiva.

Consejos Provinciales.

Los Consejos Provinciales tendrán, asimismo, obligación de vigilar las obras públicas que emprendieren las Municipalidades y fiscalizará la inversión de los fondos destinados a dichas obras.

Art. 82. *Son Rentas Municipales:*



1º. Las cantidades que, por pensiones de arrendamiento, tasas de servicios, o por cualquier otro motivo, produzcan los bienes o capitales de pertenencia de la Municipalidad;

Arrendamientos.  
Tasas.

2º. El producto de las multas impuestas en el Cantón por contravención a las Ordenanzas y Reglamentos Municipales y el de las multas que se impongan conforme al Código de Policía y al de Sanidad;

Multas.

3º. El producto de las multas que se impusiere a los Concejales y demás empleados de la Municipalidad;

Multas.

4º. El producto de los impuestos para que se hallare especialmente facultada la Municipalidad; y

Impuestos.

5º. El producto de los bienes municipales, de los mostrencos, y de las rentas e impuestos que se determinan en los artículos siguientes.

Bienes, mostrencos, Rentas.

Art. 83. Es renta municipal el impuesto a los predios urbanos, vehículos, espectáculos, licores, agentes de negocios y transacciones, casas de préstamo, billares, etc., todo de conformidad con el Decreto Supremo de 30 de enero de 1926.

Varios Impuestos.

Exceptúanse del impuesto sobre espectáculos, los destinados a extensión cultural, como recitales, conferencias y teatro nacional, los deportivos organizados por asociaciones reconocidas oficialmente y los de beneficios para instituciones.

#### Art. 84. (*Impuestos*)

Además de los impuestos para los que las Municipalidades estuvieren autorizadas a establecer por leyes especiales, podrán imponer también los siguientes gravámenes:

Otros gravámenes

1º. El impuesto de diez a cuarenta centavos por aferición y contraste de pesas y medidas, y la pena por el uso ilegal de pesas o medidas, sin contraste y aferición, será de veinte centavos a cinco sucres, debiéndose imponer el máximun en caso de reincidencia.

Aferición de pesas y medidas



2º. Hasta cinco centavos en quintal por el uso de la romana municipal para la venta de efectos en ferías o mercados abiertos. No se obligará el uso de esta romana para el peso de efectos que se acostumbran vender por medida;

Romanas

3º. De veinte centavos a diez sucres mensuales por cada paja de agua de propiedad municipal, cuyo uso se conceda a los particulares;

Agua

4º. De veinte centavos a un sucre por cada cabeza de ganado mayor vacuno o caballo o mular que se expendan en mercado público. El ganado en tránsito no pagará impuesto;

Ganado

5º. Una pensión mensual o anual por el permiso transitorio de ocupación de terrenos municipales y demás lugares de propiedad nacional a que se refiere el Art. 588 del Código Civil.

Ocupación de vías

En las concesiones que la Municipalidad por sí sola o con autorización del Poder Central hiciera a empresas de servicios públicos para la ocupación de calles y plazas, tendrá la facultad de reducir o eximir el pago de esta clase de impuestos.

Concesiones a empresas

6º. Un impuesto sobre las embarcaciones cargadas con cualquiera clase de mercaderías. Se fijará este impuesto conforme a las circunstancias dependientes de la cantidad y calidad de los efectos; quedan exceptuadas de este impuesto las embarcaciones que condujeran artículos para ser exportados al Extranjero.

Embarcaciones

7º. Una pensión diaria o mensual por los anuncios, avisos, carteles, etc., que se pongan en los lugares designados por la Municipalidad y en cualquier otro sitio de la población; y

Anuncios, avisos, carteles

8º. De cinco a treinta sucres por la aprobación de planos de edificios.

Planos

Art. 85. Para los efectos del cobro de impuestos que se paguen por mes o año, mes empezado se tendrá por cumplido y la fracción de año por año entero.

Cobro



Art. 86. Son también ingresos municipales las subvenciones que permanente o periódicamente asignare el Poder Central para incrementar los fondos de la Caja Municipal.

Subvenciones

Art. 87. Las Municipalidades podrán crear otra clase de impuestos; pero para ello procederán previa autorización del Consejo de Estado y el dictamen del Consejo Provincial y del Ministro de Municipalidades, y, si se tratare de impuestos adicionales a los fiscales, se necesitará también dictamen favorable del Ministro de Hacienda.

Creación de impuestos

Cada una de las Corporaciones a que se refiere el inciso anterior deberá dar su dictamen dentro de los quince días contados desde la fecha en que haya sido solicitado, entendiéndose que, de no hacerlo en este término, se tendrá como expedido tal dictamen en sentido favorable.

Art. 88. Para creación de nuevos impuestos y de los determinados en el Artículo 84 de esta Ley, las Municipalidades observarán las reglas siguientes:

1ª. Cada Concejo preferirá aquellos que juzgue más convenientes, atendiendo a las circunstancias peculiares del Municipio;

2ª. Al fijar entre el máximo y el mínimo, la cuota de cada impuesto, se procurará la debida proporción con los haberes o industrias del contribuyente;

3ª. No serán gravados la sal y el azúcar nacionales con ningún impuesto;

4ª. No podrá gravarse con ningún impuesto a los edificios o propiedades nacionales o de Asistencia Pública; ni cobrarse en ellas más de media tarifa por los servicios de agua o alumbrado que tengan establecidos, por su cuenta, las Municipalidades; y

5ª. Salvo lo dispuesto en el número 6º. del artículo 84, no se gravará con impuesto alguno, las bestias o vehículos que conduzcan mieses o víveres de consumo general u otros

Normas para la creación de nuevos impuestos



efectos, provenientes del territorio de la misma provincia, ni a los vehículos que, matriculados en otro Cantón, estuvieren sólo de tránsito.

## CAPITULO II

### LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES

#### La Junta de Gobierno Provisional

##### CONSIDERANDO:

1º. Que es urgente suministrar fondos suficientes a las Municipalidades para el desenvolvimiento del progreso nacional, en forma que asegure la independencia y autonomía de la vida económica de los Municipios; y

R. O. N°. 170.—  
1926

2º. Que es asimismo urgente suprimir varios impuestos seccionales perjudiciales a la economía nacional, creando en sustitución nuevas rentas para el Tesoro Municipal,

##### DECRETA:

#### ARTICULO PRIMERO

i) A partir del primero de enero de mil novecientos veintisiete, deróganse en toda la República los siguientes impuestos fiscales, municipales y especiales:

Derogación de  
impuestos

1. Todos los impuestos proporcionales y progresivos sobre los predios urbanos, y sobre los predios rústicos urbanizados, sea cual fuere la Ley que los hubiere establecido;

Predios urbanos y  
rústicos

2. Todo impuesto a las profesiones liberales, excepto el impuesto a la renta establecida en el Art. 6º. de la Ley de Impuestos Internos;

Profesiones libe-  
rales



3. Los impuestos llamados de jornaleros o de trabajos subsidiarios, establecidos por las leyes de Fomento Agrícola o por cualesquiera otras;

Jornaleros

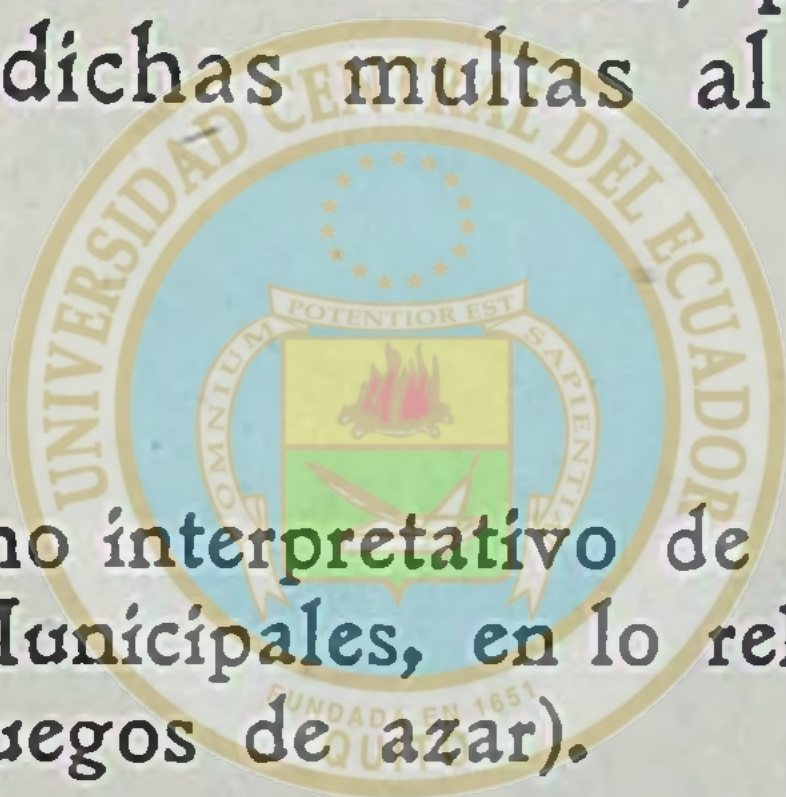
4. Los impuestos sobre los juegos de azar, así como los de galleras. Quedan prohibidos todos los juegos de azar y las lidias de gallos en la República.

Juegos de azar  
(Reformado)

La infracción, tratándose de juegos de azar, será penada con la multa de QUINIENTOS A CINCO MIL SUCRES; y en cada caso de reincidencia, se impondrá además la prisión de uno a siete días. La lidia de gallos se castigará con la multa de VEINTE a CIEN SUCRES.

Estas penas las impondrán los Comisarios Municipales en juicio verbal sumario, por cada vez, debiendo ingresar dichas multas al Tesoro Municipal. (1)

(1) (Decreto Supremo interpretativo de las leyes de Impuestos Internos y Municipales, en lo relacionado con la prohibición de los juegos de azar).



ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

El Presidente Provisional de la República

## CONSIDERANDO:

«Que se han suscitado dificultades con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Ley de Impuestos Internos y de la que señala fondos para los Concejos Municipales, relacionadas con la prohibición de los juegos de azar;

Promulgado en el  
R. O. No. 117 de  
26 de agosto de  
1926

## DECRETA:

«Art. 1º. Los juegos que están terminantemente prohibidos en las leyes mencionadas en la parte motiva de este Decreto son los de azar o suerte, o sean aquellos en que hay envite o se arriesga dinero o algo que lo valga y la ganancia o pérdida dependen única y exclusivamente de la suerte. En consecuencia, declárase que no están incursos en la prohibición los juegos de billar, ajedrez, damas, mah-jong, dominó y los demás en que la agilidad, la fuerza, habilidad, destreza o in-



## 5. Todo impuesto a los espectáculos públicos;

geniosidad del jugador son los que determinan el triunfo o la pérdida.

«Art. 2º. El señor Ministro de lo Interior y Policía, etc., queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

«Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a veintiuno de agosto de mil novecientos veintiseis.

*f.) Isidro Ayora.*

El Ministro de lo Interior, Policía, Municipalidades, etc.,

*f.) Julio E. Moreno.»*

## «El Presidente Provisional de la República

DECRETA:

«Art. 1º. El N.º. 4 de la letra i) del Art. 1º. del Decreto Supremo expedido el 30 de enero último, por el que se señalan fondos para las Municipalidades, dirá:

Reforma al N.º. 4 de la Ley de Impuestos Municipales

«4. Los impuestos sobre los juegos de azar.

Quedan terminantemente prohibidos los juegos de azar o suerte, o sean aquellos en que hay envite o se arriesga dinero o algo que lo valga y la ganancia o pérdida depende única y exclusivamente de la suerte.

R. O. N.º. 158 de 15 de octubre de 1926

«Todo el que violare esta disposición será castigado con multa de quinientos a cinco mil sucres. En caso de reincidencia se impondrá al infractor, además de la pena indicada, la de prisión de uno a siete días.

«Estas penas serán impuestas en cada caso y en juicio verbal sumario por los Comisarios Municipales; debiendo el producto de las multas ingresar a la respectiva Tesorería Municipal.

«Art. 2º. El señor Ministro de lo Interior, Policía, Municipalidades, etc., queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

«Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a once de octubre de mil novecientos veintiseis.

*f.) Isidro Ayora.*

El Ministro de lo Interior, Policía, Municipalidades, etc.

*f.) Julio E. Moreno.*



6. Todo impuesto municipal a las patentes de Privilegio y Marcas de Fábrica;

7. Todo impuesto municipal a las Acciones y Cédulas;

8. Todo impuesto a las Casas de Préstamo sobre prendas y retroventa;

9. Todo impuesto a la venta de mercaderías extranjeras, inclusive las que hagan los vendedores ambulantes y los Agentes viajeros de Casas Nacionales y Extranjeras;

10. Todo impuesto sobre cada cabeza de ganado mayor y menor que se desposte para el consumo público;

11. Todo impuesto a la movilización de ganado vacuno, caballar, lanar y porcino;

12. Todo impuesto a la venta de ganado en pie;

13. Todo impuesto a la movilización de cueros y pieles de ganado vacuno, lanar y porcino;

14. Todo impuesto a la introducción de licores alcohólicos, vinos, cervezas, aguas gaseosas y minerales y más bebidas nacionales y extranjeras;

15. Todo impuesto a la venta de licores extranjeros;

16. Todo impuesto a los billares;

17. Todo impuesto de rodaje;

18. Todo impuesto municipal a los teléfonos. Esta derogación no comprende las cantidades o cuotas que las respectivas empresas deben abonar en virtud de contratos;

19. Todo impuesto municipal a los sorteos, rifas y clubs. Aclárase que no se deroga ningún impuesto sobre loterías municipales y de la Junta de Beneficencia de Guayaquil;

20. Todo impuesto a la prohibición de alumbrado público;

21. Todo impuesto por aseo y barrido; y

22. Todo impuesto municipal sobre capitales en giro.



ii) Los contribuyentes sujetos a los impuestos enumerados en el inc. i) del presente artículo, estarán obligados al pago de lo que adeuden, por concepto de dichos impuestos, hasta el 31 de diciembre de 1925.

ARTICULO SEGUNDO

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS

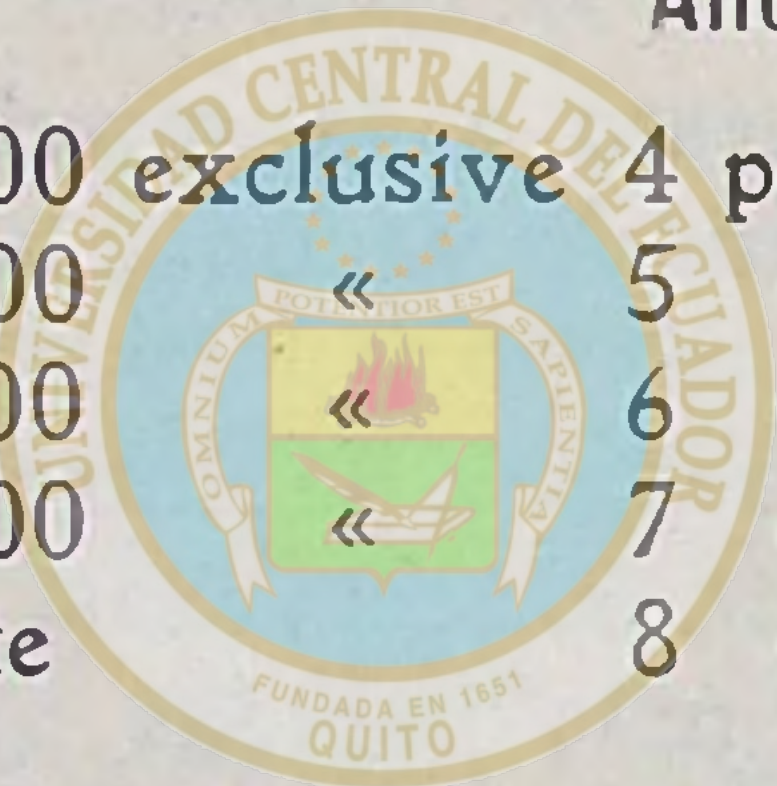
i) A partir del primero de enero de mil novecientos veintiseis, establécese un impuesto anual municipal sobre el valor de los predios urbanos, conforme a la siguiente tabla de progresión:

Valor de los Predios	Alicuota	
De 1.000,00 a 50.000,00 exclusive	4 por mil	Escala de cobro
« 50.000,00 a 100.000,00	5 « «	
« 100.000,00 « 200.000,00	6 « «	
« 200.000,00 « 400.000,00	7 « «	
« 400.000,00 en adelante	8 « «	

ii) Facúltase a las Municipalidades para que, si lo creyeren conveniente, y previa aprobación del Ministro del Ramo, impongan hasta el 10 por mil sobre las propiedades que valgan desde S/. 400.000,00 en adelante.

iii) Tanto para las exenciones como para la determinación de la alícuota correspondiente a los predios urbanos no eximidos, se sumarán los valores de los predios urbanos pertenecientes a un mismo propietario, dentro de la jurisdicción municipal, y se declarará la exoneración si la suma del valor de dichos predios no llega a S/. 1.000,00, o se determinará la alícuota según el total de los valores sumados y dicha alícuota se aplicará al valor individual de cada predio.

iv) Exonérase del pago del impuesto estatuido en el inc. i) del presente artículo:



ÁREA HISTÓRICA



a) Los predios cuyo valor no alcance a S/. 1.000,00.

b) Los predios pertenecientes al Estado o a las Municipalidades, siempre que estén ocupados total o parcialmente, o administrados directamente por el Estado o por la Municipalidad propietaria. Si la ocupación, administración o explotación de un predio urbano perteneciente al Estado o a la Municipalidad se verificare mediante arrendamiento, o en cualquier otra forma de la cual resultare beneficios para el ocupante, arrendatario o explotador o para terceras personas o sociedades o Instituciones, se considerará el predio sujeto al impuesto estatuido en el inc. i) de este artículo.

Predios del Estado y Municipalidades

c) Los Templos de todo culto religioso;

Templos

d) Los predios urbanos administrados o pertenecientes a la Beneficencia Pública o a otras Instituciones de utilidad o interés social creadas o autorizadas por la Ley o por Decreto Ejecutivo y cuya administración esté sujeta a la fiscalización judicial prescrita en la Ley Orgánica de Hacienda. Esta exención se entenderá con las mismas limitaciones en la letra b), para los predios del Estado o de las Municipalidades.

Beneficencia pública

No tendrán derecho a exoneración los predios urbanos pertenecientes a Instituciones eximidas de rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas o pertenecientes a Instituciones cuyas ganancias beneficien o no a personas o sociedades particulares o pertenecientes a Instituciones no expresamente exoneradas de impuestos por leyes especiales o que se dediquen a objetos no autorizados por leyes especiales.

Varias Instituciones

e) Los predios urbanos pertenecientes a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, aún cuando esté eximida de rendir cuentas;

f) Las Municipalidades podrán eximir total o parcialmente del impuesto a establecimientos privados de beneficencia que estimen dignos de exención, mediante ordenanza especial nominativa y motivada.

Exenciones



v) Podrán exonerarse del pago del impuesto, mediante reclamo del propietario o su representante, los edificios en construcción y los que se vuelvan inhabitables o improductivos por destrucción o ruína, durante el tiempo indispensable para la construcción de las obras o reparaciones, a juicio del Concejo; pero la exoneración se limitará siempre al valor del edificio, sin comprender el del solar.

Edificios en construcción, etc.

vi) Tendrán derecho a una rebaja hasta del 50% en la cuota que les corresponda por concepto del impuesto, las Instituciones particulares como Hospitales, Clínicas, Colegios y Escuelas que en sus tarifas y administración se sujeten a la inspección y a las prescripciones del Poder Ejecutivo o de las Municipalidades en su caso.

Hospitales, Clínicas, Colegios, Escuelas

vii) Deróganse las exoneraciones y desgravaciones decretadas por Leyes y Decretos anteriores que no estén comprendidas en los artículos que anteceden.

viii) El valor imponible a los predios urbanos, se determinará por avalúo separado del solar y del edificio, incluyendo en este último todo lo que forme parte integrante de su estructura.

Determinación del monto imponible

ix) Los propietarios de predios urbanos están obligados a suscribir en los formularios correspondientes, una declaración que expresará todos los particulares necesarios para la formación de los Catastros, bajo las penas que establecerán los Reglamentos.

Formularios

x) Los contribuyentes por concepto del impuesto municipal estatuido en el presente artículo son deudores de la Municipalidad respectiva, a partir del 1º de enero de cada año, por la suma que determine el Catastro correspondiente. Para los efectos del cobro del impuesto, cada año empezado se tendrá por concluido y cada fracción de año por año entero.

Desde cuando son deudores los contribuyentes

xi) Los contribuyentes están obligados a pagar sus cuotas en la Tesorería Municipal co-

Pago del impuesto



responsdiente, sin esperar ser requeridos por el Tesorero para el pago. El pago que se verificare en el mes de enero tendrá un descuento del 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub> sobre la cuota; en el mes de febrero, del 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; en el mes de marzo, del 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; en el mes de abril, del 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; en el mes de mayo, del 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; en el mes de junio, del 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. A partir del 1<sup>o</sup> de julio de cada año, procederán los Tesoreros Municipales, al cobro del impuesto por la jurisdicción coactiva, y, sobre la suma que a cada contribuyente le corresponda pagar, cobrarán un recargo del 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, durante el mes de julio; del 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, durante el mes de agosto; del 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, durante el mes de septiembre; del 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, durante el mes de octubre; del 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, durante el mes de noviembre y del 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, durante el mes de diciembre. Las cuotas que no pagaren dentro del año correspondiente, tendrán un recargo del 25<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Los recargos de que trata este inciso se cobrarán además de las costas que causare la recaudación por la coactiva.

xii) Para los efectos de la presente Ley, se denominan predios rústicos los destinados al cultivo o a la explotación pecuaria o florestal, aún cuando estén situados dentro del territorio de las parroquias declaradas urbanas por Ordenanzas Municipales; y predios urbanos, los edificios para residencia o para el comercio o la industria, que estén situados dentro de la misma área.

Predios rústicos  
(Reformado)

Los edificios destinados a residencia de propietarios, arrendatarios o administradores agrícolas; a habitación temporal o permanente de empleados, sirvientes o peones; o a graneros, establos, oficinas, fábricas u otros menesteres de la explotación agraria, formarán parte integrante del predio Rústico para los efectos del avalúo y de la imposición.

Los jardines y parques, lo mismo que los solares no edificadas e incultos que se encuentren dentro de parroquias declaradas urbanas serán considerados como predios urbanos;



y los terrenos dedicados, de uno u otro modo, a los menesteres de la industria o del comercio o dependientes de manera inmediata e indispensable de un Predio Urbano, formarán parte integrante de dicho Predio Urbano, para los efectos del avalúo y de la imposición.

Los edificios pertenecientes a Predios Rústicos podrán ser calificados como Predios Urbanos, para los efectos del avalúo y del impuesto, cuando se encuentren dentro de los límites de parroquias declaradas urbanas y su valor exceda al de la tierra no edificada adherente al mismo predio; o cuando se exploten como residencias o locales para el comercio o la industria, o en cualquier otra forma ajena a la explotación agraria. En estos casos, si el valor de la parte no edificada del predio no excede del 10% del valor de la parte edificada, se considerará dicha parte no edificada como parte integrante del Predio Urbano; pero si excede del dicho diez por ciento, se hará constar en los Catastros la parte edificada como Predio Urbano y la parte no edificada como Predio Rústico. (1)

(1)

ISIDRO AYORA

Presidente Provisional de la República

CONSIDERANDO

«Que el inciso xii) del Art. 2º. de la Ley de 30 de enero de 1926, ha dado lugar a diversas interpretaciones en la aplicación del Impuesto predial Urbano,

R. O. N.º. 554 de  
31 de enero de  
1928

DECRETA:

«Art. 1º. El inciso xii) del Art. 2º. de la Ley de 30 de enero de 1926, dirá así:

«Para los efectos de la presente Ley, se considerarán predios urbanos los situados dentro de las ciudades y aldeas compactas.

«Para el efecto de la aplicación del impuesto predial la demarcación del sector urbano se practicará por



## ARTICULO TERCERO

## IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

i) Las Municipalidades cobrarán hasta el diez por ciento sobre el valor del producto bruto de la venta de entradas a las funciones de teatro, cinematógrafos, conciertos, carreras de caballos y demás espectáculos y diversiones públicas;

Espectáculos que se gravan

comisiones mixtas integradas por los Delegados de los Municipios y por representantes de los intereses fiscales.

«El radio de los servicios municipales, como los de agua potable, luz, aseo de calles, etc., servirá de criterio principal para la demarcación que debe conciliar, en lo posible, los intereses fiscales y municipales.

«En los cantones cabeceras de provincia, pagarán el impuesto urbano los predios comprendidos dentro de la demarcación urbana y los divididos por la demarcación cuando la tercera parte o más de la extensión total del predio, se encuentre dentro del sector urbano. Los casos de duda serán resueltos por el Ministerio de Hacienda.

«En los demás cantones de la República, pagarán al Municipio los predios comprendidos dentro de la demarcación urbana y los divididos por ella, cuyas casas valgan la mitad o más del valor total del predio. (Reformado)

«ISIDRO AYORA

Presidente Provisional de la República,

DECRETA:

las siguientes reformas al Decreto expedido el 28 de enero del año en curso:

«Art. 1°. El inciso sexto del Art. 1°. del citado Decreto, dirá: «En los demás cantones de la República, tanto en las parroquias urbanas como en las rurales, pagarán al Municipio los predios comprendidos dentro de la demarcación urbana y los divididos por ella, cuyas casas valgan la mitad o más del valor total del predio.

«Art. 2°. Derógase el penúltimo inciso del propio artículo 1°. antes citado.

«Art. 3°. Encárguense los Ministros de Hacienda y de Municipalidades de la ejecución del presente Decreto.

REFORMA  
En la reproducción de Leyes de Impuestos Municipales, hecha en el R. O. No. 11, de 17 de diciembre de 1932, no se ha hecho constar este Decreto G. M. No. 23 de 1928



ii) Las Municipalidades reglamentarán la fiscalización y cobro del impuesto estatuido en el inciso precedente, determinando, a su juicio, las entradas que no se han incluir en el cómputo para el impuesto por estar destinadas a funcionarios públicos, u otros análogos.

Reglamentación

«Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a diez de marzo de mil novecientos veintiocho.

*f.) Isidro Ayora.*

El Ministro de lo Interior y Municipalidades,

*f.) Julio E. Moreno.*

El Ministro de Relaciones Exteriores, encargado de la Cartera de Hacienda,

*f.) Homero Viteri L.»*

«Las parroquias que estén fuera de la demarcación urbana, se considerarán rurales para el efecto del impuesto.

(Derogado)  
Art. 2º. del Decreto que antecede

«Los Municipios atenderán a todos los servicios que les corresponda según la ley; pero en lo que se refiere a caminos, su obligación se limitará al sector urbano de los cantones.

«Art. 2º. Mientras se practique la demarcación indicada en el artículo anterior, los predios comprendidos dentro de una zona declarada urbana por Ordenanzas Municipales, serán gravados en la siguiente forma:

«a) El impuesto predial rústico gravará los terrenos destinados a la explotación agrícola, pecuaria o florestal; así como los edificios destinados a residencia o menesteres de tales explotaciones, cuyo valor sea inferior al de los terrenos no edificados pertenecientes al mismo predio; y

b) El impuesto predial urbano gravará los edificios sea cual fuere su naturaleza, con excepción de los comprendidos en el numeral anterior; los jardines, parques y pertenencias no destinados a la explotación agrícola, pecuaria o florestal.

«Art. 3º. Los elementos valorables que no deben formar parte integrante de los predios rústicos, según



## ARTICULO CUARTO

## MATRÍCULAS Y PATENTES

i) Para ejercer los negocios que en este artículo se expresan, los interesados en ellos están obligados a inscribirse en el Registro que al efecto abrirá cada Municipalidad, dentro de los primeros treinta días de cada año y dentro de los primeros treinta días siguientes al principio de sus operaciones de negocios.

ii) Hecha la inscripción, el Tesorero Municipal conferirá las respectivas patentes que autoricen, mes por mes, a ejercer los negocios para los cuales se hubieren registrado las inscripciones, previo el respectivo pago, conforme a las determinaciones siguientes:

Patentes

a) De diez a cincuenta sucres mensuales pagarán los que venden licores y bebidas fermentadas extranjeros, en casas, almacenes, clubs,

Gravamen

la nueva Ley de Impuesto Territorial, tampoco lo formarán de los predios urbanos.

«Art. 4º. Encárgase al Ministro de Municipalidades y al de Hacienda la ejecución del presente Decreto, que regirá desde la fecha de su promulgación.

«Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a veintiocho de enero de mil novecientos veintiocho.

f.) Isidro Ayora.

El Ministro de lo Interior y Municipalidades,

f.) Julio E. Moreno.

El Ministro de Hacienda,

f.) A. Gómez Jaramillo.»



sociedades, hoteles, tiendas, bodegas, covachas, cantinas, pulperías, etc., etc., según la categoría que será determinada por la Municipalidad correspondiente;

b) Los agentes de Aduana, los corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías y de cualquier otro negocio de esta índole, pagarán de treinta a cincuenta sucres mensuales. (1)

(Reformado)  
Agentes de aduana, etc.

c) Las casas de préstamos sobre prendas y retroventas por cada mes pagarán de treinta a cien sucres.

Casas de préstamo

d) Los salones de billar pagarán mensualmente a razón de diez sucres por cada mesa;

Billares

e) Los dueños o empresarios de vehículos pagarán también mensualmente, como sigue:

Vehículos

(1) El Congreso de la República del Ecuador

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL  
CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades de la República necesitan de rentas propias y suficientes para poder cumplir con los fines que les prescribe la Ley de Régimen Municipal;

R. O. No. 496 de  
10 de diciembre  
de 1930

DECRETA:

Art. 1º. La letra b) del numeral ii) del Art. 4º. de la Ley que crea fondos para los Municipios, dictada el 30 de enero de 1926, dirá:

«b) Los Agentes de Aduanas, los corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías y cualquier otro negocio de esta índole, pagarán de cinco a cien sucres mensuales, conforme a la reglamentación que al efecto harán las Municipalidades.

Art. 2º. ....

PALACIO DE GOBIERNO. En Quito, a 10 de diciembre de 1930. Sancionado por el Ministerio de la Ley. El Subsecretario de Gobierno. f). U. Oviedo.»



	En las ciudades cuya población no pase de 50.000 habts.	En las ciudades cuya población exceda de 50.000 habts.	
Por cada automóvil de servicio privado .....	S/. 10,00	S/. 10,00	(Reformado)
Por cada automóvil de servicio público .....	» 5,00	» 10,00	
Por cada autocamión de servicio público o privado .....	» 6,00	» 8,00	
Por cada coche de servicio pri- vado .....	» 5,00	» 5,00	
Por cada coche de servicio pú- blico .....	» 2,00	» 3,00	
Por cada birloche.....	» 2,00	» 3,00	
Por cada carreta de tracción aní- mal .....	» 3,00	» 5,00(1)	

(1) El Congreso de la República del Ecuador,

CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades de la República necesitan de rentas propias y suficientes para poder cumplir con los fines que les prescribe la Ley de Régimen Municipal;

ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

DECRETA:

Art. 2°. La primera parte de la letra e) de los mismos numeral y artículo, dirá:

«e) Los dueños o empresarios de vehículos que los tuvieran en servicio pagarán, mensualmente, el siguiente impuesto a juicio de la respectiva Municipalidad:

—Por cada automóvil de servicio privado o público, de S/. 5,00 a S/. 10,00;

—Por cada autobús con neumáticos, de S/. 8 a S/. 12;

—Por cada autocamión hasta de una tonelada, de S/. 6 a S/. 8;

—Por cada autocamión hasta de dos toneladas, de S/. 8 a S/. 12;

—Por cada autocamión de más de dos toneladas, de S/. 10 a S/. 15;

—Por cada autocamión de llantas macizas, de cualquier tonelaje, de S/. 20 a S/. 30;

Registro Oficial  
igual al anterior



Los dueños o empresarios de Agencias funerarias pagarán por cada vez que salgan al servicio, sus carrozas y más vehículos, el siguiente impuesto:

Por cada auto-carroza .....	S/. 25,00	S/. 50,00
Por cada carroza de tracción animal de clase extra .....	» 25,00	» 50,00
Por cada carroza de tracción animal de clase primera .....	» 15,00	» 30,00
Por cada carroza de tracción animal de clase segunda .....	» 5,00	» 10,00

iii) La omisión en obtener la patente, en todos los casos que requiere esta Ley, será penada, en juicio verbal sumario, por el Comisario Municipal, con la multa de diez a cincuenta sucres, según la categoría de tales patentes. A este efecto los Agentes de Policía prestarán el auxilio que se les requiera para el cumplimiento de esta disposición.

Sanciones por no obtener la patente

## ARTICULO QUINTO

### TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES

i) Las Municipalidades cobrarán cinco sucres como tasa de rastro y transporte de carne por cada cabeza de ganado mayor que se sacrifique y de cuarenta centavos a dos sucres

Tasa de rastro

—Por cada coche de servicio público, de S/. 3 a S/. 5.

—Por cada coche de servicio particular, de S/. 5 a S/. 8;

—Por cada birlloche o faetón, de S/. 2 a S/. 5.

—Por cada carreta de tracción animal, de S/. 2 a S/. 8;

—Por cada motocicleta, de S/. 1 a S/. 3;

—Por cada motocicleta con carro lateral, de S/. 2 a S/. 4;

Los vehículos en tránsito no pagarán impuesto alguno, siempre que estuvieren matriculados en el lugar donde reside el dueño o está radicada la empresa de transporte a que pertenece.

Dado, etc.



por cada cabeza de ganado menor. En este último caso, el impuesto se cobrará cuando se estableciere este servicio en las casas de rastro.

ii) En las poblaciones que no tuvieran el servicio de transporte de carne, la tasa será de cuatro sucres por cada cabeza de ganado mayor.

iii) Autorízase a las Municipalidades para cobrar hasta treinta centavos por metro cúbico de agua potable a domicilio.

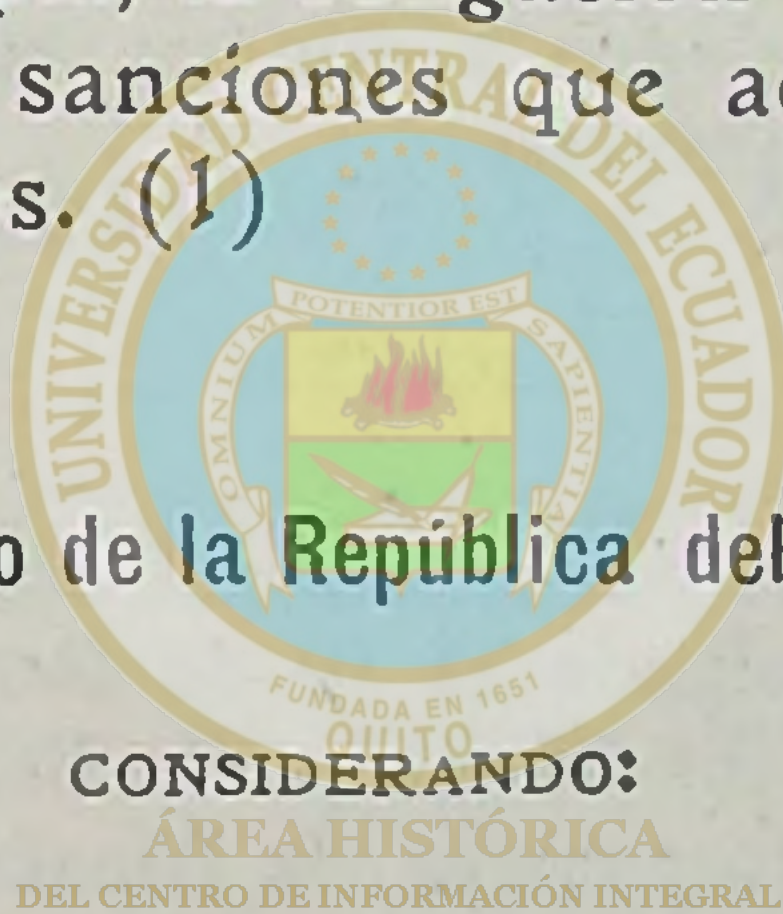
Agua potable

Pero el mínimun que se cobrará por el servicio de agua potable, será el de un sucre mensual aún cuando el consumo no llegare al número de litros correspondientes a ese valor.

iv) Autorízase a las Municipalidades para imponer a todas las casas, dentro del área del servicio de agua municipal, la obligación de usar dicho servicio, con las sanciones que acuerden los respectivos Concejos. (1)

Obligatoriedad  
del servicio de  
agua  
Tiene adición

(1) El Congreso de la República del Ecuador,



«Que las Municipalidades de la República necesitan de rentas propias y suficientes para poder cumplir con los fines que les prescribe la Ley de Régimen Municipal;

DECRETA:

.....  
Art. 3°. Después del Art. 5°, póngase el siguiente artículo:

## ARTICULO SEXTO

### OTROS FONDOS MUNICIPALES

«I. Además de los fondos señalados en los Arts. 2, 3, 4 y 5 de la misma Ley, son fondos municipales:

«a) El producto de los impuestos de Alcabalas, Registros y Anotaciones;

(Reformado)  
Decreto de 7 de  
diciembre de 1932



## ARTICULO SEXTO

## DISPOSICIONES GENERALES

- i) Además de los impuestos estatuidos en los artículos precedentes autorízase a las Muni- Autorización para imponer otros gravámenes

«El Congreso de la República del Ecuador,

## CONSIDERANDO:

«Que la Ley que crea rentas para los Municipios, modificatoria de la dictada el 30 de diciembre de 1926, y que se dictó el año de 1930 y se promulgó el 10 de diciembre del mismo año de 1930, ha sido interpretada en forma distinta a la que correspondía; tomando en cuenta el espíritu del Legislador y que ha sido aplicada en perjuicio de los Municipios; Reforma

## DECRETA:

«Art. 1º. La letra a) del número I del Art. 6º. de la expresada Ley promulgada el 10 de diciembre de 1930, que crea rentas para los Municipios, dirá: R. O. No. 11 de 17 de diciembre de 1932

«El producto de los impuestos de Alcabalas, Registros y Anotaciones, que se pagará al Municipio del Cantón en el cual esté ubicado el inmueble materia de la transacción gravada con estos impuestos;

«Cuando la escritura que cause estos derechos se otorgare en un cantón distinto del de la ubicación del inmueble, podrá consignarse ante el Tesorero Municipal del lugar del otorgamiento, para que este funcionario los remita íntegramente y en el término de la distancia a la Tesorería Municipal correspondiente, bajo la multa de 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub> por cada día de retardo.

«Si en una sola escritura que cause todos o algunos de los citados impuestos, se tratare de inmuebles situados en diversos cantones, la distribución se hará proporcionalmente entre ellos, tomando como base los avalúos catastrales o la relación entre esos avalúos y el precio fijado en la escritura, cuando éste excediere de aquellos.

«Los derechos de Registro y Anotación que afecten a contratos en que no estén comprendidos inmuebles, se pagarán en el lugar del otorgamiento de la escritura.



cipalidades para imponer los gravámenes comprendidos en la Ley de Régimen Municipal y en otras Leyes generales o especiales, que no estén especialmente derogadas por el artículo primero de esta Ley.

ii) Aclárase que queda en vigencia el impuesto a las canoas vivanderas y a las embarcaciones cargadas, que cobran las Municipalidades del Litoral. Canoas vivanderas

iii) Facúltase a las Municipalidades para recaudar por entregas mensuales, trimestrales o semestrales los impuestos anuales susceptibles de subdivisión cuando lo estimare conveniente, en interés del Tesoro Municipal o de los contribuyentes. Subdivisión en la recaudación de impuestos

«Dado en Quito, Capital de la República, a 7 de diciembre de 1932.

El Presidente de la Cámara del Senado,

f.) *Alberto Guerrero M.*»

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

«b) El producto del impuesto de veinte centavos sobre cada cajetilla de cigarrillos extranjeros que se vendan en el cantón que se crea por este Decreto; y

«c) Cincuenta centavos sobre cada litro de aguardiente de cincuenta y seis grados Gay-Lussac, que se consuma en el respectivo cantón. (Reformado)

El Congreso de la República del Ecuador,

CONSIDERANDO:

«Art. 2º. La letra c) del mismo Nº. I del Art. 6º., dirá:

«Cincuenta centavos sobre cada litro de aguardiente hasta de cincuenta y seis grados Gay-Lussac, que se consuma en el respectivo cantón; y diez centavos más por cada diez grados de exceso.»

Dado, etc.

R. O. N°. 11 de  
17 de diciembre  
de 1932



iv) Todos los impuestos de que trata esta Ley, se cobrarán en las parroquias urbanas y rurales de cada cantón.

Donde se cobran los impuestos

v) Las Municipalidades reglamentarán el cobro de los impuestos estatuidos en la presente Ley y también la formación de los Catastros respectivos.

Reglamentación del cobro

«II. Los Tesoreros Municipales recaudarán directamente los impuestos señalados en la letra a); y, en cuanto a los indicados en las letras b) y c), los Gerentes Provinciales del Estanco de Alcoholes y Tabaco, remesarán quincenalmente a los Tesoreros Municipales las cantidades correspondientes de acuerdo con el número de cajetillas de cigarrillos extranjeros y el número de litros de aguardientes vendido, sin descuento alguno.

«III. Con los fondos de que habla este artículo se atenderá, de preferencia a las obras de canalización, agua potable, luz eléctrica e higiene pública.

«IV. La Contraloría, a requerimiento de las respectivas Municipalidades, impondrá a los Gerentes de los Estancos de Alcohol y Tabaco, en cada caso de infracción, una multa igual al duplo de lo que éstos deban entregar a los Tesoreros Municipales, en cumplimiento de lo dispuesto en el N°. II de este artículo, sin perjuicio de condenarles al pago de intereses, a razón del 12 por ciento anual, sobre las cantidades indebidamente retenidas.

Promulgado en el R. O. N°. 496, de 10 de diciembre de 1930

«Art. 4°. En el Presupuesto de cada año se destinará una suma no menor de quince mil sucres, ni mayor de veinte mil sucres, como subvención para el Municipio de Santa Elena.

«Art. 5°. Las obras de agua potable, canalización y otras urbanas que ha ejecutado el Gobierno en cada cantón, son de propiedad municipal, debiendo ellas ser administradas por las respectivas Municipalidades, con excepción de las obras de Saneamiento de Guayaquil y las demás ejecutadas por contratos o que consten en Decretos Especiales, las que se regirán por los respectivos contratos o decretos.

«Art. 6°. Las Municipalidades quedan ampliamente facultadas para reglamentar todo lo relacionado con el cobro de los impuestos establecidos por la presente Ley.

«Art. 7°. Deróganse todas las Leyes generales y especiales que se opongan a la presente.



vi) Fuera de los casos cuya sanción se puntualiza especialmente en esta Ley, las Municipalidades establecerán multas de DIEZ A QUINIENTOS SUCRES para las demás infracciones.

Multas

vii) Todas las sumas que el Estado pague a las Municipalidades y las que recauden éstas directamente en concepto de impuestos, subvenciones, etc., serán ingresos comunes de la Caja Municipal.

Ingresos comunes

viii) Prohíbese la enajenación del suelo urbano municipal; pero las Municipalidades podrán dar en arrendamiento dicho suelo urbano de su propiedad, por períodos que no excedan de setenta y cinco años, mediante contratos, previa subasta pública, con el objeto de que los solares arrendados se dediquen a edificaciones, cuyos planos, costo y condiciones detalladas se especificarán en los respectivos contratos; y será estipulación especial y esencial que a la espiración del período de arrendamiento se entregue a la Municipalidad los edificios construídos, en perfecto estado de conservación y uso. Facúltase a las Municipalidades para hacer estos arrendamientos a Instituciones de Beneficencia o de utilidad social, a título gratuito, mediante Ordenanzas nominativas y motivadas.

Prohibición de enajenar el suelo urbano municipal

Art. 8°. El presente Decreto regirá desde el 1° de enero de 1931.

«Dado en Quito, Capital de la República, a 26 de noviembre de 1930.

El Presidente del Congreso,

f.) A. Baquerizo Moreno.

El Secretario del Congreso,

f.) Gonzalo Escudero.

Palacio de Gobierno, en Quito, a 10 de diciembre de 1930. Sancionado por el Ministerio de la Ley. El Subsecretario de Gobierno. f.) V. Oviedo.»



Sólo en casos excepcionales los Municipios podrán proceder a la venta de sus propiedades inmuebles, con sujeción a los requisitos determinados en la Ley de Régimen Municipal. Al solicitar la respectiva autorización, se acompañará informes del Jefe Político y del Concejo Cantonal con indicación de los motivos que obliguen a la venta y el plano y avalúo correspondientes.

Excepciones

ix) Deróganse las disposiciones de Leyes o Decretos generales o especiales que impongan gravámenes o cuotas sobre rentas o fondos municipales para objetos fiscales de cualquiera naturaleza, y, en lo sucesivo, quedan las Municipalidades eximidas del pago de todo gravamen o cuota sobre sus rentas, fondos o propiedades, excepto en el caso de que estas últimas estuviesen arrendadas.

Derogaciones

x) No podrá extenderse escrituras de venta, permuta u otras que impliquen transmisión de dominio o que establezcan gravamen sobre la propiedad, o cancelación de dichos gravámenes sin el certificado detallado de estar pagados los impuestos municipales, hasta el año inclusive de la fecha de las respectivas escrituras en la que se determinará igualmente la parroquia en que está ubicado el inmueble, la carrera y el número de orden que lo distinga.

Prohibición de extender escrituras sin antes pagarse los impuestos

xi) En caso de remate voluntario o forzoso, se pagarán de contado y de preferencia los impuestos relacionados, en la forma expresada en el inciso anterior. Los Escribanos que protocolizaren el auto de adjudicación de los inmuebles rematados, sin exigir la presentación de las cartas de pago, o que infringieren lo dispuesto en el inciso precedente, serán penados por los Jefes Políticos, en juicio verbal sumario, con la multa de ciento a quinientos sucres en cada caso, y a petición o denuncia de los Tesoreros Municipales.

Remates voluntarios y forzosos

xii) Cuando los Concejos Cantonales estimen necesario, los Tesoreros Municipales tendrán un Secretario para su despacho, rentado

Secretarios de Tesorería



por la respectiva Municipalidad, el que actuará, además en los juicios de jurisdicción coactiva y en todo aquello en que tales Tesoreros, actuaren como jueces.

En caso de excusa legal del Secretario Titular, para los juicios de jurisdicción coactiva, se nombrará un Secretario ad-hoc, quien percibirá, en los asuntos de mayor cuantía, los derechos que determina la Ley de Aranceles Judiciales, para los Escribanos; y en los demás, la mitad.

xiii) Los Alguaciles y Recaudadores son responsables pecuniariamente ante los Tesoreros Municipales por los valores de las cartas o especies que éstos los entregaren para la recaudación. En caso de desfalco de las cantidades cobradas o falta de las cartas o especies recibidas para el cobro, dichos Tesoreros podrán ordenar la prisión inmediata de los Alguaciles y Recaudadores, hasta que paguen la cantidad adeudada o den fiador llano pagador.

Alguaciles y Recaudadores

xiv) Por los remates municipales no se pagará impuesto de gravamen alguno, debiendo los rematistas abonar solamente los derechos que correspondan al Escribano.

Remates municipales

xv) Deróganse todas las disposiciones de Leyes o Decretos Generales o Especiales que se opongan a lo estatuido en la presente Ley.

Derogación de Leyes y Decretos

#### DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los recargos previstos en el inc. xi) del Art. 2º de esta Ley, no regirán sino desde el 1º de enero de 1927; y para la debida aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en el citado inciso, las Municipalidades tendrán listos los respectivos Catastros y los exhibirán al público antes del treinta de noviembre del año en curso.

DADO en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 30 de enero de 1926.

f.) H. Albornoz, Vocal Director y Ministro de Hacienda.—Julio E. Moreno, Vocal Minis-



tro de lo Interior y Encargado de la Cartera de Guerra.—Homero Viteri L., Vocal Ministro de Relaciones Exteriores y Encargado de la Cartera de Instrucción Pública.—Isidro Ayora, Vocal Ministro de Previsión Social y Trabajo.—P. L. Núñez, Secretario General.

PUBLIQUESE.—f.) P. L. Núñez, Secretario General.

(Ley promulgada en el Registro Oficial N°. 170 de febrero de 1926).

### CAPITULO III

#### REFERENCIAS A LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Art. 6° de la Ley de Impuestos Internos: IMPUESTO A LA RENTA DEL TRABAJO SIN CONCURSO DEL CAPITAL. (Decreto Supremo de 21 de diciembre de 1925).

Al Art. 1º. I) No. 2

#### CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Art. 156. Quedan prohibidos los juegos de azar. La Ley los determinará.

Al Art. 1º. I) No. 4

#### RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

«A la consulta del Ministro de lo Interior y Policía, contenida en nota N°. 345, de 17 de febrero de 1930, acerca de los siguientes puntos relacionados con los juegos de azar:

1º. El Ejecutivo, sobre quien gravita la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley y cuya potestad reglamentaria tiende a ampli-

R. O. No. 574 de 14 de marzo de 1931



ficarse a medida de la difusión y la complejidad de la función administrativa, puede hacer uso de la función señalada en el N°. 2 del Art. 83 de la Carta Política y, consiguientemente, dictar un Reglamento Especial con disposiciones que permitan hacer práctica la prohibición constitucional de los juegos de azar?

«RESOLUCIÓN. El Ejecutivo, en este caso, no puede hacer uso de la atribución señalada en el N°. 2 del Art. 83 de la Carta Política del Estado, porque, sencillamente, no habiendo ley posterior a la disposición constitucional, nada puede reglamentarse. (El N°. 2 del Art. 83 dice: «Son atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo: Sancionar y promulgar las leyes y Decretos del Congreso y dar, para su ejecución, reglamentos que no los modifiquen ni alteren).

2°. En dicho Reglamento, que vendría a suplir la falta de la ley secundaria, prevista en el Art. 156 de la Constitución y que, por lo mismo, tendría, en primer término, que definir lo que ha de entenderse por juegos de azar y luego determinar éstos, podría consultarse alguna sanción para los infractores?

RESOLUCIÓN: Comprendida dentro de la anterior.

3°. Si no fuera procedente dictar tal Reglamento, ¿qué autoridad estaría llamada a determinar si un juego es o no de azar; qué norma habría de seguirse para tal determinación, tanto más compleja, cuanto es harto difícil encontrar el límite preciso entre un juego de azar o de suerte y los de habilidad, destreza e ingeniosidad, en los cuales media muchas veces envite y la suerte juega rol importante; qué pena deberá imponerse al infractor y cuál sería el procedimiento para la aplicación de aquella?

RESOLUCIÓN: Con relación al tercer punto: si bien es cierto que no hay ley ni reglamento posterior a la disposición constitucional, existen las disposiciones del Decreto Supremo de 21 de agosto de 1926, publicadas en el Registro



Oficial N<sup>o</sup>. 117 de 26 de agosto del mismo año, en el que determina, por lo menos, algunos de los juegos que no son de azar. Como ya se indica, de las disposiciones de este decreto y de la enumeración que contiene, se deduce cuales juegos no están prohibidos. Con esta enumeración ya tienen las autoridades una norma de procedimiento que pueda aplicarse hasta que el próximo Congreso dicte la Ley respectiva. El Código Civil al tratar de la interpretación de la leyes, aún permite que, a falta de la Ley, se apliquen las que existan sobre casos análogos, y ahora que no se trata de analogía, sino de una ley que no ha sido derogada y referente a la misma materia, muy bien puede ser aplicada. Los Arts. 1<sup>o</sup>., 9<sup>o</sup>. y 293 del Código Penal, así como el 42 del Código de Policía encuadran perfectamente en esta interpretación, pues si están prohibidos los juegos de azar, nadie puede establecer casas de esa clase de juegos y ninguna autoridad puede condeder permiso. Los que de hecho tuvieren casas de juegos prohibidos, caen bajo las sanciones establecidas en los artículos ya citados. Por lo expuesto, dictaminó el Consejo en el sentido de que hasta que se dicte la ley que determine cuales son los juegos de azar, debe aplicarse el Decreto Supremo de agosto de 1926 y las disposiciones citadas del Código Penal y de Policía.

## CÓDIGO PENAL

Art. 1<sup>o</sup>. Son crímenes, delitos y contravenciones, los hechos imputables que están castigados por las leyes penales. Juegos de azar

Art. 9<sup>o</sup>. Para que una infracción pueda ser castigada, es menester que la ley la haya declarado punible, con anterioridad a la perpetración del hecho.

Art. 293. Los que establezcan casas o mesas de juegos prohibidos, sin permiso de la autoridad respectiva, serán castigados con pri-



sión de tres a seis meses, y multa de ciento a cuatrocientos sucres.

Los culpados podrán, además, ser puestos bajo la vigilancia especial de la autoridad, por seis meses a lo menos, y un año a lo más.

En todo caso, serán comisados los fondos y efectos que se hubieren encontrado expuestos al juego, así como los muebles, instrumentos, utensilios y aparatos destinados al servicio de los juegos.

Serán castigados con prisión de cuatro meses a un año, y multa de ciento a cuatrocientos sucres, los que, en las casas de juego que corren a su cargo, consientan a los hijos de familia, dependientes de almacenes o de otros establecimientos de comercio o industria, sirvientes domésticos, o individuos notoriamente vagos.

CÓDIGO DE POLICIA

De las contravenciones de cuarta clase:

Art. 42. Serán castigados con multa de veintitrés a treinta sucres y prisión de cinco a siete días, o con una de estas penas solamente:

Nº. 10. Los que establecieren casas de juego, sin permiso de la Autoridad; y los que concurrieren a dichas casas.

LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

Son atribuciones del Concejo:

Art. 17. Nº. 26. Dictar Reglamentos de juego y de espectáculos públicos permitidos por la Ley.

Ordenanza que reglamenta la lidia de gallos.  
Gaceta Municipal Nº. 60 de 1933.

Ordenanza que grava los espectáculos públicos que se den en el cantón. Gaceta Municipal Nos, 45 y 46, de noviembre y diciembre de 1931.



## LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

Son atribuciones del Presidente:

Al Art. 1º. I) No.  
4 inc. 2  
Multas

Art. 45. N° 28. Conminar a todos los empleados municipales omisos en sus deberes, con las multas de cinco a cincuenta sucres.

Art. 82. N° 2. Son rentas municipales:

El producto de las multas impuestas en el cantón por contravención a las Ordenanzas y Reglamentos Municipales y el de las multas que se impongan conforme al Código de Policía y al de Sanidad.

Art. 82. N° 3. El producto de las multas que se impusiere a los Concejales y demás empleados de la Municipalidad.

## ORDENANZA DE PRESUPUESTO (1934)

Art. 33. Las faltas de los empleados municipales serán sancionadas en la forma que establece el Art. 45, N° 28 de la Ley de Régimen Municipal; para este efecto, los Jefes de Oficina remitirán, quincenalmente, una razón detallada de la asistencia de sus subalternos.

La misma sanción se aplicará a los Jefes de Oficina que omitieren el cumplimiento de este último deber.

## CÓDIGO DE POLIGIA

Art. 30. Las autoridades de Policía mencionadas en la disposición precedente, darán razón al Tesorero Municipal, en el mismo día de la pena, de la multa que hubiesen impuesto.

(Reformado)  
Decreto Supremo  
de 30 de mayo de  
1927

El producto de las multas destinarán las Municipalidades, en el respectivo Cantón:

- a) Para alimentación de los presos sindicados de crimen o delito;
- b) Para la conservación y reparación de cárceles existentes; y



c) Para la construcción de cárceles. (1)

(1) El Presidente Provisional de la República,

DECRETA:

Las siguientes reformas al Código de Policía:

R. O. No. 347 de  
30 de mayo de  
1927

Art. 1º. El Art. 30, dirá: «Las Autoridades de Policía mentadas en la disposición que antecede, darán aviso al Tesorero Municipal, en el mismo día del juzgamiento, de la multa que hubiesen impuesto.

El producto de las multas impuestas por las contravenciones de Policía destinarán las Municipalidades, en el respectivo cantón:

a) Para la alimentación de los presos sindicados de crimen o delito, para la de los condenados a prisión correccional por delito y para la de los penados por contravenciones de Policía;

b) Para la conservación y reparación de las cárceles existentes;

c) Para la construcción de cárceles.

Si el producto de las multas no fuere suficiente, los Ayuntamientos atenderán los servicios precedentes con sus rentas comunes.

Art. 2º. El Art. 33, dirá: «Los condenados a prisión, de conformidad con las disposiciones de este Código, sufrirán la pena en las cárceles de sus respectivas parroquias o cantones; mas, en caso de faltar éstas o de no tener las debidas seguridades cumplirán la prisión en la cárcel de la capital de provincia, pero entonces los gastos de alimentación de los contraventores que son remitidos a aquella, correrán de cuenta de la Corporación Municipal en cuya circunscripción territorial se perpetró la infracción. Esto mismo se observará con los condenados a prisión correccional por delito y los sindicados de crimen o delito que son enviados a la cárcel de la Capital de la provincia.

La Municipalidad remitente quedará relevada de la obligación de atender a la alimentación de los penados por contravenciones de Policía, de los condenados a prisión correccional por delito y de los sindicados de crimen o delito, si la del cantón Cabecera de Provincia percibe el producto del trabajo de aquellos.

Las Corporaciones Municipales determinarán en el respectivo Reglamento, la distribución e inversión que ha de darse al jornal de dichos presos, cuidando de señalar un porcentaje razonable para que éstos puedan atender a sus necesidades y a las de su familia, así



## CÓDIGO DE POLICÍA SANITARIA

Arts. Nos. del 23 al 30; del 35 al 43; y del 45 al 61. R. O. No. 227 de 18 de julio de 1932

## REGLAMENTO DE LA LEY DE SANIDAD

Art. 17. R. O. No. 243 de agosto. 1932

## REGLAMENTO DE HIGIENE MUNICIPAL

Art. 4º. R. O. No. 244 de agosto. 1932

## REGLAMENTO QUE SEÑALA LAS FUNCIONES DE LOS MÉDICOS MUNICIPALES

Arts. 5º y 6º. R. O. No. 245 de agosto. 1932

## CÓDIGO PENAL

Art. 52. Las multas por crímenes y delitos, pertenecen al Fisco; y serán impuestas individualmente a cada uno de los condenados por una misma infracción.

Las multas impuestas por contravenciones, pertenecerán al Fisco o a la Municipalidad, conforme a lo dispuesto en el Código de Policía.

La multa se cobrará por la vía de apremio real o personal. (Reformado)

como al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la infracción.

Art. 3º. El señor Ministro de lo Interior y Policía, Justicia, Municipalidades y Cárceles, encárguese de la ejecución de este Decreto,

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a treinta de mayo de mil novecientos veintisiete.

f.) Isidro Ayora.

El Ministro de lo Interior, Policía, etc.

f.) Julio E. Moreno.



(REFORMA: Decreto Legislativo de 25 de octubre de 1918: Art. 2º. En el Art. 1.021 (del C. de E. C.) del Código suprimanse:..... y del inc. 3º las palabras «Apremio personal»).

Art. 53. En caso de insolvencia del deudor de una multa, se reemplazará ésta con prisión de uno a cuatro meses, si la referida pena hubiese sido impuesta por crimen o delito; y de uno a seis días, si lo hubiese sido por contravención.

Esta pena subsidiaria se cumplirá en el establecimiento donde deba cumplir la pena principal impuesta por la sentencia; pero, si sólo se hubiese impuesto la multa, la prisión subsidiaria se asimilará a la correccional, o a la de Policía, según la naturaleza de la condena.

En todo caso, el condenado podrá librarse de la prisión, pagando la multa, con deducción de un sucre por cada día que hubiere estado preso; pero, no podrá eludir el apremio real, allanándose a sufrir la prisión.

ÁREA HISTÓRICA  
LEY DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO INTERIOR

Art. 113. Ninguna autoridad del orden político, administrativo y de Policía podrá percibir las multas que impusiere, bajo la pena de pagar el duplo de ellas, previo el juzgamiento por fraude. Cuando un funcionario público impusiere multas cuyo valor debe ingresar a las cajas fiscales, lo comunicará directamente, al Director de Ingresos, para los fines de la recaudación.

Multas  
Rentas fiscales

LEY ORGÁNICA DE HACIENDA

Arts. del 155 al 158.

Ordenanza que reglamenta el cobro del impuesto a los predios urbanos del Cantón. (Gaceta Municipal No. 13 de 15 de agosto de 1926).

Rentas fiscales  
Al Artículo 2º.



## LEY DE IMPUESTOS INTERNOS

Art. 3º.

## CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Al Artículo 2º.  
Nº. xi)

Art. 1.037. La jurisdicción coactiva se ejerce privativamente por los empleados de Hacienda pública a quienes encarga la Ley la recaudación de las rentas fiscales, como los Tesoreros y Colectores, los recaudadores de rentas y fondos destinados a la enseñanza, los administradores de hospitales, hospicios, lazaretos y demás establecimientos públicos de caridad, los colectores de rentas municipales, de cárceles y caminos.

Jurisdicción coactiva

Art. 1.038, Sí las obras contratadas por particulares con el Gobierno, Municipalidades, juntas de obras públicas, beneficencia, etc., no se realizaren dentro del plazo estipulado, se procederá a hacer efectivas las cauciones, pagos e indemnizaciones, por el trámite de la jurisdicción coactiva.

Art. 1.039.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Art. 1.040. La jurisdicción coactiva se reduce a exigir y hacer efectivo el pago de lo que se debe a los ramos expresados en el Art. 1.037; y su ejercicio estará sujeto a las formas prescritas en esta sección.

Arts. del 1.041 al 1.058.

Art. 1.059. Todas las autoridades civiles y militares están obligadas, bajo su más estricta responsabilidad, a prestar los auxilios que, para hacer efectiva la recaudación, les pidan los empleados y recaudadores que ejercen la jurisdicción coactiva.

Art. 1.060.

Al Artículo 2º.  
Nº. xii)

## LEY DE IMPUESTOS INTERNOS

Art. 3º. (Ley de 19 de diciembre de 1925). Predios Urbanos



## LEY DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL (1)

Art. 6°. (El artículo que se transcribe a continuación, sustituye al de la Ley de 26 de enero de 1928, según Decreto Supremo de 29 de setiembre del mismo año).

«*Definición de la propiedad rural.* Para los efectos de esta Ley la propiedad rural consiste en tierras, edificios, maquinarias e instalaciones de carácter industrial agrícola, y el ganado, situados fuera del radio urbano que fijen las comisiones mixtas demarcadoras de dichos sectores, de acuerdo con el Decreto Supremo de 28 de enero de 1928; así como los predios que, situados dentro de este sector, o divididos por él, se reputen rurales conforme al expresado Decreto.

«No se considerará como integrantes del predio rústico:

a) Las fábricas e instalaciones industriales que tengan por objeto la transformación de materiales que no provengan del propio fundo, aún cuando se encontraren establecidas en él; y,

b) Las fábricas e instalaciones destinadas a la industrialización de los productos agrícolas que provengan del predio, si el valor de dichas instalaciones y maquinarias representa los dos tercios o más del valor total del predio. En este caso los elementos valorizables prediales satisfarán el impuesto sobre la propiedad territorial, y la renta líquida de la explotación para el impuesto sobre la renta, previas las deducciones que, para computar el producto líquido, se establezcan en el respectivo Reglamento, debiéndose contar entre ellos el 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub> del valor reputado predial.

---

(1) Codificación de 26 de enero de 1928.



Ordenanza de Espectáculos Públicos. (Gaceta Municipal Nos. 45 y 46 de noviembre y diciembre de 1931, que se publicaron en un solo número). Esta Ordenanza deroga todas las anteriores.

Al Artículo 3º.  
Impuestos a los  
espectáculos pú-  
blicos

#### LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

##### Art. 83.

Ordenanza de 27 de febrero de 1926 y modificatoria de 24 de diciembre de 1930 (la primera publicada en la Gaceta Municipal N.º. 11 de marzo 31 de 1926; y, la segunda, en folleto especial editado por el Concejo).

Al Artículo 4º.  
Matrículas y Pa-  
tentes

REGLAMENTO MUNICIPAL para el funcionamiento de la Caja de Rastro. (Gaceta Municipal N.º. 52 de 1932).

Al Artículo 5º.  
Tasas por servi-  
cios municipales  
inc. i) y ii)

REGLAMENTO MUNICIPAL para el funcionamiento y organización de la Casa de Rastro. (Gaceta Municipal N.º. 53 de 1932).

ORDENANZA sobre Carnicerías (Tercenas). (Gaceta Municipal N.º. 13 de 1926).

#### RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO (1)

«El H. Consejo de Estado, en sesión del 4 del presente, después de considerar la consulta del señor Presidente del Concejo Cantonal de Celica, transcrita por el Ministerio de Gobierno y Municipalidades, en nota N.º 1.808, de 25 de setiembre próximo pasado, acerca de si la resolución dictada por el Concejo, declarando que no hay impuesto a la matanza de ganado, se refiere a las parroquias que no tienen camal, o existe el impuesto aún cuando haya camales,

(1) Publicada en el R. O. N.º. 28 de 19 de noviembre de 1931.



RESOLVIÓ en el sentido de que los Concejos Municipales pueden establecer y cobrar tasa por rastro y de transporte de carne en razón del servicio que prestan sobre esta materia, no pudiendo cobrarla cuando no tengan Casas de Rastro.

Ley de Alcabalas. Reglamento de Inscripciones y Registro. Al Artículo 6º.

## LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

A las disposiciones generales

Art. 84, Nos. del 1 al 8.

Art. 87.

Art. 88, Nos. del 1 al 5.

i)

## ORDENANZA DE PRESUPUESTO (1934)

Art. 23. El Tesorero, por medio del Re-caudador de Agua Potable, efectuará conjuntamente, EN LOS DIEZ PRIMEROS DIAS DE CADA MES, la recaudación de los impuestos municipales que se le encomendaren; pudiendo, desde el día 11, ejercer la coactiva contra los deudores morosos.

iii)

Art. 24. Las cartas que se emitieren para efectuar el cobro de los servicios e impuestos pertenecientes al Municipio, serán firmadas por el Jefe Político y el Tesorero Municipal, quienes podrán hacer uso del facsímil, si lo estimaren conveniente.

Art. 25. Los reintegros por impuestos y tasas indebidamente cobrados dentro del año económico en curso y cuya devolución ordenare el Concejo o su Presidente, se aplicarán a la misma partida que causó el ingreso y subtítulo de EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS. Los reintegros que se hicieren al Tesoro Municipal, se aplicarán a la misma partida de cuyo fondo se efectuó el egreso.



## LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

ii) y v)

Art. 89. La recaudación de las rentas podrá hacerse directa o indirectamente por asentamiento o por arrendamiento.

Asentamientos y arrendamientos

En el primer caso, el Tesorero pedirá al Concejo los Guardas o auxiliares necesarios, y si lo estimare conveniente, un Alguacil, que será nombrado por el Concejo y tendrá todas las atribuciones que se conceden a los Alguaciles según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 90. El asentamiento o arrendamiento se hará anunciándolo previamente al público, con veinte días de anticipación por lo menos, por la imprenta, si la hubiere, o por carteles que se fijarán en los sitios más públicos de las cabeceras de las parroquias.

Trámite

En dichos carteles y avisos se fijarán las bases del asentamiento o arrendamiento por cada Ramo.

Si faltare este anuncio, o no se hiciere durante el plazo señalado en este artículo será nulo el remate.

Cuando por dos o más veces se saque a licitación las rentas municipales el plazo será sólo de tres días.

Art. 91. Estos asentamientos o arrendamientos se verificarán en la primera quincena de diciembre de cada año, y podrá hacer el Concejo dichos remates por parroquias.

Tiempo de verificarse

Art. 92. Se tomará por base del remate el producto de cada ramo en el año anterior aumentado o disminuído prudencialmente por el Concejo.

Bases y posturas

No se admitirá postura alguna que no cubra la base ni podrán ser postores sino las personas que previamente hayan prestado fianza a satisfacción de los Miembros de la Junta que presida el remate, quienes serán solidariamente responsables, si dicha fianza resultare ineficaz.



Sí los postores no cubrieren la base, el Concejo, o la Comisión de Remates podrá modificarla.

Art. 93. Intervendrán en el asentamiento o arrendamiento, bajo pena de nulidad, el Presidente del Concejo, el Procurador y el Tesorero y se sentará el acta respectiva ante un Escribano Público, suscribiéndola con éste y el Asentista, los funcionarios nombrados.

Personas que intervienen

Art. 96. Para que pueda hacerse cualquiera inversión de las rentas municipales, es indispensable que el gasto esté consultado en la Ordenanza de Presupuesto y, si se tratare de una inversión extraordinaria e imprevista será necesario que el egreso se ordene por resolución expresa del Concejo o del Presidente, según los casos, con aplicación a la partida de GASTOS EXTRAORDINARIOS de la respectiva Ordenanza.

Inversiones de fondos municipales

Art. 97. Ni las Municipalidades ni los Tesoreros pueden dar en préstamo los fondos municipales, y los Concejales o el Presidente que hubieren ordenado el préstamo y el Tesorero que lo hubiere ejecutado incurrirán en una multa doble del monto del préstamo, la que será impuesta por el Ministerio de Municipalidades, mediante denuncia comprobada de cualquier ciudadano. Estas multas ingresarán a la Caja Municipal. Exceptúase el caso de donaciones a la Municipalidad para determinadas obras, con expresa condición de que sólo los frutos deban invertirse en ella.

Prohibición de dar en préstamo los fondos municipales

Todos los intereses que produzca la recaudación de las rentas y el depósito de las mismas ingresarán a la Caja Municipal, bajo la responsabilidad personal y pecuniaria del Tesorero y en los arqueos se tomará especial cuenta de ese renglón de ingresos.

Art. 98. Se prohíbe a las Municipalidades invertir parte alguna de sus rentas en diversiones o regocijos públicos a menos que una disposición legal autorice el gasto, o que se celebren aniversarios de los días en que los

Prohibición de invertir rentas en regocijos públicos



pueblos proclamaron su independencia o en que se trate de un homenaje a ecuatorianos ilustres.

También podrán invertir, en proporción a sus rentas y con autorización del Consejo Provincial respectivo las cantidades que prudencialmente acordaren para fines de beneficencia que reclamare alguna localidad del país.

#### LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

vili)

Arts. 70, 71, 73, 74, 76, 78.

Art. 79. Podrán las Municipalidades, previa autorización del Poder Ejecutivo, excluir del destino público alguno o algunos de sus bienes. En este caso, y también cuando naturalmente cesare el uso o servicio público a que estuvieren afectos dichos bienes, pasarán a figurar en la clase de los patrimoniales.

Bienes municipa  
les  
Bienes patrimo-  
niales

Art. 80. Los terrenos Municipales, esto es, la propiedad que de ellos tuvieron los Municipios, se comprobará por la posesión o títulos que existan y en lo demás, se atenderá a lo que disponga la Ley de Patrimonio Territorial del Estado.

Pruebas del do-  
minio municipal

#### LEY DE PATRIMONIO TERRITORIAL DEL ESTADO

Art. 8º. Serán considerados como pertenecientes al Estado todos aquellos terrenos que, además de no estar cultivados o explotados en manera alguna, no correspondan a los títulos de propiedad o a la cabida real y justa que deban tener; con excepción de los terrenos de comunidad y municipales, relativamente a los cuales la posesión será justo título de dominio, así no estuviere constituida por cultivos u otra clase de obras.

La posesión es  
justo título de do-  
minio para los  
Municipios

Art. 14. En todos los lugares de la República, en que se lo conceptuare necesario, se adjudicará a los Municipios una extensión conveniente de terrenos, para goce común de los

Adjudicación de  
tierras a los Mu-  
nicipios



habitantes, y para obras públicas municipales de toda clase. (1)

## CÓDIGO CIVIL

Arts. 578, 579, 581, 587.

Bienes nacionales

## LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL

Art. 59. El Tesorero, para entràr en posesión de su destino, prestará fianza personal o hipotecaria al Concejo por la cuantía que señale la Contraloría, sin perjuicio de que pueda ser aumentada por el Concejo, siendo responsables sus miembros si la caución resultare nula o insuficiente. Aceptada la fianza por el Concejo, se la remitirá a la Contraloría para que resuelva. El Presidente tendrá cuidado de que el Tesorero haya prestado la fianza para tomar posesión del cargo.

xiii)

Garantía que debe rendir el Tesorero

Art. 61. N.º. 4.º. El Tesorero responderá de lo no cobrado y debido cobrar, conforme a la Ley de Hacienda, debiendo sujetarse en sus obligaciones a lo que dispongan la misma Ley y los Reglamentos de Contabilidad que expida el Concejo.

Responsabilidad

El Tesorero, que forzosamente intervendrá en los remates de los impuestos municipales, será solidariamente responsable, con los demás Miembros de la Comisión de remates, por la falta, nulidad o insuficiencia de las fianzas rendidas por los asentistas.

Art. 63. El Tesorero depositará diariamente en la Institución Bancaria designada por el Concejo, todo el dinero que ingresare a la Caja Municipal, y no podrá tener en Caja sino el dinero de talla menor necesario para pagos inmediatos.

Depósito del dinero en los Bancos

(1) R. O. N.º. 467 y 482 de 1927.



Art. 65. El Tesorero cubrirá las órdenes de pago libradas por la respectiva autoridad, y, cuando el gasto ordenado no reúna los requisitos prescritos por los arts. 96 y 98, podrá salvar su responsabilidad, protestando contra la orden, hasta por segunda vez. En este caso, el responsable será quien insista en la orden a pesar del protesto.

Protesto de órdenes de pago

Los sueldos de los empleados se pagarán, de acuerdo con la Ordenanza Municipal, por quincenas vencidas.

Art. 68. Los Tesoreros Municipales pondrán al Presidente, el nombramiento como la remoción de los empleados de su inmediata dependencia, siempre que esos empleados deban recaudar fondos.

Remoción de empleados que manejan fondos

#### ORDENANZA DE PRESUPUESTO (1934)

Arts. 50, 51, y 52.

Art. 54. El Habilitado Pagador de Obras Públicas, para entrar a ejercer su cargo, rendirá fianza a satisfacción del Concejo, conforme con lo prescrito en la Ordenanza de 24 de febrero de 1923.

Caución de Habilitado Pagador

#### LEY ORGÁNICA DE HACIENDA

Art. 95. Los funcionarios, empleados o agentes del Gobierno, de las Municipalidades o de cualquiera otra entidad de derecho público, encargados de la recepción, custodia o inversión de fondos públicos o del manejo de propiedades públicas, están obligados a prestar caución a favor del Fisco, o de la Municipalidad o corporación respectiva, para el fiel cumplimiento de los deberes que les impusiere la Ley, y por la cuantía que señalare el Contralor General. En caso de duda y disputa, el Contralor General determinará si se debe o no prestar caución.

Funcionarios, empleados y agentes que deben rendir caución

También la darán el Director, el Subdirector y el Interventor de Ingresos.



Art. 96. La caución se extenderá no sólo a los actos del garantizado en el cumplimiento de los deberes específicos de su cargo, sino también al desempeño de cualesquiera otros deberes o comisiones que le sean legalmente confiados por razón de su empleo.

Límite de la caución

Arts. 98, 99 y 100.

Art. 101. Los Ministros de Estado, los Presidentes de las Municipalidades y demás administradores de entidades de derecho público, darán aviso al Contralor General de los destinos de su dependencia sujetos a caución.

Obligación de comunicar quienes están sujetos a caución

Arts. 102 al 115.

Trámite del juicio

Arts. 232, 233 y 234.

Registro de cauciones

#### CÓDIGO PENAL

Art. 225. Serán castigados con tres a seis años de reclusión menor los empleados públicos y toda persona encargada de un servicio público que hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, de piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren en su poder, en virtud o razón de su cargo.

Dineros públicos, privados, títulos, mobiliario

Si el abuso no excede de la fianza, se castigará al culpado con la mitad de la pena precedente.

Art. 226. Serán castigados con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubieren maliciosa y fraudulentamente destruido o suprimido documentos o títulos de que fueren depositarios, en su calidad de tales; o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo.

Destrucción o supresión de títulos y documentos

Art. 227.

Art. 228. Los empleados públicos y las personas encargadas de un servicio público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando percibir, exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por derechos, cuotas,

Exigir, recibir o percibir rentas, sueldos, etc. no debidos



contribuciones, rentas o intereses, sueldos o gratificaciones, serán castigados con prisión de un mes a dos años.

La pena será de prisión por uno a tres años, si la concusión ha sido cometida con violencias o amenazas.

Inc. 3º.....

Las infracciones previstas en el presente capítulo, serán castigadas, además, con multa de cuarenta a cien sucres; y con la restitución del duplo de lo que hubieren percibido.

Estas penas serán también aplicadas a los agentes o dependientes oficiales de los empleados públicos y de toda persona encargada de un servicio público, según las disposiciones arriba establecidas.

Agentes y dependientes de empleados públicos

Art. 229. El empleado público que, abiertamente o por medio de un acto simulado por él o por interpuestas personas, tome para sí, en todo o parte, finca o efecto en cuya subasta, arrendamiento, adjudicación, embargo, secuestro, partición judicial, depósito o administración, intervenga por razón de su cargo u oficio; o cualquiera de las personas referidas que entre a la parte en alguna negociación o especulación de lucro o interés personal que verse sobre las mismas fincas o efectos, o sobre cosas en que tenga igual intervención oficial, será castigado con una multa del seis al doce por ciento del valor de la finca o de la negociación.

Prohibición de tomar parte en subastas, arrendamientos, etc. en que por su cargo intervenga



## LIBRO SEGUNDO

Ordenanza que Reglamenta el cobro del impuesto a los Predios Urbanos del Cantón.—Referencias, Jurisprudencia.—Ordenanza que grava los espectáculos públicos que se den en el cantón.—Referencias.—Ordenanza que grava la venta de licores y bebidas fermentadas extranjeras; los agentes de aduana, corredores de valores fiduciarios, bienes raíces, de mercancías, casas de préstamos, billares, etc. (27 de febrero de 1926).—Ordenanza que reglamenta el cobro de los impuestos según la Ley de Autonomía Económica de los Municipios. (22 de diciembre de 1930).—Jurisprudencia.—Refundición de estas dos últimas Ordenanzas.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

### CAPITULO PRIMERO

#### ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS DEL CANTON

(G. M. N°. 13. 1926).

El Concejo Municipal de Quito,

en uso de la facultad que le conceden la Ley de Régimen Municipal y el inciso v) del Art. 6°. del Decreto expedido por la Junta de Gobierno Provisional el 30 de enero del presente año, y atento el oficio N°. 294, de 31 de mayo último, en el cual el señor Ministro de Muni-



cipalidades resuelve varias consultas que el I. Concejo le hiciera acerca de la inteligencia de algunas disposiciones del antedicho Decreto;

DECRETA:

La siguiente Ordenanza para el cobro del impuesto a los predios urbanos, establecido por Decreto Supremo de 30 de enero de 1926,

CAPITULO I

Art. 1º. De acuerdo con lo prescrito en los incisos I) y XII) del Art. 2º. y IV) del Art. 6º. del Decreto Supremo de 30 de enero de 1926, son predios urbanos, para el efecto del pago del impuesto:

Cuales son predios urbanos.

1º. Las casas y heredades edificadas para residencia dentro de la zona urbana de Quito, cabecera del Cantón y en las zonas consideradas como urbanizadas, de acuerdo con el Art. 14 de esta Ordenanza, de las parroquias rurales que constituyen el Municipio, como también los construídos para el comercio o la industria dentro de las mismas áreas;

Casas y heredades edificadas.

2º. Los jardines y parques y los solares incultos y no edificadas que se hallen dentro de las parroquias declaradas urbanas;

Jardines y parques.

3º. Los terrenos dedicados de un modo u otro a los menesteres de la industria y del comercio y dependientes de manera inmediata e indispensable de un predio urbano, formarán parte integrante de dicho predio, para los efectos del avalúo y de la imposición; y

Terrenos para industria y comercio.

4º. Los edificios pertenecientes a predios rústicos que se encuentren dentro de los límites de las parroquias declaradas urbanas, si su valor excede al del terreno no edificado que adhiere al mismo predio; o que no existiendo esta relación de valor se exploten como residencia o locales sea para el comercio, la industria o en

Edificios pertenecientes a predios rústicos en el límite urbano.



cualquiera otra forma ajena a la explotación agraria.

En los casos que contempla el número precedente, si el valor de la parte no edificada del predio no excede del 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> de la parte edificada, se considerará dicha parte no edificada como parte integrante del predio urbano; pero si excede de dicho 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, en los Catastros constará la parte edificada como predio urbano y la no edificada como rústico.

Art. 2º. No son predios urbanos los destinados al cultivo o a la explotación pecuaria o florestal aún cuando estén situados dentro del territorio de las parroquias declaradas urbanas por la Ordenanza Municipal.

Cuales no son predios urbanos.

Art. 3º. Tampoco son predios urbanos los edificios destinados para la residencia del propietario, arrendatario o administrador agrícolas; para habitación temporal o permanente de empleados, sirvientes o peones; para graneros, establos, oficinas, fábricas u otros menesteres de explotación agraria que forman parte integrante de un predio rústico.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

CAPITULO II

DEL IMPUESTO

Art. 4º. El impuesto municipal con que que se grava los predios urbanos del Cantón Quito es anual y su alícuota que variará del 4 por mil al 8 por mil está en relación con el valor del predio, en esta proporción:

Valores de los Predios				Alicuota	Escala para el cobro del impuesto.
De S/.	1.000 a S/.	50.000	exclusive	el 4 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>	
«	«	50.000	«	«	5 «
«	«	100.000	«	«	6 «
«	«	200.000	«	«	7 «
«	«	400.000	«	«	8 «
«	«	400.000 en adelante.....			



Art. 5º. Cuando un mismo propietario tuviere dentro de la jurisdicción municipal, varios predios urbanos, se sumarán los valores de todos ellos para la determinación de la alícuota correspondiente, la cual se aplicará individualmente a cada predio en proporción a su valor.

Suma de los valores de varios predios.

Lo mismo se observará si el propietario poseyera varios predios, que pudiendo estar exonerados uno o más de ellos, conforme al Nº. 1º.) del Art. 8º. de la Ordenanza, en razón del valor individual, sin embargo la operación de la suma de los valores arroje una cantidad de un mil sucres o mayor que ésta.

Esta acumulación de valores no se extenderá a los predios que el contribuyente posea con otras personas en virtud de contratos de sociedad.

Art. 6º. El impuesto de que trata esta Ordenanza lo pagarán los contribuyentes a partir de enero del presente año de 1926.

Art. 7º. La alícuota del impuesto grava el predio en conjunto, en relación del valor del solar y del edificio que exista, conforme a las disposiciones del capítulo cuarto de esta Ordenanza.

Como grava la alícuota.

### CAPÍTULO III

#### EXENCIONES Y REDUCCIÓN DE LA ALÍCUOTA

Art. 8º. Están exonerados del pago del impuesto a los predios urbanos:

Exenciones.

1º. Los predios que valgan menos de un mil sucres;

Menos de un mil sucres.

2º. Los que hallándose individualmente en el caso del inciso anterior, si son varios y pertenecen a un mismo propietario dentro de la jurisdicción municipal, la acumulación de los valores de esos predios urbanos arroje una suma inferior a un mil sucres;

id. id.

3º. Los templos de todo culto religioso;

Templos.



4º. Los predios que pertenecieren al Estado o a las Municipalidades y que estén ocupados total o parcialmente o administrados directamente por aquellas instituciones.

Predios del Estado y Municipalidades.

No habrá lugar a la exoneración si los predios referidos estuviesen ocupados, administrados o explotados por otra persona, mediante arrendamiento o cualquiera otra forma de la cual resultare beneficios para ella o para terceras personas, sociedades o instituciones, salvo los Conventos y Monasterios nacionalizados por la Ley de Beneficencia de 1908, respecto de los cuales hay una forma de administración por parte de la Junta de Asistencia Pública.

5º. Los predios urbanos que los administraren o que pertenecieren a la Beneficencia Pública; los administrados o que pertenecieren a otras instituciones de utilidad o interés social, siempre que ellas fueren creadas o autorizadas por la Ley o decreto ejecutivo, y además que la administración económica correspondiente esté sujeta a la fiscalización judicial prescrita en la Ley de Hacienda.

Predios de la Beneficencia.

Al concurrir, respecto de estos predios, alguna o más circunstancias de las expresadas en el inc. 2º. del número anterior no habrá lugar a la exoneración. (1)

(1)

### Jurisprudencia Administrativa

LOS PREDIOS DE LA ASISTENCIA PÚBLICA DEBEN PAGAR EL  
IMPUESTO URBANO CUANDO SE ARRIENDAN  
A PARTICULARES

(Informe del señor Procurador Municipal aprobado en  
la sesión del 8 de octubre de 1930)

«Nº. 94.—Sindicatura Municipal.—Quito, a 9 de  
setiembre de 1930.

Señor Presidente del I. Concejo.

El señor Alberto Salazar expone:

Que el señor Tesorero Municipal, en ejercicio de  
la jurisdicción coactiva, ha dictado un auto de pago por  
la suma de S/. 45,60, valor del impuesto urbano que, en

Conflicto entre el  
Nº. 4º. del Art.  
88 de la Ley de  
Régimen Municipa-  
l y la letra b)  
del Art. 2º. de la  
Ley de 30 de e-  
nero de 1926.



Art. 9º. Pueden obtener rebaja o exención de la alícuota:

Establecimientos privados de Beneficencia.

concepto del señor Tesorero, debe pagar el señor Salazar por la casa que arrienda a la Asistencia Pública en la calle Bolivia N.º. 17;

G. M. N.º. 33 de octubre de 1930.

Que no está obligado a pagar dicho impuesto urbano; porque la letra b) de la Ley que señala fondos a las Municipalidades, Art. 2º., exonera del pago del impuesto urbano a los predios del Estado o de las Municipalidades y porque la misma exoneración hace el N.º. 4º. del Art. 88 de la Ley de Régimen Municipal;

Que la Contraloría al responder a una consulta de la Asistencia Pública, resolvió que las propiedades que administra la Asistencia Pública, no deben pagar ningún impuesto;

Que, en consecuencia, el I. Concejo se sirva declarar que el señor Salazar no está obligado al pago del impuesto; y que debe reintegrársele lo que ya le ha cobrado el señor Tesorero Municipal.

La cuestión es algo complicada. De acuerdo con los principios definitivamente establecidos por la Ciencia de Hacienda, un arrendatario no debe pagar impuesto por la casa o departamento que arrienda, salvo ciertos impuestos adicionales, como revelación del capital que tiene el arrendatario partiendo del indicio de la casa o departamento arrendados. Pero el impuesto básico y principal no ha de pagar el arrendatario, a quien exige lo más que puede el propietario, sino éste, que saca renta de su casa mediante el arrendamiento.

La solicitud del señor Salazar, empero, no podemos resolverla desde este punto de vista de justicia y de ciencia, sino tomando como base las disposiciones legales, principal fuente de administración para las personas de derecho público, como el Municipio. Sólo si hubiere silencio de la Legislación podríamos interpretar la solicitud del señor Salazar de acuerdo con los principios de justicia general.

Es cierto que el N.º. 4º. del Art. 88 de la Ley de Régimen Municipal dice: «No podrá gravarse con ningún impuesto a los edificios o propiedades nacionales o de Asistencia Pública; ni cobrarse en ella más de media tarifa por los servicios de agua o alumbrado que tengan establecidas por su cuenta las Municipalidades». Esta disposición aisladamente tomada, favorece al señor Salazar; pero relacionada con la ley especial sobre impuestos urbanos significa que el Municipio no puede gravar con ningún impuesto a los edificios o propieda-

NOTA: Hay jurisprudencia del Concejo opuesta a la presente. Se la pone a continuación.



## 1º. Los Establecimientos Privados de Be-

des nacionales o de Asistencia Pública en cuanto están destinados directamente a un fin nacional o de asistencia pública. En consecuencia, los hospitales, hospicios, las casas de la Nación en que trabajan los empleados del Estado y en que funcionan las oficinas públicas, etc., tienen las siguientes ventajas: no pagan impuesto urbano, no pagan sino la media tarifa, por el servicio de agua y la media tarifa por el servicio de alumbrado si éste es provisto por la Municipalidad.

Para esta interpretación me fundo en que existe una ley especial sobre impuestos a los predios urbanos de treinta de enero de 1926; en que la misma ley general sobre Régimen Municipal llama a esta Ley: Ley especial, en el Art. 94; en que según el Art. 49 del Código Civil, la ley especial anterior no se deroga por la general posterior, si no se expresa; en que la Ley de Régimen Municipal no deroga expresamente la Ley especial de 1926, ni podía hacerlo sin matar la vida económica municipal, y, en que el citado N.º 4 del Art. 88 de la Ley de Régimen Municipal es compatible con la letra b) del Art. 2º. de la exprecada Ley Especial. El Art. 2º. de la Ley de 30 de enero de 1926, dice: «Exonéranse del pago del impuesto estatuido en el inciso i) del presente artículo..... b) Los predios pertenecientes al Estado o a las Municipalidades, siempre que estén total o parcialmante, ocupados, o administrados directamente por el Estado o por la Municipalidad propietaria. Si la ocupación, administración o explotación de un predio urbano perteneciente al Estado o a la Municipalidad se verifica mediante arrendamiento, o en cualquiera otra forma de la cual resultaren beneficios para el ocupante, arrendatario o explotador o para terceras personas o sociedades o instituciones, se considerará el predio sujeto al impuesto estatuido en el inciso i) de este artículo».

Resulta de la exposición copiada que los bienes de la asistencia pública arrendados a particulares y disfrutados por éstos, no están exonerados del impuesto urbano y que el arrendatario debe pagar íntegra la tarifa de agua. La Ordenanza Municipal de 16 de junio de 1926, lo reglamentó en el mismo sentido. El inc. 2º. del numeral 4º. del Art. 8º. dice: «No habrá lugar a la exoneración, si los predios referidos estuvieren ocupados, administrados o explotados por otra persona, mediante arrendamiento o cualquiera otra forma de la cual resultare beneficios para ella o para terceras personas». Este sistema fué también el consignado en la



neficencia, que el Concejo estimare acreedores de exención del impuesto.

ley de 1915 sobre contribución territorial y capitales en giro: «Se declaran libres de esta contribución», dice el Art. 22 de la Ley, «los predios y capitales que pertenezcan al Estado, a las Municipalidades o a los Institutos de Beneficencia, salvo el caso de que los fundos se hubieren dado en arrendamiento, en el cual deberán satisfacerla los arrendatarios sin imputar al canon que por ellos deban pagar».

Aunque la Ley de 1915 está derogada, ha sido citada para que se vea cuál es el sistema de la Legislación Ecuatoriana expresamente consignado el 30 de enero de 1926. Mientras esta Ley especial no se derogue, en el artículo respectivo, de un modo expreso; mientras quepa cualquiera contabilidad entre la Ley especial citada y la Ley General de Régimen Municipal, los arrendatarios se verán en el caso de pagar el impuesto urbano por las propiedades que arrendaren a la Asistencia Pública ya que el Concejo tendrá que considerar vigente la Ley que establece fondos para las Municipalidades.

En tres fojas útiles remito la documentación llegada a esta Procuraduría. Entre éstas va un memorandum sin firma ni autenticidad alguna. Y aunque el memorandum tuviera firma, la resolución de la Contraloría no le obliga al Concejo Municipal y seguramente el Contralor no se habrá referido al caso en que los bienes raíces de la Asistencia Pública estén arrendados por particulares.

Atte.,

f.) J. M. Velasco Ibarra.»

### Jurisprudencia Administrativa

LOS PREDIOS DE LA ASISTENCIA PÚBLICA NO ESTÁN SUJETOS  
AL PAGO DEL IMPUESTO URBANO

(Informe del señor Procurador aprobado en sesión de  
28 de setiembre de 1932)

#### ANTECEDENTE

«Nº. 223. — Tesorería Municipal del Cantón. — G. M. Nº. 56.  
Quito, a 17 de setiembre de 1932. 1932 pág. 445.

Señor Presidente del I. Concejo Municipal.

En el Catastro para el cobro del gravamen a los predios urbanos de la ciudad, constan inscritos para el pago del respectivo impuesto las casas Nos. 17 de la



En este caso la exoneración que, puede

calle Bolivia y 152 de la Chimborazo, pertenecientes, respectivamente, a la Junta de Asistencia Pública y Escuela de Artes y Oficios, las que por estar arrendadas a personas particulares deben satisfacer sus arrendatarios un impuesto de S/. 45,60 y S/. 17,20 en el orden indicado.

Del examen de las disposiciones legales opuestas, y con motivo del cobro de estos impuestos, se ha presentado la duda de si los predios urbanos de instituciones de derecho público, están o no sujetos al pago del impuesto urbano, ya que, mientras la ley especial que creó el impuesto (Nº. b inc. 4º., Art. 2º. del Decreto Supremo del 30 de enero de 1926), establece que: «Si la ocupación, explotación o administración de un predio urbano perteneciente al Estado o a la Municipalidad se verifica mediante arrendamiento, o en cualquiera otra forma de la cual resultare beneficios para el ocupante, arrendatario o explotador, o para terceras personas, o sociedades o instituciones, se considerará el predio sujeto al impuesto estatuido en el inciso i) de este artículo»; una ley posterior, pero general, la de Régimen Municipal en su Art. 98, Nº. 4, prescribe que, no podrá gravarse con ningún impuesto a los edificios o propiedades nacionales o de Asistencia Pública, ni cobrarse a ella más de media tarifa por los servicios de agua.....»

Si bien es verdad que la disposición últimamente transcrita, además de posterior es absolutamente prohibitiva, parece, en cambio, que la anterior es especial, por ser la que estableció el impuesto en cuestión y porque se refiere al caso, también especial, cuando los edificios de instituciones públicas estuvieren dados en arrendamiento a personas particulares.

Se necesita saber, si, según la regla del Art. 49 del Código Civil, la disposición que forma parte del Decreto de 1926, se halla tácitamente derogada por la Ley de Régimen Municipal, o se considera vigente para el caso especial que contempla aquel inciso.

Ruego a usted y por su digno órgano al I. Concejo se sirva resolver la dificultad de una manera obligatoria para la Tesorería y comunicarme para los fines consiguientes.

f.) *M. E. Barrera.*»

#### RESOLUCIÓN

Sindicatura Municipal del Cantón.—Nº. 92.—  
Quito, a 21 de setiembre de 1932.

Señor Presidente del I. Concejo Municipal.

Ref, Letra b. Nº. IV, Art. 2º., Decreto de 30 de enero de 1926.

Ref. Art. 88 Nº. 4 de la Ley de Régimen Municipal.

Ref. Art. 49 C. Civil.



ser total o parcial se hará constar en una orde-

La letra b) N°. IV, del Art. 2°. del Decreto de 30 de enero de 1926 dice que se exonera del pago del impuesto estatuido sobre los predios urbanos «los predios pertenecientes al Estado o a las Municipalidades, siempre que estén ocupados total o parcialmente o administrados directamente por el Estado o la Municipalidad propietaria». Luego la misma Ley continúa: «Si la ocupación, administración o explotación de un predio urbano perteneciente al Estado o a la Municipalidad se verificare mediante arrendamiento, o en cualquiera otra forma de la cual resultare beneficios para el ocupante, arrendatario o explotador o para terceras personas o sociedades o instituciones, se considerará el predio sujeto al impuesto estatuido para los predios urbanos».

De otro lado el numeral 4°. del Art. 88 de la Ley de Régimen Municipal de 4 de octubre de 1928 dice: «No podrá gravarse con ningún impuesto a los edificios o propiedades nacionales o de Asistencia Pública, ni cobrarse en ellos más de media tarifa por los servicios de agua o alumbrado que tengan establecidos por su cuenta las Municipalidades;.....»

Ahora bien, en vista de las disposiciones transcritas el señor Tesorero Municipal pregunta al Concejo cuál de estas dos disposiciones es la vigente: si la del decreto de 30 de enero de 1926, que legisla especialmente sobre el impuesto a los predios urbanos, o si la Ley de Régimen Municipal, la cual por su naturaleza tiene un carácter general, habiendo sido expedida con posterioridad al Decreto mencionado.

Trátase, pues, de aplicar, en este caso, los Arts. del Código Civil que regulan sobre la derogación de las leyes, los cuales son los siguientes:

«Art. 47. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.—Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.—Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.—La derogación de una ley puede ser total o parcial».

«Art. 48. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley».

«Art. 49. La Ley especial anterior no se deroga por la general posterior, si no se expresa».

En rigor, la parte sustantiva y esencial sobre esta cuestión hállase establecida en los dos primeros artículos. Pero no por esto el artículo citado en tercer lugar



za especial, debidamente motivada, y precisando, con claridad el predio exonerado, la ali-

deja de ser menos importante que los otros. Yo entiendo que el Art. 3, además de constituir una aplicación práctica del principio establecido en los dos primeros artículos, establece especialmente el principio criteriológico-jurídico que tiene que vivirlo el Jurisconsulto.

En efecto, hacía falta que la ley aclarara cuándo y en qué caso se hallan dos leyes en contradicción o lo que es lo mismo en los casos en que dos leyes tienen disposiciones que no pueden conciliarse.

Según el pensamiento normal, ordinario, distínguese los conceptos, por el grado de su generalidad o universalidad, de tal modo que el concepto más general, envuelve, abarca y comprende dentro de sí e imprescindiblemente, otros conceptos menos generales y objetos particulares e individuos.

A base de esta diferenciación de conceptos la lógica ordinaria y el pensamiento tradicional ha establecido de una manera inamovible el siguiente principio: de la verdad del concepto general, se deduce, necesariamente, la verdad del objeto particular o concepto comprendido dentro de ella. Así las lógicas corrientes formulan raciocinios como el siguiente: «el hombre es esencialmente religioso; Pedro es hombre; luego Pedro es religioso».

En esta criteriología que ha arraigado tan profundamente en nuestra civilización se nota especialmente el predominio del principio general, de la norma, sobre el principio especial, sobre el individuo.

Y este antecedente me sirve enormemente para explicar y hacer ver como debe decidirse respecto de la validez de las leyes generales con relación a las especiales.

Pues, bien, dentro de este rutinarismo mental, tócale a la legislación civil el haber establecido un principio diametralmente opuesto, aunque esto lo haya hecho sin pretensiones filosóficas de mayor alcance. Es ésta la función que desempeña el Art. 49 de nuestro Código Civil y los demás que son análogos en las legislaciones de todos los países. Si la ley general, que equivale al concepto general, no decide sobre la ley o concepto especial, aunque la ley general sea posterior a la especial, es claro que el pensamiento concluyente en toda jurisdicción es aquel que va de lo especial a lo general y no al contrario. Es decir, válidamente, no



cuota eximida del pago total o parcial, el tiem-

puede estar en oposición una ley especial con una general, porque sencillamente la ley especial predomina. Tal oposición puede encontrarse tan sólo en el caso en que existan dos disposiciones o leyes que regulen de un modo diferente colocándose dentro del mismo grado de generalidad o especialidad: sólo entonces puede decirse que existe el problema de la contradicción de leyes; y para este caso determina nuestra legislación que la ley posterior deroga sin más a la anterior.

Pero esta contraposición no adquiere un carácter problemático en los casos en que se expiden leyes sucesivas sobre una misma materia, tal como si volvieran a expedir una imposición a los predios urbanos. Y digo que no es problemático porque la contraposición se muestra de bulto y grande, sin lugar a duda alguna: llana y simplemente la ley posterior deroga a la anterior. Lo difícil es cuando en una ley general posterior existen disposiciones especiales legisladas también especialmente en leyes especiales, como el caso actual. Muy frecuentemente en estos casos se toma en cuenta, no la especialidad de la disposición sino la generalidad de la ley en que se halla y entonces se formula el principio decisivo de que la ley general posterior no deroga a la ley especial anterior. Mas no es esto lo que debe hacerse: no sólo las leyes tomadas en conjunto son las que pueden llamarse generales o especiales; también cada una de las disposiciones de una ley pueden llamarse generales o especiales respecto de otra u otras leyes de cualquier naturaleza que sean. Por tanto una ley general, tomada en conjunto puede contener disposiciones especiales que no deben considerarse en ningún caso como generales sino tal como son: la generalidad de una ley no afecta a la particularidad o especialidad de las disposiciones.

Con estos antecedentes examinaré, pues, si la disposición de la ley de 1926 regula, dentro del mismo grado de generalidad o especialidad con que regula la disposición de la Ley de Régimen Municipal: Sólo así será posible decidir si existe o no incompatibilidad de disposiciones.

La Ley de 1926 dice: «Los predios pertenecientes al Estado o a las Municipalidades.....» y la disposición citada de la Ley de Régimen Municipal usa la expresión: «Los edificios o propiedades nacionales o de Asistencia Pública.....»

Si tenemos en cuenta que las propiedades de Asistencia Pública son propiedades del Estado y que en



po de la exención y el nombre del propietario u ocupante. (1)

la expresión «propiedades nacionales» se hallan comprendidas las propiedades de la Municipalidad y del Estado, tendremos que ambas disposiciones regulan el mismo objeto. Por tanto se hallan en contradicción y será procedente aplicar la disposición de la Ley que dice: que la ley anterior queda derogada por la posterior, en estos casos. Por consiguiente, la disposición válida, es la de la Ley de Régimen Municipal, aún cuando esta ley tomada en conjunto sea general; y la disposición derogada es la de la Ley de 1926, aunque esta ley legisle especialmente sobre los impuestos a los predios urbanos. Porque como he insistido ya anteriormente, el caso actual no es de contraposición de dos leyes tomadas en conjunto, sino de dos disposiciones. La generalidad o especialidad de una ley general con respecto de otra no decide sobre la generalidad o especialidad de las disposiciones de cada una de ellas.

Mi opinión es, pues, que no debiera cobrarse impuesto alguno sobre las propiedades a que hace alusión el señor Tesorero. Pero según tengo conocimiento, la Junta de Asistencia Pública estipula en sus contratos que los arrendatarios pagarán el impuesto respectivo a la Municipalidad. Si existe esta estipulación entre la mencionada Junta y sus arrendatarios es claro que la Municipalidad podrá cobrar a éstos el impuesto, porque a esto se hallan obligados de acuerdo con el contrato.

Es obvio ver que la Municipalidad tendría, en este caso, derecho a cobrar el impuesto, no precisamente por la ley, porque ésta no le confiere tal derecho, pero sí por el contrato a que he aludido.

He querido ser amplio en esta exposición por cuanto casos de derogación de leyes como éste se tratan a diario en la Municipalidad y con el objeto de dar la norma jurídica a que deben sujetarse los funcionarios.

f.) A. Velasco M.

(1) ORDENANZA QUE EXONERA A LA SOCIEDAD FUNERARIA  
NACIONAL DEL PAGO DEL IMPUESTO DE  
PREDIOS URBANOS

El Concejo Municipal de Quito,

CONSIDERANDO:

1º. Que la Ley de Impuestos Municipales de 30 de enero del presente año, en su Art. 2º., Nº. 2, letra f) G. M. Nº. 14. 1927



2º. Los edificios que se hallen en construcción y los que se vuelvan inhabitables o improductivos por destrucción o por ruína, por

Edificios en construcción. Inhabitables. Improductivos

faculta a la Municipalidad para exonerar total o parcialmente del pago del impuesto urbano municipal, a los Establecimientos privados de Beneficencia;

2º. Que la Sociedad Funeraria Nacional ha acordado por convenio con el Concejo Municipal de Quito: 1º. destinar en su cementerio una sección especial suficiente al enterramiento de cadáveres de personas indigentes, cuyos deudos así lo solicitaren, sin que estos últimos tengan que pagar cosa alguna, ni aún en concepto de cavada de sepultura; 2º. dar sepultura gratuita en dicha sección a los cadáveres de las personas que fallecieren en los establecimientos sostenidos por la Asistencia Pública, como hospitales, hospicios, orfelinatos, etc., de modo que nada cueste este servicio, ni aún en concepto de cavada de sepulturas; y, 3º. conceder igual sepultura gratuita a los cadáveres de los niños menores de tres años que mueren indigentes, y hasta diez ataúdes mensuales para su enterramiento, igualmente gratuitos;

3º. Que los servicios enunciados son esencialmente de beneficencia y dan carácter de beneficiante a la Sociedad Funeraria Nacional;

#### ACUERDA:

Art. 1º. Exonérase a la Sociedad Funeraria Nacional establecida en esta capital del pago total del impuesto urbano, correspondiente al Cementerio de San Diego que es de su propiedad.

Art. 2º. Esta exoneración del impuesto urbano se hará efectiva durante los años 1926 y 1927, término de duración del Catastro de Predios Urbanos, según lo dispuesto en el Art. 51 de la Ordenanza sancionada el 22 de junio del presente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Quito, a 9 de diciembre de 1926.—El Presidente, *f.) J. M. Páez*.—El Secretario, *f.) J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN.—Quito, diciembre 13 de 1926.—EJECÚTESE.—*f.) Enrique Bustamante L.* El Secretario, *f.) J. A. Espinosa.*»



el tiempo indispensable para la construcción de las obras o reparaciones a juicio del Concejo.

ORDENANZA QUE EXONERA DEL IMPUESTO URBANO AL ASILO DE OBREROS DE LA CAPITAL

El Concejo Municipal de Quito,

CONSIDERANDO:

1º. Que la Ley de Impuestos Municipales de 30 de enero de 1926, en su Art. 2º., N°. 2 letra f) faculta a las Municipalidades para exonerar total o parcialmente del pago del impuesto urbano municipal a los Establecimientos Privados de Beneficencia;

2º. Que los servicios que presta el Asilo de Obreros de esta Capital son netamente de carácter benéfico,

DECRETA:

Art. 1º. Exonérase a la propiedad urbana que posee en esta Capital el Asilo de Obreros del pago total del impuesto urbano correspondiente.

Art. 2º. Esta exoneración se hará efectiva durante los años de 1926 y 1927, término de duración del Catastro de Predios Urbanos, según lo dispuesto en el Art. 51 de la Ordenanza Municipal que regula el cobro del impuesto urbano.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Quito, a 23 de febrero de 1927.—El Presidente, *f.) F. Cousin*. —El Secretario, *f.) J. Roberto Páez*.»

JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN. — Quito, febrero 26 de 1927. EJECÚTESE.—*f.) Enrique Bustamante L.*—El Secretario, *J. A. Espinosa*.»

ORDENANZA QUE DECLARA LIBRE DEL IMPUESTO URBANO AL PREDIO DE LA CALLE MEJIA N°. 1, DEL INSTITUTO «DON BOSCO»

El Concejo Municipal de Quito,

CONSIDERANDO:

Que el Art. 2º., letra f) de la Ley de Impuestos para las Municipalidades, de 30 de enero de 1926, autoriza a los Concejos para exonerar de todo impuesto

G. M. N°. 48.  
1932



La exoneración se limitará únicamente al valor del edificio, mas no al solar, y para que haya lugar a esta reducción será preciso el reclamo del propietario o su representante.

predial urbano a los establecimientos de beneficencia privada;

Que por tales establecimientos, no se ha de entender únicamente los hospitales, asilos o casas de Huérfanos, pues, es obra de beneficencia según el sentido castizo de la palabra, aquella que tiende a mejorar el estado de la clase obrera, sin costo para ésta, mediante la enseñanza desinteresada de algún arte u oficio que sirva para la vida y a procurar para aquella un bienestar material y moral que eleve su condición y le aleje del camino del vicio;

Instituto «Don Bosco»

Que el Instituto «Don Bosco», de esta capital, reúne las condiciones de una institución de Beneficencia Privada, pues, en él se educa y capacita a los hijos de las clases menesterosas del país, para la lucha por la vida, sin costo alguno para los mismos, o con un gasto que es muy inferior a los gastos que el funcionamiento del Instituto demanda;

Que, además, cada domingo se reúne en el local del Instituto «Don Bosco», a los niños, hijos del pueblo, y gratuitamente se les agasaja, alejándolos de los peligros de la calle y dándoles honesto esparcimiento que les aprovecha física y moralmente;

#### DECRETA:

Art. 1º. El predio urbano que, en la carrera Mejía N°. 1 de esta ciudad, posee el Instituto «Don Bosco» y que consta en el Catastro de Predios Urbanos de este cantón, queda exonerado del pago del impuesto urbano por el cuatrienio de 1932 a 1935 inclusive, término de duración del Catastro respectivo.

Art. 2º. La presente Ordenanza regirá desde la fecha de su sanción.

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal de Quito, a 27 de enero de 1932.—El Presidente del Concejo, *f.) M. Angel Alvarez*.—El Secretario, *f.) J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN.—Quito, a 29 de enero de 1933.—EJECÚTESE, *Enrique Bustamante L.*—El Secretario, *J. A. Espinosa.*»



3º. Las instituciones particulares, como los hospitales, las clínicas, los colegios o escuelas que en sus tarifas y administración se sujetan a la inspección y a las prescripciones del Poder Ejecutivo o de la Municipalidad, en su caso, tendrán derecho a que el Concejo les haga una rebaja hasta del 50% de la alícuota que les corresponda pagar en razón del impuesto.

Hospitales. Clínicas. Colegios. Escuelas

Art. 10. Fuera de los casos que se contemplan en el Art. anterior, el Concejo no podrá Decretar exoneraciones ni desgravaciones, aún cuando ellas hubiesen sido acordadas por Leyes y Decretos anteriores al Decreto Supremo de 30 de enero de 1926.

Ninguna exoneración o reducción de la alícuota, para las cuales según la ley esté autorizado el Concejo, podrá hacerse si no se justifican debidamente los fundamentos de la concesión.

Art. 11. Las instituciones exoneradas de la obligación de rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas no tendrán derecho a la exoneración del impuesto a los predios urbanos que posean. Tampoco lo tendrán las instituciones cuyas ganancias beneficien o no a personas o sociedades particulares; como también aquellas instituciones que se dediquen a objetos no autorizados por leyes especiales, o que en lo sucesivo no fueren exoneradas del impuesto por leyes especiales.

Instituciones exoneradas de rendir cuentas

## CAPITULO IV

### AVALÚO Y CATASTROS

Art. 12. Para la determinación y cobro del impuesto, el Concejo formará cada cuatro años un Catastro, en el que conste: el nombre

Catastro



del propietario o del que se tenga por tal, según el Art. 37 de esta Ordenanza, la designación del predio, la superficie del mismo, la parroquia y calle en que esté ubicado, el precio del avalúo con la indicación del valor del solar y, el del edificio, el tipo de la alícuota y el espacio suficiente para que se anote la desgravación o exoneración que acordare el Concejo en los casos de esta Ordenanza.

Art. 13. El Catastro se compondrá de dos cuerpos: uno que contenga la razón de los predios urbanos existentes en Quito, cabecera del Cantón, en orden de parroquias y el otro relativo a las parroquias rurales, cuyos predios considerados urbanos en el sentido de la Ley, estén sujetos al pago del impuesto.

De qué se compone el Catastro

Art. 14. Para la determinación de los predios urbanos sujetos al pago del impuesto en las parroquias rurales, la Comisión de Avalúos propondrá al Concejo y éste determinará el área de la zona urbanizada rural, tomando como centro de los radios la plaza principal de la parroquia.

Arca de zona urbanizada rural

Art. 15. La formación del Catastro correrá a cargo del Jefe de la Oficina de Comprobación y el avalúo de los predios a cargo de la Comisión o comisiones que nombrará el Concejo.

Oficina de Comprobación. Comisiones

Art. 16. El Concejo, si lo estimare necesario, podrá nombrar sub-comisiones que presen su concurso a la Comisión del Catastro y Avalúos en las operaciones de que trata el Art. 20 de esta Ordenanza.

Subcomisiones

Art. 17. Los honorarios que correspondan a los servicios de los comisionados extraños a la administración municipal, serán fijados por el Concejo.

Honorarios

Art. 18. En los meses de enero a marzo del año anterior al cuatrienio en que deba regir el Catastro, la Oficina de Comprobación Municipal distribuirá a todos los propietarios de predios urbanos, previo recibo, un formulario

Formularios



impreso, para que en sus casillas, dichos propietarios hagan la siguiente declaración: 1) Nombre del propietario. 2) Designación del predio. 3) Parroquia en que esté ubicado. 4) Calle y número. 5) Destinación del predio. 6) Area solar. 7) Area edificada. 8) Número de patios. 9) Número de jardines, parques y corrales. 10) Número de pisos del edificio. 11) Material general de construcción. 12) Longitud del frente de la calle. 13) Número de habitaciones. 14) El valor del predio que conste en el título de propiedad. 15) Clase de título y 16) Fecha de éste y escribanía en que esté protocolizado.

Art. 19. Los propietarios están obligados a devolver suscritos los formularios de que trata el artículo anterior, a más tardar hasta el 30 de abril del año anterior al del cuatrienio de la vigencia del Catastro, bajo la multa de cinco a cien sucres que les impondrá el Jefe Político, por denuncia del Jefe de Comprobación, y de no gozar del derecho de revisión prescrito en el Art. 20 de esta Ordenanza.

Suscripción de formularios

En los formularios se hará constar la prevención de estas sanciones.

Art. 20. A partir del 1º. de mayo del año anterior al cuatrienio de la vigencia del Catastro, la Comisión encargada de formarlo, con vista de las declaraciones de los propietarios, de la consulta a la Oficina de Anotación de Hipotecas y Archivos de Escribanías, del conocimiento especial de las transacciones, de las visitas y recorridos que fueren necesarios, y de otros medios técnicos a que haya lugar, procederá a avaluar los predios urbanos. Si no se presentare la declaración del propietario, la Comisión procederá al avalúo.

Avalúo de los predios

Los precios de avalúo los hará constar en el Catastro junto con la alícuota del impuesto que proporcional y progresivamente corresponda a cada predio.

El Jefe de la Oficina de Comprobación llamará oportunamente la atención del Concejo



para que ordene a la Comisión respectiva que proceda a dar cumplimiento a las disposiciones de este artículo.

Art. 21. El avalúo se hará separadamente del solar y del edificio.

El avalúo de uno y ótro, o sea el avalúo total, con la designación de las cifras parciales que correspondan al solar y al edificio, lo hará constar la Comisión en el Catastro con el debido orden y claridad.

Forma de hacer el avalúo

Art. 22. La Comisión terminará la formación del Catastro hasta el 15 de agosto y presentado que fuere al Concejo, esta Corporación ordenará que se lo ponga a disposición del público en la Secretaría Municipal durante 30 días, a fin de que los contribuyentes que se consideraren perjudicados en los avalúos, calificación de los predios, existencia de los mismos, duplicaciones, acumulación de valores, etc., puedan hacer sus reclamos. Este plazo se ampliará en 15 días tratándose del catastro de los predios urbanos de las parroquias rurales.

Plazo para hacer los reclamos

Art. 23. La formación de los Catastros se comunicará al público por la prensa y carteles, advirtiéndose el plazo para los reclamos, y, además, a los Presidentes de las Juntas Parroquiales se los remitirá una copia del catastro de la sección parroquial correspondiente, para que la exhiban en uno de los lugares más concurridos de la parroquia rural durante el plazo para los reclamos; copia que será devuelta después de espirado este término, con la razón de haberse cumplido el requisito expresado.

Publicidad de los Catastros

El Presidente de la Junta que no cumpliera con lo dispuesto anteriormente, será multado con diez a cien sucres que le impondrá el Jefe Político con la denuncia de la Oficina de Comprobación.

Art. 24. Vencidos los términos de que habla el artículo anterior, las observaciones que se hubieren hecho al Catastro, pasarán al estudio de una Comisión compuesta de un Con-

Dictamen



cejal nombrado por el Presidente del Concejo, de un Ingeniero Municipal y del Tesorero, la cual emitirá su dictamen en orden a las antedichas observaciones.

Art. 25. El contribuyente que reclamare contra el Catastro dentro del término fijado en el Art. 23, deberá acompañar a su solicitud prueba congruente a demostrar las inexactitudes que contenga, sea con los certificados del Anotador de Hipotecas, o con avalúos hechos por peritos verificados a la época de la formación del Catastro, u otro medio probatorio.

Reclamos de los particulares

Art. 26. Con el dictamen de la Comisión Revisora pasará el Catastro al Despacho del Concejo, el que ciñéndose estrictamente a la disposición del inc. VIII) del Art. 2º. del Decreto Supremo de 30 de enero, introducirá las rectificaciones y modificaciones a que hubiere lugar y dará su aprobación al Catastro que deba regir el cobro del impuesto durante el cuatrienio inmediato. El Catastro será aprobado por el Concejo dentro de la primera quincena de octubre anterior al cuatrienio en que deba empezar a regir.

Rectificaciones y modificaciones

Art. 27. El Concejo ordenará que el Catastro se guarde en la Oficina de Comprobación y que se compulsen de él tres copias con la razón del nombre del propietario, la designación del predio, la parroquia, su número y calle, su avalúo total y la alícuota del impuesto. Las copias se remitirán una a la Secretaría Municipal, otra a la Tesorería y otra al Tribunal de Cuentas. (1)

Copias del Catastro

Art. 28. En el Catastro figurarán todos los predios urbanos sujetos al pago del impuesto con sus respectivos avalúos y alícuotas y en caso de alguna reducción o exención de las fa-

Lo que figura en el Catastro

---

(1) Donde se encuentre las palabras «Tribunal de Cuentas» se entenderá ahora que es la «Contraloría General».



cultativas para el Concejo, se hará constar el tipo de la alícuota reducida y definitiva o de la exención en la columna correspondiente.

Art. 29. Se formará también el Catastro especial de los predios urbanos que estén eximidos del impuesto por disposición de la Ley y se lo someterá a la aprobación del Concejo.

El hecho de que figuren en ese catastro predios obligados al pago del impuesto, no significará exoneración y, advertido el error estarán los propietarios obligados al pago por todo el tiempo en que no hubieren satisfecho el impuesto.

Art. 30. Aprobado el Catastro por el Concejo, no se admitirá ninguna reclamación dentro del cuatrienio, salvo en los casos siguientes: que el recurrente no poseyera el predio que consta en el Catastro, que el predio estuviere gravado por duplicado o que el avalúo se hubiere calificado en un tercio más del justo precio, en este último caso el reclamo sólo podrá hacerse dentro del primer trimestre del año en que comience el cuatrienio.

Reclamos fuera de tiempo

En los casos a que haya lugar, el Concejo podrá proceder oyendo el dictamen de dos peritos nombrados, uno por parte del Concejo y otro por el contribuyente. El honorario de éste último será de cuenta del interesado.

Art. 31. Si después de aprobado el Catastro, se llegare a saber la existencia de predios que no constaren en aquel y que estén obligados al pago del impuesto, el Concejo los hará avaluar. Comunicado el avalúo al propietario, éste tendrá el plazo de 30 días para hacer sus observaciones. En caso de no presentarlas, o resueltas aquellas, se incorporarán con su avalúo los nuevos predios al Catastro y el contribuyente pagará el impuesto desde el año a que corresponda el pago del impuesto.

Avalúo de predios que se omitió

Art. 32. Cuando se dividiere un predio o pasare al poder de un nuevo propietario, se procederá en el primer caso conforme a lo dispuesto

Venta o división de predios



en el Art. 31, y se harán las rectificaciones en el Catastro ya respecto a los propietarios, ya acerca del precio, si acaso el valor de la nueva transmisión exediere del valor señalado en el Catastro. El Jefe de Comprobación intervendrá en estas operaciones, que aprobará el Concejo. (1)

Tiene adición

Art. 33. Si hallándose vigente el Catastro, el Concejo acordare alguna de las concesiones detalladas en el Art. 9º. de esta Ordenanza, se harán en el Catastro las rectificaciones correspondientes.

Rectificaciones del catastro

Art. 34. Ninguna concesión del Concejo se hará por más de un cuatrienio, y si acordada para un período de esta clase, desapareciere dentro del curso de él la causa que la motivó se restablecerá el gravamen en la proporción que corresponda.

Concesiones

(1)

El Concejo Municipal de Quito;

En uso de sus atribuciones,



ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

DECRETA:

Las siguientes adiciones a la Ordenanza que regula el cobro del impuesto que grava a los predios urbanos del cantón, sancionada el 22 de junio de 1926.

Art. 1º. Al Art. 32 agréguese el siguiente inciso:

«Cuando no se haya practicado e inscrito la partición legal de los predios que se posean proindiviso, en forma de que sea dable conocer claramente el valor de la parte que a cada uno de los condóminos le hubiere cabido en dicha partición, el impuesto que se cause se graduará en proporción al valor de cada una de esas partes, aún cuando no se hubiere efectuado la división material de los predios. En estos casos deberá acumularse, para el efecto de la fijación de la alícuota correspondiente, el valor de las diversas porciones que correspondan, en distintos predios, a un mismo dueño; debiendo, además, procederse para dicha fijación, como lo dispone el Art. 5 de esta Ordenanza.»

Adicional  
Ordenanza de 29  
de abril de 1933.  
Gaceta Municipal  
Nº. 63, de 31 de  
mayo de 1933  
Pág. 222

Predios pro-indi-  
visos

Dado, etc.



Art. 35. Hallándose en vigencia el Catastro, la Oficina de Comprobación tendrá el cuidado de anotar anualmente las modificaciones que con arreglo a la Ley hiciere el Concejo al Catastro, para el efecto de que por medio del Presidente del Concejo se pase a la Tesorería en cada año la copia exacta del Catastro.

Anotación de modificaciones

## CAPITULO V

### PAGO DEL IMPUESTO Y RECAUDACIÓN

Art. 36. Aprobado que fuere el Catastro, la Oficina de comprobación remitirá a la Tesorería, junto con la compulsas de que trata el Art. 27, las respectivas cartas de pago. Las cartas estarán listas para el pago en Tesorería el 1º. de enero de cada año. Serán impresas y estarán suscritas por el Jefe Político y el Tesorero. (1)

(Reformado)  
Cartas de pago

(1)

El Concejo Municipal de Quito,

#### CONSIDERANDO:

1º. Que en la actualidad es desfavorable la situación económica general; y

2º. Que es necesario dar facilidades a los contribuyentes para el pago de los impuestos municipales;

#### DECRETA:

Art. 1º. El Art. 36 del Capítulo V de la Ordenanza de 22 de junio de 1926, dirá:

«Aprobado que fuere el Catastro, la Oficina de Comprobación remitirá a la Tesorería, junto con la compulsas de que trata el Art. 27, las respectivas cartas de pago o títulos de crédito, dividiendo el valor del impuesto en cuatro partes iguales. Las cartas estarán listas para el pago en Tesorería el primero de enero de cada año. Serán impresas y estarán suscritas por el Jefe Político y el Tesorero.

Reformatorio  
Ordenanza de 4  
de noviembre de  
1932  
Gaceta Municipal  
Nº. 57 de 30 de  
noviembre. Pág.  
498



Art. 37. La carta se extenderá a nombre del propietario del predio; tratándose de bienes del Estado o Beneficencia, que estuvieren arrendados, las cartas se emitirán a nombre del arrendatario y en todos los demás casos en que se trate de asociaciones u ocupantes o beneficiarios, en el sentido especial de la Ley de la Materia, a sus respectivos representantes, jefes u ocupantes, si no se empleare la designación de la sociedad corporativa.

A quienes se extiende la carta de pago

Art. 38. Los contribuyentes están obligados a pagar el impuesto en la Tesorería Municipal y son deudores del gravamen desde el 1º. de enero de cada año, por la suma que constare en el Catastro. Cada fracción de año se tendrá por año entero.

Contribuyentes deudores

Art. 39. Si los contribuyentes no pagaren el impuesto hasta el mes de junio inclusive, el Tesorero procederá a recaudar el impuesto por medio de la jurisdicción coactiva.

Jurisdicción coactiva

Art. 40. Los contribuyentes que pagaren el impuesto dentro de los meses que se indican, gozarán de los siguientes descuentos:

Descuentos

En enero el 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

En febrero, el 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

En marzo, el 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

En abril, el 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

En mayo, el 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

En junio, el 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

El descuento recaerá sobre el valor íntegro de la carta.

Art. 41. Cuando el contribuyente sea requerido al pago, a partir del 1º. de julio u obli-

Recargos

Art. 2º. El Tesorero Municipal hará los descuentos y cobrará los recargos de que hablan los artículos 40 y 41, en la proporción que conste en cada carta.

Art. 3º. La Oficina de Comprobación al formar los catastros correspondientes, desde 1933, agregará una columna que determine la cuarta parte del impuesto.

Dado, etc.



gado a ello por la coactiva, sufrirá el siguiente recargo sobre la alícuota del impuesto:

Sí pagó en julio, el 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>  
 « « « agosto el 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>  
 « « « setiembre, el 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>  
 « « « octubre, el 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>  
 « « « noviembre, el 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>  
 « « « diciembre el 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

(Reformado)  
 Ordenanza de 21  
 de mayo de 1934

Las cartas que no fueren pagadas dentro del año correspondiente, tendrán un recargo del 25<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. (1)

Art. 42. No podrá extenderse escritura de venta, permuta u otras que impliquen trasmisión del dominio o que establezcan gravamen sobre la propiedad, o cancelación de dichos gravámenes sin el certificado detallado de estar pagados los impuestos municipales, hasta el año inclusive de la fecha de las respectivas escrituras, en el que se determinará igualmente la

Prohibición de  
 otorgar escrituras  
 sin antes pagarse  
 el impuesto

(1)

El Concejo Municipal de Quito,

ÁREA HISTÓRICA  
 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL

Art. 1º. El Art. 41 de la Ordenanza que regula el cobro del impuesto que grava a los predios urbanos del Cantón, sancionada el 22 de junio de 1926, dirá: (1)

«Sí el contribuyente no satisficiera el impuesto al 30 de junio, se constituirá en mora desde el primero de julio, y pagará el interés del 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub> desde la última fecha».

Gaceta Municipal  
 No. 75 de 31 de  
 mayo de 1934

Art. 2º. La presente Ordenanza reformatoria entrará en vigencia desde la fecha de su sanción.

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal, en Quito, a 15 de mayo de 1934.—El presidente del Concejo, f.) J. Jijón y Caamaño.—El Secretario Municipal, f.) J. Roberto Páez.

JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN.—Quito, a 21 de mayo de 1934.—EJECÚTESE, f.) Enrique Bustamante.—El Secretario, f.) J. A. Espinosa.»

(1) Por error de imprenta se ha hecho constar el Art. 14 en vez del 41; esta salvedad fué consultada y resuelta por el Concejo.



parroquia en que esté ubicado el inmueble, la carrera y el número de orden que lo distinga.

Art. 43. Cuando se trate de remate voluntario o forzoso, se pagarán de contado y de preferencia los impuestos municipales, acompañando, al efecto, el certificado del Tesorero Municipal o las cartas respectivas.

Remates voluntarios y forzosos

Art. 44. Los escribanos que protocolizaren autos de adjudicación de inmuebles rematados sin exigir la presentación de las cartas de pago de los impuestos municipales hasta el año correspondiente al en que se celebra, o el certificado del Tesorero, del que conste estar pagados aquellos incurrirán, en cada caso, en la multa de cien a quinientos sucres que les impondrá el Jefe Político, a petición o denuncia del Tesorero Municipal, en juicio verbal sumario.

Sanciones a los Escribanos

En igual multa incurrirán los escribanos que infringieren lo dispuesto en el Art. 42.

Art. 45. El Tesorero no expedirá el certificado sin que previamente se le presente un Manifiesto del Escribano en que conste por escrito la escritura de que se trata, los nombres de las personas entre quienes se efectúa el acto o contrato, la designación del predio y su ubicación y el valor de la transferencia o de la propiedad sobre el que recae el gravamen si se expresara.

Deberes del Tesorero Municipal

Art. 46. En los casos en que la infracción se cometiera por Escribano de otro Cantón que el de Quito, puesto el hecho en conocimiento del Concejo por el Tesorero o la Oficina de Comprobación, se lo denunciará a la respectiva Corte Superior para que aplique al Escribano infractor las sanciones de Ley.

Infracción de Escribanos de otro cantón

Art. 47. El Anotador de Hipotecas del Cantón enviará quincenalmente al Tesorero una razón de todos los Registros y Anotaciones que practicara en sus Libros.

Deberes del Anotador de Hipotecas



## CAPITULO VI

## DISPOSICIONES GENERALES

Art. 48. El primer cuatrienio del Catastro comprenderá los años de 1928 a 1931.

Art. 49. El impuesto por los años de 1926 y 1927 se cobrará por medio del Catastro que se formará para este bienio.

## CAPITULO VII

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 50. Los recargos a que se refiere el Art. 41 de esta Ordenanza no se harán efectivos sino desde enero de 1927, y las cuotas que se quedan adeudando de 1926 no estarán sujetas a esta sanción.

Art. 51. La Oficina de Comprobación procederá inmediatamente a formular el Catastro para el bienio de 1926 a 1927, y para el avalúo procederá de acuerdo con un Ingeniero Municipal y un propietario que designe el Concejo o su Presidente.

Art. 52. El Catastro del bienio de 1926 a 1927 podrá hacerse por secciones en lo que se refiere a la ciudad de Quito; pero el de los predios de las parroquias rurales comprenderá íntegramente cada una de ellas.

Art. 53. Para la formación del Catastro el Concejo o su Presidente podrán designar sub-comisiones que auxilien a la Comisión y los haberes que les corresponda a ellas y al tercer miembro de la Comisión se abonarán por el Concejo.

Formación del  
Catastro

Art. 54. Terminado el Catastro general o por secciones, el Presidente lo anunciará al público por 30 días, para que, quienes se creyeran perjudicados, puedan hacer las observaciones que estimen convenientes,

Publicidad del  
Catastro



Terminado dicho plazo, o una ampliación de 15 días para los predios de las parroquias rurales, un Comisionado designado por el Presidente tratándose de predios rurales dictaminará sobre los reclamos; y tratándose de predios urbanos el dictamen lo dará un Concejal y un propietario designado por el Concejo o por su Presidente.

Art. 55. El Catastro con los informes de la Comisión mencionada en el artículo anterior, se someterá a resolución del Concejo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inc. VIII) de la Ley. Si éste lo aprueba y con las rectificaciones que acordare, pasará a la Oficina de Comprobación a fin de que expedidas las cartas se proceda a la recaudación.

Resolución del  
Concejo sobre los  
Catastros

Art. 56. En el transcurso del bienio podrán conocerse de las peticiones sobre exoneración o desgravación parcial que pueda conceder el Concejo, si acaso éste, al aprobar el Catastro, no hubiere acordado las que pueda hacerlo por una resolución.

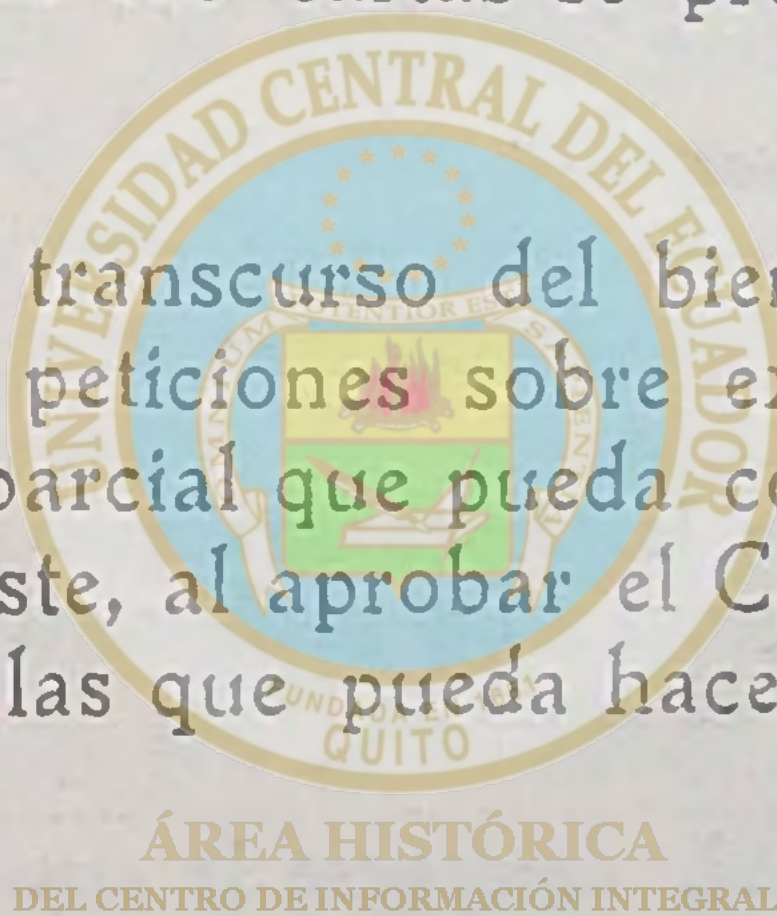
Exoneraciones y  
desgravaciones

Art. 57. Hasta después de 4 meses de aprobado el Catastro, podrán los propietarios reclamar contra las inexactitudes que él contenga, si acaso el avalúo excede en un tercio más del justo precio y en cualquier tiempo si la propiedad constare por duplicado o no fuere poseedor el contribuyente.

Fechas de los re-  
clamos

Art. 58. Cuando el Concejo acogiera favorablemente los reclamos enunciados en el Art. anterior y el contribuyente hubiere efectuado el pago, tendrá derecho el contribuyente a que se le reintegre la cuota que hubiere pagado inclusive recargos o el exceso de la alícuota, sobre la que señalare el Concejo después del reclamo. Lo propio se observará cuando se hubiere pagado

Tiene adiciones  
Reintegro de cuo-  
tas





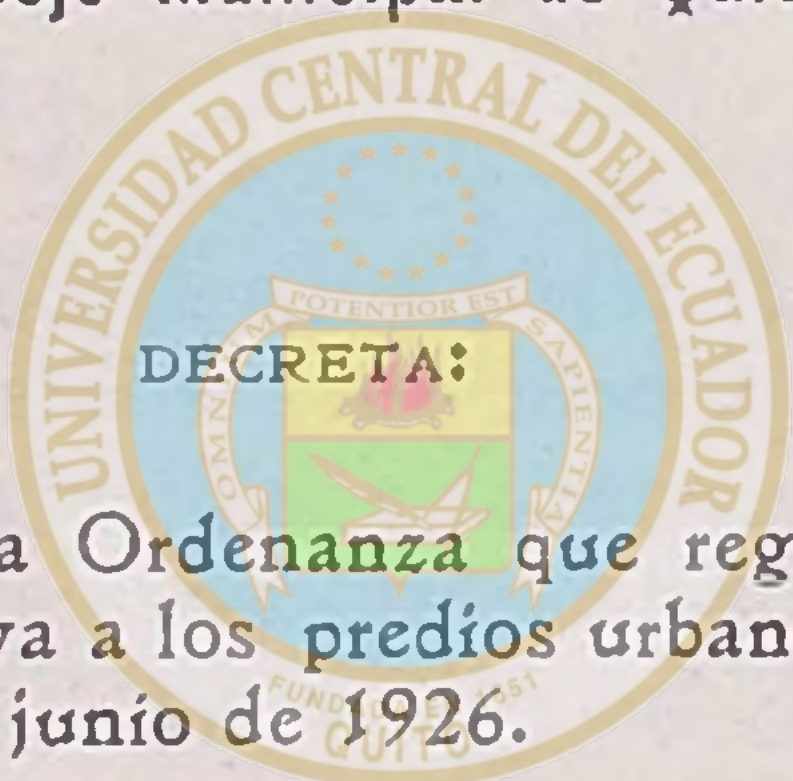
el impuesto sobre los predios exonerados por la Ley. (1)

DADO en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Quito, a diez y seis de junio de mil novecientos veintiséis. El Presidente, *Alberto Bustamante*. El Secretario, f.) *J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN. Quito, a veintidós de junio de mil novecientos veintiséis. EJECUTESE. El Jefe Político, *Enrique Bustamante*. El Secretario, *J. A. Espínosa*.

(1) El Concejo Municipal de Quito, Reformatorio

En uso de sus atribuciones,



DECRETA:

las siguientes adiciones a la Ordenanza que regula el cobro del impuesto que grava a los predios urbanos del cantón, sancionada el 22 de junio de 1926.

.....  
Art. 2º. Al Art. 58, agréguese la siguiente disposición transitoria:

«Los reclamos que se hallaren pendientes de las resoluciones del Concejo, sobre la aplicación de la alícuota del impuesto predial urbano, a propiedades que han sido objeto de partición legal, se resolverán de acuerdo con lo previsto en el Art. 33 de esta Ordenanza, quedando exentos los reclamantes de los recargos que se hubiesen causado por la mora en el pago del impuesto.

.....  
Dado, etc.

Ordenanza de 29 de abril de 1933. Gaceta Municipal No. 63, de 31 de mayo del mismo año Pág. 222

Tiene jurisprudencia: se la pone a continuación



JURISPRUDENCIA AL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA ORDENANZA  
QUE ADICIONA LA DE 22 DE JUNIO DE 1926, EN EL  
ARTÍCULO 58, SOBRE IMPUESTO PREDIAL URBANO

(Informe de la Sindicatura Municipal aprobado en sesión de 26 de abril de 1933).

Nº. 54. Quito, a 18 de abril de 1933.

Señor Presidente del I. Concejo Municipal.

El Art. 2º. de la Ordenanza que adiciona la de 16 de junio de 1926 sobre cobro del impuesto que grava a los predios urbanos del cantón, dice:

En el caso de este artículo, es legal exonerar de los recargos causados por la mora en el pago del impuesto

«Los reclamos que se hallaren pendientes de las resoluciones del Concejo, sobre la aplicación de la alícuota del impuesto predial urbano a propiedades que han sido objeto de partición legal, se resolverán de acuerdo con lo previsto en el Art. 33 de la Ordenanza, quedando exentos los reclamantes de los recargos que se hubiesen causado por la mora en el pago del impuesto».

Leído este artículo en el Concejo hace algunos días, el señor Tesorero en guarda de la regularidad administrativa del cantón, preguntó si era legal exonerar de los recargos causados por la mora en el pago del impuesto.

Conflicto entre este artículo y el numeral XI del Art. 2 de la Ley que señala fondos para las Municipalidades

La duda del señor Tesorero obedeció a que el numeral XI del Art. 2º. de la Ley que señala fondos para las Municipalidades, dispone que a partir del 1º. de julio de cada año, procederán los Tesoreros Municipales al cobro del impuesto urbano por la jurisdicción coactiva, y, sobre la suma que cada contribuyente le corresponda pagar, cobrarán un recargo de 2%, 4%, 6%, 8% y hasta el 25% según los casos.

La Ley que crea el recargo, lo establece en forma imperativa. La Ordenanza, o mejor, el proyecto de Ordenanza, cuyo artículo copié



al principio, exonera el recargo. ¿Puede una Ordenanza exonerar del cumplimiento de una disposición legal de carácter imperativo? La Corte Suprema decidió ya que si hay colisión entre una Ordenanza Municipal y un Decreto Legislativo, debe prevalecer éste.

¿Hay colisión entre el numeral XI del Art. 2º. de la Ley de enero de 1926 y el proyecto de Ordenanza que hoy estudia el Concejo? Antes de emitir mi modesto parecer a este respecto, debo declarar que mi obligación se limita a opinar sobre un proyecto de Ordenanza, es decir sobre algo completamente impersonal, que no se propone dañar en particular a nadie. Bien sabido es que de toda ley puede aprovecharse indebidamente la astucia humana. Este es un mal sin remedio: ni ha de impedir este mal el que se den leyes ni el que se las interprete de acuerdo con la razón.

La Ley de 1926 dice que los contribuyentes por el impuesto municipal son deudores a partir del 1º. de enero de cada año por la suma que determine el Catastro correspondiente.

A partir del mes de julio de cada año, quienes no hayan pagado el impuesto respectivo son mirados por el Legislador como morosos. El Tesorero debe ejercer contra ellos la jurisdicción coactiva y recargarles de acuerdo con la escala que indiqué anteriormente.

Aunque la ley (numeral XI, Art. 2º.) no es suficientemente explícita, en mi parecer el recargo supone la mora. La mora es la resistencia de hecho a cumplir el derecho. (Art. 1.541 del Código Civil). La mora se define en el Diccionario de Legislación y Jurisprudencia de Scriche: «La dilación o tardanza en cumplir con la obligación».

Quien por motivos razonables no sabe la suma que debe pagar por impuesto municipal; quien de buena fe, ignora la cuota que está obligado a pagar (estoy usando las expresiones de la Ley de 1926) no puede decirse que esté en

Ref. Código Civil: Arts. 1.541, 1.542, 1.543, 1.547, 1.548, 1.549



mora, es decir, que esté resistiendo de hecho a cumplir el derecho. Por consiguiente, quien no paga por obscuridad de ley, porque racionalmente cree que debe pagar menos, etc., no está sujeto al recargo previsto en la Ley de Impuestos Municipales y la Ordenanza hace muy bien en aclarar este aspecto de la Ley, en reglamentarla para impedir verdaderas injusticias.

Sería absurdo que una persona que ha presentado un reclamo racional y fundado respecto al cobro del impuesto municipal en el mes de enero, esté sujeta a pagar recargo tan sólo porque el Concejo se haya descuidado de atender a la solicitud y no la haya despachado sino en el mes de octubre.

Me parece, refiriéndome a la parte final del proyecto de Ordenanza Municipal, en su artículo segundo que los reclamantes que han presentado una solicitud antes del mes de julio, deben estar libres de todo recargo, y quienes la presentaren en meses posteriores, están libres de los recargos previstos para los meses subsiguientes a aquel en que presentaron su solicitud.

En conclusión, no encuentro ilegalidad en las adiciones a la Ordenanza que regula el cobro del impuesto que grava los predios urbanos del cantón.

No terminaré este informe, sin permitirme añadir que todo el proyecto de Ordenanza no es sino una sensata aplicación de los principios generales de Derecho Civil al caso en que se haya practicado e inscrito la partición legal. En general, la obligación de pagar impuestos es divisible y cada uno de los codeudores está solamente obligado al pago de su cuota. (Art. 1516 del Código Civil).

Este principio no puede ser violado so pretexto de darse más eficacia al cobro de los impuestos municipales. En la administración pública ha de armonizarse siempre la eficacia y

Ref. Arts. 1.514,  
1.515, 1.516, 1.523,  
1.524  
Código Civil

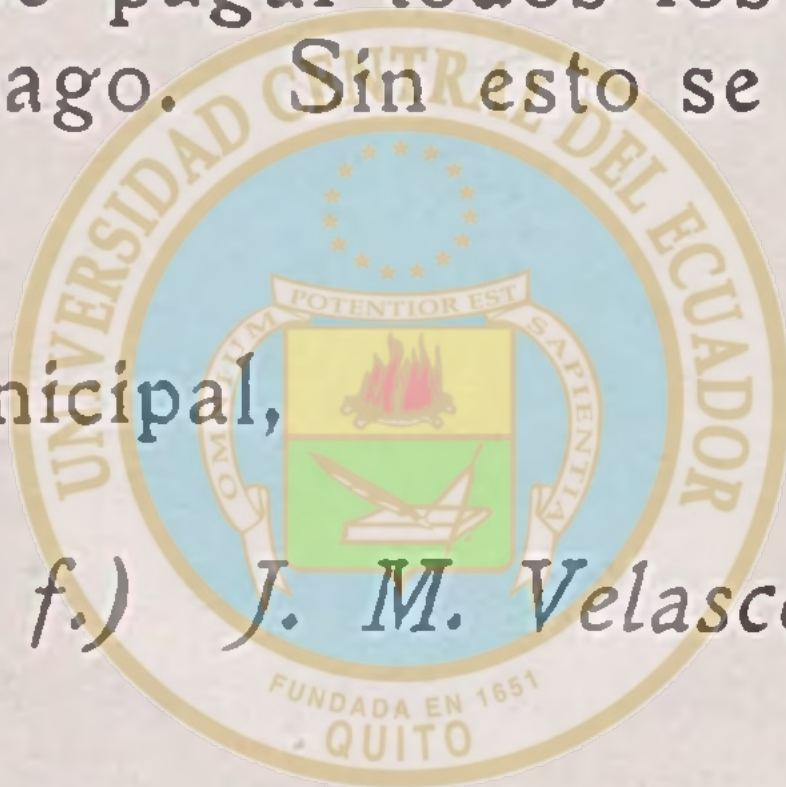


la justicia, sin violar jamás la justicia en aras de la eficacia.

Dije en el texto del informe que los reclamantes que presenten su solicitud después del mes de julio están libres de los recargos previstos en la ley para los meses subsiguientes a aquel en que presentaren su solicitud. Esto supone que un reclamante que presente su solicitud en setiembre está sujeto al recargo previsto para julio, agosto y setiembre; porque la regularidad de la administración municipal, exige que las personas hagan sus reclamos en tiempo oportuno. De otro modo la administración sería una anarquía y un desorden. Si el reclamo es rechazado por improcedente o injusto, el reclamante debe pagar todos los recargos hasta la fecha del pago. Sin esto se fomentaría los abusos.

Procurador Municipal,

f.) *J. M. Velasco Ibarra.*



ÁREA HISTÓRICA

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PUNTO ANTERIOR

Nº. 56. 19 de abril de 1933.

Señor Presidente del I. Concejo Municipal.

Informado un miembro del Concejo de mi informe Nº. 54 en lo relativo al concepto de recargos por mora, me presentó la siguiente dificultad: «Resuelta favorablemente a un reclamante una solicitud, no tiene, según usted la obligación de pagar un recargo, si la solicitud ha sido presentada en tiempo oportuno, ¿tendría derecho a los descuentos que prevé la ley?; presentada una solicitud en el mes de mayo, ¿tendría derecho al descuento del 4<sup>0</sup>/0?».

Presentada una solicitud, en el mes de mayo vgr. el reclamante no tiene derecho al descuento legal

Me parece que los descuentos que prevé la ley hasta el mes de junio inclusive constituyen

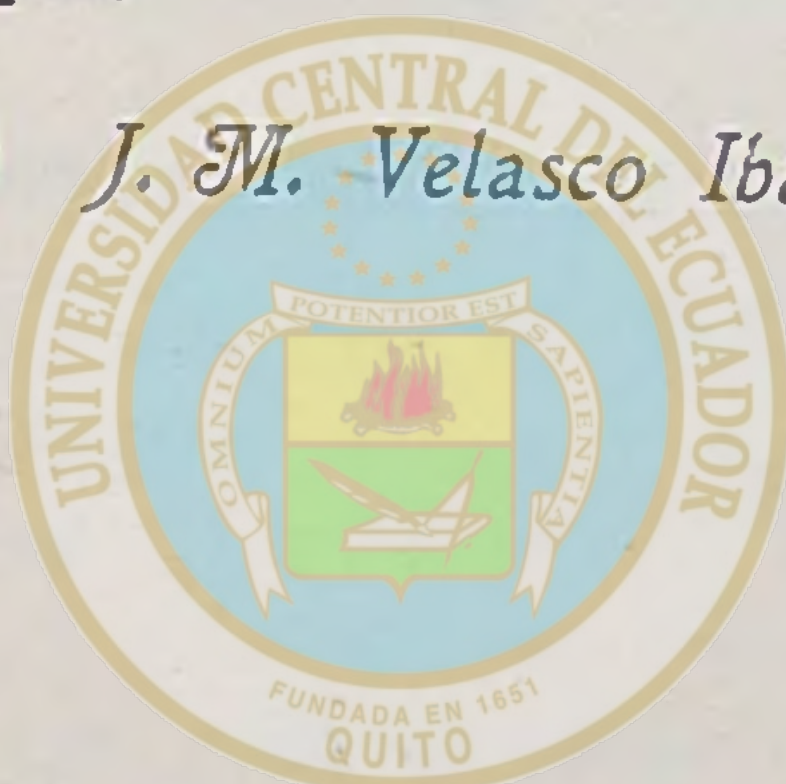


un estímulo para que el contribuyente pague pronto. Quien de hecho no ha pagado no tiene derecho al premio. Sería menester que el reclamante haga al menos el pago provisional para que tenga derecho al descuento determinado para el mes en que hizo la solicitud.

Quien no paga, mientras hacer un reclamo por justo motivo, reconocido así por el Concejo, ni debe ser castigado, porque no está en mora, a falta de una obligación clara, ni debe ser premiado, porque de hecho no ha pagado. El descuento es una creación artificial del Legislador, para estimular el pago.

Procurador Municipal,

f.) *J. M. Velasco Ibarra.*



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



REFERENCIAS

Ley de Régimen Municipal

Arts. 83 y 88

Ley de Impuestos Municipales

Artículo segundo

COMPARACIÓN

Ordenanza Municipal

Ley de Impuestos Municipales

Aí Art. 1º.	Art. 2º. Inc. i) y xii)
» » 2º.	» » xii) Decreto Re-
» » 3º.	» » » Decreto Re-
» » 4º.	» » » i) y ii)
» » 5º.	» » » iii)
» » 7º.	» » » viii)
» » 8º. 1º.)	» » » iii) y iv) a)
» » » 2º.)	» » » iii)
» » » 3º.)	» » » iv) c)
» » » 4º.)	» » » iv) b)
» » » 5º.)	» » » iv) d)
» » 9º. 1º.)	» » » iv) f)
» » » 2º.)	» » » v)
» » » 3º.)	» » » vi)
» » 11	» » » v) d) inc. 2
» » 19	» » » ix)
» » 38	» » » x)
» » 40	» » » xi)

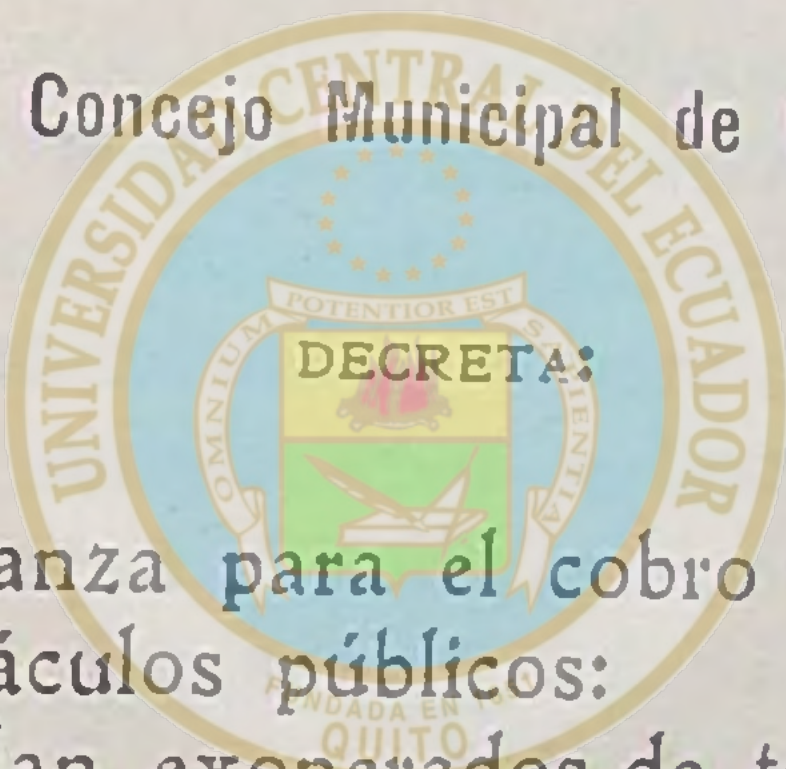


## CAPITULO SEGUNDO

### ORDENANZA MUNICIPAL QUE GRAVA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE DEN EN EL CANTÓN

(G. M. Nos. 45-46 de Nbre. y Dbre. de 1931).

El Concejo Municipal de Quito,



la siguiente Ordenanza para el cobro del impuesto a los espectáculos públicos:

Art. 1º. Quedan exonerados de todo impuesto municipal, los siguientes actos de carácter público:

Exoneraciones

Conferencias científicas, artísticas, literarias, de viajes, etc., aún cuando sean pagadas las entradas para escucharlas.

Conferencias

Los recitales poéticos, los conciertos vocales o instrumentales, y las representaciones de Opera.

Recitales, Conciertos

Operas

También quedan exonerados del pago del impuesto las representaciones del cinematógrafo educativo, siempre que tengan carácter exclusivamente pedagógico o recreativo, estén dedicadas a los niños y se les dé en los locales escolares.

Cine

Art. 2º. Los otros espectáculos públicos pagarán al Municipio de Quito, sobre el producto bruto de la venta de localidades, en la siguiente proporción:

Proporción del impuesto y espectáculos que grava



- a) El 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, los espectáculos deportivos;
- b) El 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, las representaciones de opereta y zarzuela; las representaciones coreográficas, la tragedia, el drama, la comedia y el sainete;
- c) El 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, los espectáculos llamados de variedades y las revistas de mero espectáculo;
- ch) El 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, las carreras de caballos y las corridas de toros;
- d) El 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, las representaciones cinematográficas, sean o no sonoras;
- e) El 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, las sesiones de hipnotismo, sugestión, adivinación del pensamiento, etc.;
- f) El 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, los espectáculos de box, lucha romana y lucha de fieras;

Los espectáculos no especificados en esta Ordenanza, pagarán del 5 al 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, a juicio de la Comisión de Espectáculos.

Art. 3°. El Concejo podrá exonerar del pago del impuesto a los espectáculos determinados en el artículo anterior, cuando tengan por objeto recaudar fondos para alguna obra nacional o de beneficencia pública y cuyo producto íntegro, deducidos los gastos del espectáculo, se destine a estos objetos.

Casos de exoneración a los espectáculos anteriores

Facúltase al Concejo para que exonere del impuesto de espectáculos a las Compañías Nacionales de Teatro que lo soliciten.

Art. 4°. Se exceptúan del pago del impuesto, cuando lo haya, el palco Presidencial, el de los Ministros de Estado, el de la Municipalidad, el de la Intendencia de Policía y las entradas destinadas a los periódicos diarios, hasta la proporción de dos entradas por cada uno de ellos. También se exceptúan del pago del impuesto, las entradas de los empleados de orden, seguridad o censura que estén obligados a asistir a los espectáculos públicos para el desempeño de sus funciones; la de los músicos que componen la orquesta, para quienes se expedirá entradas especiales, y, hasta tres entradas para los empleados del control de las Empresas de Espectáculos.

Excepciones al pago del impuesto



Art. 5°. Las entradas o boletos, antes de ser puestos a la venta, serán sellados por la Oficina de Comprobación Municipal, la misma que para el cobro del impuesto comunicará a la Tesorería el valor de los boletos sellados.

Sellada de boletos

Art. 6°. La Empresa que no hiciere sellar las entradas y que las pusiere a la venta sin este requisito, o las que permitieren el ingreso a los espectáculos sin que se hubieren emitido previamente las respectivas entradas, incurrirán en la multa de diez a cien sucres, en cada caso, la que será impuesta por el Comisario Municipal, en juicio verbal sumario, actuando de Secretario el mismo de su Despacho, sin perjuicio de abonar el respectivo impuesto.

Sanciones

Art. 7°. La autoridad de Policía, para conceder el permiso a que se refiere el Art. 80 del Código de Policía, exigirá, previamente, la presentación del recibo de haber pagado el impuesto correspondiente a la función anterior en la Tesorería. (1)

Policia

Art. 8°. La presente Ordenanza deroga las anteriores sobre la misma materia y comenzará a regir desde el primero de enero de mil novecientos treinta y dos.

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal, en Quito, a veinte de noviembre de mil novecientos treinta y uno. El Presidente del Concejo, *f.) Carlos Freile Larrea*. El Secretario Municipal, *f.) J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN. Quito, a veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno. EJECÚTESE. *Enrique Bustamante*. El Secretario, *J. A. Espínosa*.

---

(1) Código de Policía. Art. 80. «Sin permiso escrito de la Policía, no tendrá lugar ningún espectáculo público.»



REFERENCIAS A LA ORDENANZA QUE GRAVA LOS  
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE DEN  
EN EL CANTÓN

Ley de Régimen Municipal

Art. 17. N°. 26, (Son atribuciones del Concejo):

«Dictar reglamentos de juego y de espectáculos públicos permitidos por la ley.»

Art. 83. Es renta Municipal el impuesto a los predios urbanos, vehículos, espectáculos, licores, agentes de negocios y transacciones, casas de préstamo, billares, etc., todo de conformidad con el Decreto Supremo de 30 de enero de 1926.

Exceptúase del impuesto sobre espectáculos los destinados a extensión cultural, como recitales, conferencias y teatro nacional, los deportivos organizados por asociaciones reconocidas oficialmente y los de beneficio para instituciones.

Código de Policía

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Art. 38. (Serán castigados con multa de veinte centavos a seis sucres):

N°. 63. Los que cerraren las puertas de los teatros y demás lugares públicos mientras haya concurrencia en ellos.

N°. 77. Los que no guardaren la debida compostura y moderación en los templos, teatros y otros lugares de reunión; pudiendo ser sacados inmediatamente por cualquiera de los Agentes de Policía del lugar de la contravención.

Art. 41, (Serán castigados con multa de quince a veintidós sucres y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente:

N°. 24. Los que dieran cualquier espectáculo público sin permiso de la Policía.



## CAPITULO TERCERO

ORDENANZA MUNICIPAL QUE GRAVA LA VENTA DE  
LICORES Y BEBIDAS FERMENTADAS EXTRANJERAS;  
LOS AGENTES DE ADUANA, CORREDORES DE VALO-  
RES FIDUCIARIOS, BIENES RAICES, DE MERCANCIAS,  
CASAS DE PRESTAMOS. BILLARES, etc.

(Gaceta Municipal N°. 11 de marzo  
31 de 1926)

El Concejo Municipal de Quito,

En uso de la facultad que le concede el Art.  
4°. del Decreto de la Junta de Gobierno Provi-  
sional, de 30 de enero del presente año:

Ordenanza de 27  
de febr. de 1926

DECRETA:

### ARTICULO PRIMERO

a) Los dueños de establecimientos de ven-  
ta de licores y bebidas fermentadas extranjeras;  
los Agentes de Aduana, Corredores de Valores  
Fiduciarios, bienes raíces, de mercancías y cual-  
quier otro negocio de esta índole; los dueños  
de casas de préstamos sobre prendas y retro-  
venta, los de salones de billares; los dueños o  
empresarios de vehículos o agencias funerarias,  
para ejercer cualesquiera de los negocios enu-  
merados, están obligados a inscribirse en los  
registros que, al efecto llevará la Oficina de

Inscripción en los  
Registros de Com-  
probación



Comprobación Municipal, dentro de los primeros treinta días de cada año, o dentro de los primeros treinta días siguientes al principio de sus operaciones de negocios, aún cuando estén subastados o se subastaren los impuestos que gravan los referidos ramos.

Reformado por  
Ordenanza de 22  
de diciembre de  
1930  
Art. 1º., inc. 2º.

Si por cualquier motivo dejare de existir la Oficina de Comprobación, desempeñará todas las funciones inherentes a ella la Autoridad, empleado u oficina que disponga el Concejo en una sola sesión.

Referencia:  
Art. 1º. inc. 3º.  
Ordenanza de 22  
de diciembre de  
1930

b) La inscripción en el Registro se hará expresando: el nombre del dueño o empresario del vehículo; del dueño o empresario del Establecimiento o del negocio; la ubicación de éstos y más especificaciones según lo exija cada ramo para su mayor claridad.

Art. 1º. inc. 4º.  
1930  
Lo que contiene  
la inscripción

Hecha la inscripción y en vista del comprobante, el Tesorero Municipal conferirá la respectiva patente que autorice, mes por mes, a ejercer los negocios para los cuales se hubieren registrado las inscripciones previo el respectivo pago de los impuestos que a continuación se expresan:

Art. 1º. inc. 5º.  
1930  
Otorgamiento de  
patentes

c) Todas las personas determinadas en el inc. a) del presente artículo están obligadas a conservar las respectivas patentes en un lugar público de sus establecimientos o a llevarlas consigo, según los casos; o si se tratare de vehículos a adherirlas en el lugar más adecuado de ellos de modo que estén a la vista. Dichas patentes serán exhibidas siempre que lo exijan los empleados municipales o los Agentes de Policía, advirtiéndose que si así no se hiciere, se impondrá por cada vez una multa de diez sucres.

Conservación de  
patentes  
Esta disposición  
no existe en la  
Ordenanza de  
1930

ch) La omisión en obtener la patente en todos los casos que requiere esta Ordenanza, será penada con la multa de diez a cincuenta sucres, según la categoría de las patentes, sin perjuicio de satisfacer el valor de los impuestos que

(Reformado)  
Art. 6º. inc. 3º.  
1930  
Sanciones por no  
obtenerla



*se estuviere debiendo por haber ejercido el negocio.*

d) Todo el que haya de cesar en el ejercicio de los negocios e industrias a que se refiere esta Ordenanza, deberá ponerlo en conocimiento de la Oficina de Comprobación dentro del mes en que debe terminar ese ejercicio, expresando si es por causa de cesación, de traspaso o de cesión del negocio, y a presentar la respectiva patente para su cancelación; si así no lo hiciere, seguirá constando en los catastros, para los efectos del cobro.

No existe en la Ordenanza de 1930

Cesación de negocios o industrias

Si la cesación fuere por fallecimiento del contribuyente o por causa de imposibilidad física, cumplirán con tal obligación, según los casos, sus deudos o apoderado legal, dentro de los diez días siguientes a aquel en que ocurra el hecho.

El Jefe de Comprobación, así que reciba el aviso de clausura, comunicará inmediatamente este particular al Presidente del Concejo y al Tesorero. El Presidente ordenará tanto a éste como a la Oficina de Comprobación las cancelaciones de la patente y de la respectiva matrícula.

Art. 4º. parte final. 1930

## ARTICULO SEGUNDO

Los que vendieren licores y más bebidas fermentadas extranjeras en casas, almacenes, clubs, sociedades, hoteles, tiendas, bodegas, covachas, cantinas, pulperías, etc., etc., pagarán por dicha venta las siguientes cuotas mensuales.

Licores y más bebidas fermentadas  
No existe en la Ordenanza

Los de primera clase, cincuenta sucres.

Los de segunda clase, cuarenta sucres.

Los de tercera clase, treinta sucres.

Los de cuarta claae, veinte sucres.

Los de quinta clase, quince sucres.

Los de sexta clase, diez sucres.



## ARTICULO TERCERO

a) *Los Agentes de Aduana, los corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías y cualquier otro negocio de esta índole pagarán el siguiente impuesto mensual:*

Reformado por el Art. 2º. de la Ordenanza de 1930 Agentes de Aduana, etc.

Los de primera clase, cincuenta sucres.

Los de segunda clase, cuarenta sucres.

Los de tercera clase, treinta sucres.

b) Los corredores que pertenecen a la raza india, quedan exentos del pago del impuesto a que se refiere este artículo.

Corredores de la raza india

## ARTICULO CUARTO

a) Grávanse las casas de préstamos y retroventa con el impuesto mensual de treinta a cien sucres, según su clasificación.

No consta en la Ordenanza de 1930

Casas de Préstamos

Exceptúanse los Bancos, las Compañías Anónimas de Crédito y demás establecimientos regidos por Leyes Bancarias.

Subsiste la disposición legal

b) Para el cobro de estos impuestos se dividen los Establecimientos en cuatro clases, que pagarán: ochenta sucres, los de primera; sesenta sucres, los de segunda; cuarenta y cinco sucres, los de tercera y treinta sucres, los de cuarta.

Clasificación

## ARTICULO QUINTO

Los propietarios o empresarios de salones de billar, inclusive los de clubs, sociedades, hoteles, etc., pagarán diez sucres mensuales por cada mesa de billar para el servicio del público.

Billares  
Subsiste esta disposición legal

## ARTICULO SEXTO

a) Los dueños o empresarios de vehículos que los tuvieran en servicio, pagarán mensualmente el siguiente impuesto:

Vehículos Derogado. Art. 7º. Ordenanza de 1930

Por cada automóvil de servicio privado, diez sucres.



Por cada automóvil de servicio público, diez sucres.

Por cada autocamión de servicio público o privado, ocho sucres.

Por cada coche de servicio público, tres sucres.

Por cada coche de servicio privado, cinco sucres.

Por cada birloche, tres sucres.

Por cada carreta de tracción animal, cinco sucres.

b) El dueño de un vehículo que quisiera retirarlo del servicio dará aviso por escrito a la Oficina de Comprobación Municipal, y en este caso el cobro del impuesto respectivo cesará desde el mes siguiente a aquel en que se hubiere dado el aviso. El que volviere a poner en servicio un vehículo que hubiere anunciado lo retiraba del servicio, sin comunicar el hecho previamente a la Oficina de Comprobación, pagará una multa de treinta a sesenta sucres que le impondrá el Comisario Municipal, sin perjuicio de seguir abonando en lo sucesivo el respectivo impuesto.

Retiro de vehículos

Art. 9º. Ordenanza de 1930  
Subsiste

c) Quedan exentos del pago del impuesto los vehículos de propiedad del Estado, de los Ministros Diplomáticos, de la Junta de Beneficencia y los de la Cruz Roja, debiendo sí inscribirse y recabar gratuitamente la respectiva patente. (1)

Exenciones  
Art. 10. Ordenanza de 1930  
Subsiste  
Tiene adiciones.  
Ord. de 9 de diciembre de 1927

(1) El Concejo Municipal de Quito;

En uso de la facultad que le concede el Art. 4º. del Decreto de la Junta de Gobierno Provisional de 30 de enero de 1926;

#### DECRETA:

Art. 1º. Al artículo sexto de la Ordenanza sancionada el 27 de febrero de 1926, que grava la venta de licores y bebidas extranjeras, las agencias de aduana, etc., agréguense los siguientes incisos.

Gaceta Municipal  
No. 22 de enero de 1928



## ARTICULO SEPTIMO

a) Los dueños o empresarios de Agencias Funerarias, pagarán, por cada vez que salgan al servicio sus carrozas el siguiente impuesto:

Agencias Funerarias  
Art. 12. Ord. de 1930  
Subsiste

Por cada autocarroza, cincuenta sucres.

Por cada carroza de tracción animal de clase extra, cincuenta sucres.

Por cada carroza de tracción animal de clase primera, treinta sucres.

Por cada carroza de tracción animal de clase segunda, diez sucres.

## ARTICULO OCTAVO

a) El Jefe Político, Tesorero, Jefe de Comprobación y un Comisionado especial, si lo tuviere por conveniente el Concejo, harán las calificaciones de todos los negocios enumerados en los artículos precedentes, teniendo en cuenta la importancia del negocio, la situación del establecimiento y las circunstancias y condiciones que concurran al aumento de las operaciones, todo lo cual queda a su recta apreciación.

Comisión calificadora  
Suprimido por el Art. 3º. de la Ordenanza de 1930

d) Quedan también exentos del pago del impuesto los vehículos que, hallándose matriculados en otro Cantón, llegaren de tránsito a esta ciudad; pero en este caso, no podrán hacer ningún servicio urbano. Si lo hicieren, abonarán el impuesto correspondiente.

Subsiste

e) Los dueños de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros y carga a otros cantones, cuyas agencias principales se hallaren situadas en el Cantón Quito, se hallan obligados a matricularse en la Oficina de Comprobación Municipal y a verificar el pago del impuesto. La falta de cumplimiento a esta disposición será sancionada en cada caso, por el Comisario Municipal, con la multa de cincuenta a quinientos sucres, sin perjuicio del pago del gravamen.

Subsiste

Dado, etc.



b) Con vista de dichas calificaciones el Jefe de Comprobación formará los Catastros correspondientes y los someterá a la consideración del Concejo a más tardar hasta el quince de enero de cada año. Desde esta fecha y por quince días consecutivos, dichos Catastros estarán a disposición del público en la Secretaría Municipal, para que los interesados puedan conocerlos y presentar sus reclamaciones dentro del término señalado, vencido el cual el Concejo dará su aprobación y remitirá al Tesorero copia de ellos legalizada por el Presidente y el Secretario para la exacta recaudación de los impuestos. (1)

Catastros  
Suprimido por el  
Art. 2º. de la Or-  
denanza modifi-  
catoria de 9 de  
diciembre de 1927  
G. M. No. 22 de  
enero de 1928

c) El Jefe de Comprobación enviará con la oportunidad debida, mes por mes, la razón de las inscripciones que se efectúen en su Oficina durante el año, para el ejercicio de cualquiera de los negocios previstos en esta Ordenanza, y comunicará también la fecha de cesación o clausura de los mismos al Concejo, con el objeto de que el Presidente ordene las respectivas altas y bajas en los libros de Tesorería.

Deberes del Jefe  
de Comprobación  
Derogado. Art.  
4º. Ord. 1930

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

(1) Art. 2º. «La letra b) del Art. 8º., dirá: Con vista de dichas calificaciones, el Jefe de Comprobación formará los Catastros correspondientes y los someterá a la consideración del Concejo, a más tardar hasta el treinta y uno de enero de cada año. Desde esta fecha, y por quince días consecutivos, dichos Catastros estarán a disposición del público en la Secretaría Municipal, para que los interesados puedan conocerlos y presentar sus reclamaciones, dentro del término señalado, vencido el cual, el Concejo dará su aprobación y remitirá al Tesorero copia de ellos, legalizada por el Presidente y el Secretario, para la exacta recaudación de los impuestos que deben cobrarse desde enero de cada año.

Modificatorio  
Vuelto a modifi-  
car. Ord. de 22  
de diciembre de  
1930  
Art. 3º.

Dado, etc.



## ARTICULO NOVENO

Todos los demás impuestos que, conforme a la Ley de Régimen Municipal u otros Decretos Legislativos especiales y que no han sido derogados de manera especial, ha estado percibiendo la Municipalidad hasta el 31 de diciembre de 1925, continuará ella recaudándolos, desde el primero de enero del presente año, en uso de la autorización que le concede el inciso primero del artículo sexto del Decreto de la Junta de Gobierno Provisional de 30 de enero del presente año, en la misma forma y tasas y con sujeción a las correspondientes Ordenanzas y resoluciones expedidas por el Concejo, las mismas que, al efecto, se declaran vigentes en todas sus partes, hasta que sean reformadas o derogadas.

Téngase presente que el Art. 6º. del Decreto de 30 de enero de 1926, corresponde de acuerdo con la ley de 10 de diciembre de 1930, a OTROS FONDOS MUNICIPALES Subsiste

## ARTICULO DECIMO

a) Los impuestos establecidos por esta Ordenanza los hará efectivos el Tesorero Municipal a partir del primero de enero del año en curso.

Derogado  
Art. 13. Ordenanza 1930

b) Para el efecto del cobro de los impuestos determinados en la presente Ordenanza, el mes principiado se tendrá por terminado.

Cómputo del mes  
Art. 14. Ordenanza 1930. Subsiste en la parte correspondiente. Licores, billares, casas de préstamos

c) La recaudación de los impuestos municipales se hará directamente por la Tesorería y por asentamiento. En este segundo caso, el asentista se subrogará en todos los derechos del Municipio sin que la Municipalidad sea responsable de ningún accidente que en el negocio sobreviniere al asentista, quien para el cobro de las pensiones a los contribuyentes se someterá al Catastro especial, y por tanto no podrá excederse de las cuotas fijadas en éste.

Recaudación de los impuestos  
Art. 5º. Ord. de 1930. Subsiste en la parte correspondiente. Licores, billares, casas de préstamos

Para el cobro de las pensiones de los que principiaren sus negocios después de formados los Catastros, el rematista se sujetará a la calificación que, hecha por el Jefe Político, Tesore-

Reformado  
Art. 5º. Inc. 2º. Ord. de 1930



ro y Jefe de Comprobación, haya sido aprobada por el Concejo.

ch) Todos los impuestos de que trata esta Ordenanza se cobrarán en las parroquias urbanas y rurales de este cantón.

Art. 5º. Inc. 3º.  
Ord. de 1930  
Subsiste

d) El que denunciare que se está ejerciendo algún negocio de los puntualizados en esta Ordenanza sin la respectiva patente tendrá opción al cincuenta por ciento de la multa que se cobrarse.

Denuncias  
Art. 6º. Inc. 1º.  
Ord. de 1930  
Subsiste

El pago se hará por la Tesorería Municipal previa comprobación fehaciente del hecho por la Policía Municipal.

Reformado  
Art. 6º. Inc. 2º.  
Ord. de 1930

e) El Comisario Municipal, será la Autoridad que juzgue todas las infracciones puntualizadas en la presente Ordenanza y lo hará así en juicio verbal sumario.

Id. Id.

f) Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y de acuerdo con el inc. iii) del artículo cuarto de la Ley de 30 de enero último, los Agentes de las Policías prestarán el auxilio que se les requiera.

Art. 27. Ord. de 1930  
Subsiste

g) Prohíbese la exoneración de los impuestos determinados en esta Ordenanza, la que regirá desde el primero de enero del presente año, en cumplimiento con lo que dispone el Decreto de 5 de febrero del año en curso de la Junta de Gobierno Provisional. (1)

Art. 28. Ord. de 1930  
Subsiste  
Hay adiciones

(1) Art. 3º. Al Art. 10, agréguese los siguientes incisos:

Ordenanza Reformatoria de 9 de diciembre de 1927  
Subsiste

h) En el caso de que un industrial tuviera más de un establecimiento para la venta de licores, etc., cada establecimiento será calificado separadamente para el impuesto. Lo propio se observará respecto de los corredores o agentes comerciales que ejerciten sus actividades de correduría, agencias de negocios por cuenta de una casa principal sea que esa forma de negocio la disfracen o no con contratos que celebren con agentes ya inscritos, o que corredores que obtengan las patentes, establezcan oficinas servidas por corresponsales o apoderados de ellos».



## DISPOSICION TRANSITORIA

Los Catastros para el año actual que deben ser formados por la Oficina de Comprobación, estarán concluidos de acuerdo con las disposiciones de esta Ordenanza, a más tardar hasta el 31 del mes de marzo próximo.

Reformado. Ord. de 1930. Disposición transitoria. Art. 1º.

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal, en Quito, a veinticuatro de febrero de mil novecientos veintiséis. El Presidente, *f.) Alberto Bustamante*. El Secretario Municipal, *f.) J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN. Quito, a veintisiete de febrero de mil novecientos veintiséis. EJECÚTESE. *f.) Rafael León L.* El Secretario, *f.) J. A. Espinosa*. (1)

i) Conforme al Art. 4º. N°. 2, letra b) del Decreto Supremo de 30 de enero de 1926, son corredores para el efecto del pago del impuesto, no solamente los titulados en la forma que prescribe el Código de Comercio, sino todo aquel que interviene como intermediario de negocios, de la índole que fueren, en lo que respecta a la colocación de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías en general, sea que se titulen agentes, corredores, despachadores, vendedores, o con cualquiera otra denominación análoga.

Subsiste

Dado, etc.

(1) Existen dos Ordenanzas. La de 27 de febrero de 1926 que antecede, y la de 22 de diciembre de 1930 que se pone a continuación. Esta última reglamenta, además, los impuestos de Alcabalas, Registros, anotaciones, cigarrillos.



## CAPITULO CUARTO

### ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS SEGUN LA LEY DE AUTONOMIA ECONOMICA DE LOS MUNICIPIOS

(G. M. N°. 72 de febrero de 1934)

El Concejo Municipal de Quito,

en uso de la facultad que le conceden las Leyes de Régimen Municipal, de 30 de enero de 1926 y de 26 de noviembre de 1930, y de acuerdo con la reglamentación expedida por el Concejo, en sesión de 12 de marzo de 1930;

Ord. de 22 de diciembre de 1930

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL  
DECRETA:

la siguiente Ordenanza para el cobro de los impuestos establecidos en las citadas Leyes:

Art. 1°. Los *Agentes de Aduana, Corre-  
dores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de  
mercancías*; los Agentes de Seguros por cuenta  
de Compañías domiciliadas en el exterior, y, en  
general, los Representantes de Casas Extranje-  
ras que concierten negocios que han de ejecu-  
tarse por la Casa principal, domiciliada en el  
Exterior, los Intermediarios, es decir, las perso-  
nas que, sin tomar sobre sí la responsabilidad  
de un negocio ni actuar como dependientes o  
apoderados, facilitan los negocios de otras, los  
*dueños o empresarios de vehículos o de Agencias  
Funerarias*, y todo el que quisiere ejercer acti-  
vidades de esta índole, están obligados a ins-

Inscripción en los  
Registros

Art. 1°. Ord. de  
1926

Lo subrayado está  
tomado en cuen-  
ta en dicha Orde-  
nanza, que trata  
además de licores  
extranjeros, casas  
de préstamos y  
billares

Tiene supresio-  
nes



cribirse en los Registros que, para el efecto, llevará la Oficina de Comprobación Municipal. (1)

Las inscripciones se harán y renovarán anualmente en la primera quincena del mes de diciembre, o dentro de los 10 primeros días siguientes al principio de las operaciones indicadas en el inciso anterior, aún cuando estén subastados los impuestos. Los que se inscribieren en los 10 primeros días siguientes al principio de sus operaciones, quedan también obligados a renovar su inscripción anualmente en la primera quincena del mes de diciembre.

Si por cualquier circunstancia dejare de existir la Oficina de Comprobación, desempeñará todas las funciones inherentes a ella, el empleado u oficina designados, en una sola sesión, por el Concejo para este fin.

La inscripción en el Registro se hará expresando el nombre del dueño o empresario de vehículos, el nombre del Agente de Aduana, Corredor, intermediario, Representante de Casas Extranjeras, etc., etc., la ubicación de las oficinas y más noticias necesarias a los fines de esta Ordenanza

Hecha la inscripción, en vista del respectivo comprobante, el Tesorero Municipal conferirá la correspondiente patente que autorice, mes por mes, a ejercer los negocios para los que se hubieren hecho las inscripciones. Antes de conferir la patente, el Tesorero exigirá el pago de los impuestos que se expresan a continuación.

Plazo para las inscripciones  
Art. 1º. a) inc. 1º. Ord. 1926  
Reforma la parte final de la Ord. de 1926

Oficina de Comprobación  
Art. 1º. a) inc. 2º. Ord. 1926

Lo que contiene la inscripción  
Art. 1º. b) inc. 1º. Ord. 1926  
Disposición análoga

Patentes  
Art. 1º. b) inc. 2º. Ord. 1926  
Análogo

(1) El Concejo Municipal de Quito,

#### DECRETA:

Art. 1º. Del inc. 1º. del Art. 1º. de la Ordenanza sancionada el 24 de diciembre de 1930, suprimanse las palabras: «ni actuar como dependientes o apoderados».

Dado, etc.

Ordenanza reformativa de 20 de noviembre de 1931  
G. M. No. 72 de febrero. 1934



Art. 2º. Los Agentes de Aduana, Corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías, y, en general cualquier intermediario de los definidos en el Reglamento Municipal de 12 de marzo de 1930, pagará el siguiente impuesto mensual:

Agentes de Aduana, etc.  
Art. 3º. a) Ord. 1926. Reforma a ésta

Los de primera clase.....	S/. 100,00
« « segunda clase .....	« 80,00
« « tercera clase .....	« 60,00
« « cuarta clase .....	« 50,00
« « quinta clase .....	« 40,00
« « sexta clase.....	« 30,00
« « séptima clase.....	« 20,00
« « octava clase .....	« 15,00
« « novena clase .....	« 10,00
« « décima clase .....	« 5,00

Los Agentes de Compañías extranjeras de Seguros y los Representantes de Casas Extranjeras a que se refiere el Art. 1º., pagarán OCHENTA SUCRES MENSUALES. (1)

Reformado Compañías e x - tranjeras

Los Corredores o Intermediarios, que pertenecieren a la raza india, y los vendedores ambulantes que hicieren negocios por cuenta propia, quedan exentos del pago del impuesto a que se refiere este artículo.

Corredores de la raza india  
Art. 3º. b) Ord. 1926. Reforma este artículo

Art. 3º. Un Concejal, nombrado por el Concejo, el Tesorero Municipal y el Jefe de Comprobación, harán las calificaciones de los Agentes de Aduana, Corredores, Intermediarios, etc., etc., teniendo en cuenta la importancia

Junta calificadora  
Art. 8º. a) Ord. 1926. Modifica el Art. 1º.

(1) El Concejo Municipal de Quito,

#### DECRETA:

Art. 2º. El Inc. 2, del Art. 2º., dirá:  
«Los Agentes de Compañías extranjeras de Seguros y los representantes ocasionales o Agentes Viajeros de casas extranjeras a que se refiere el Art. 1º. pagarán TREINTA SUCRES MENSUALES.

Ord. de 20 de nobre. de 1932

Dado, etc.



del negocio, la situación del establecimiento y las circunstancias y condiciones que signifiquen ventajas económicas. La Junta de Calificación apreciará todo ésto según su criterio. Hechas las calificaciones el Jefe de Comprobación remitirá los datos e indicaciones *al Jefe de Catastros* para que éste los formule y los someta inmediatamente a la consideración del Concejo a lo más hasta el 15 de enero de cada año. (1)

Modificado en la parte que se refiere al Jefe de Comprobación. Se confunde este cargo con el de Catastros

Si no hubiere Jefe de Catastros, los formulará, con las mismas obligaciones de éste el Jefe de Comprobación. Desde el 15 de enero y por 15 días consecutivos, los Catastros estarán a disposición del público en la Secretaría Municipal para que los interesados puedan conocerlos y hacer sus reclamos dentro del término señalado. Vencido éste, el Concejo dará su resolución y remitirá al Tesorero copia de ellos legalizada por el Presidente y por el Secretario para la recaudación del impuesto.

Art. 8º. b) Ord. 1926. Modifica el Art.

Art. 4º. El Jefe de Comprobación enviará al Presidente del Concejo, con la oportunidad debida, mes por mes, la razón de las inscripciones que se efectúen en su oficina para el ejercicio de los negocios de Agentes de Aduana, Corredores, Intermediarios, empresarios de vehículos, etc. Comunicará también la fecha de cesación o clausura de los negocios o establecimientos indicados con el objeto de que el Presidente ordene las altas y bajas en los libros de Tesorería.

Razón de las inscripciones  
Art. 8º. c) Ord. 1926. Deroega el artículo

Art. 5º. La recaudación de los impuestos que gravan a Agentes, Corredores, Intermediarios, Empresarios de vehículos, etc., se hará directamente por el Tesorero Municipal o por

Recaudación de impuestos

(1) ORDENANZA DE PRESUPUESTO: 1934. CAPITULO I. Art. 10. ADMINISTRACIÓN GENERAL. Sección IV: Comprobación y Físcalización. 41. El Ayudante de Catastros. (Ver. Art. 69 de la Ley de Régimen Municipal).



asentamiento. En este segundo caso el asentista se subrogará, respecto al cobro y a la cantidad que se debe cobrar, en los derechos del Municipio, sin que la Municipalidad sea responsable de ningún accidente que en el negocio sobreviniere al Asentista por cualquier causa. El Asentista se someterá al Catastro Especial, sin poder excederse en el cobro de las cuotas fijadas en éste.

Art. 10 c) Ord. 1926. Deja subsistente en lo relacionado con licores, etc.

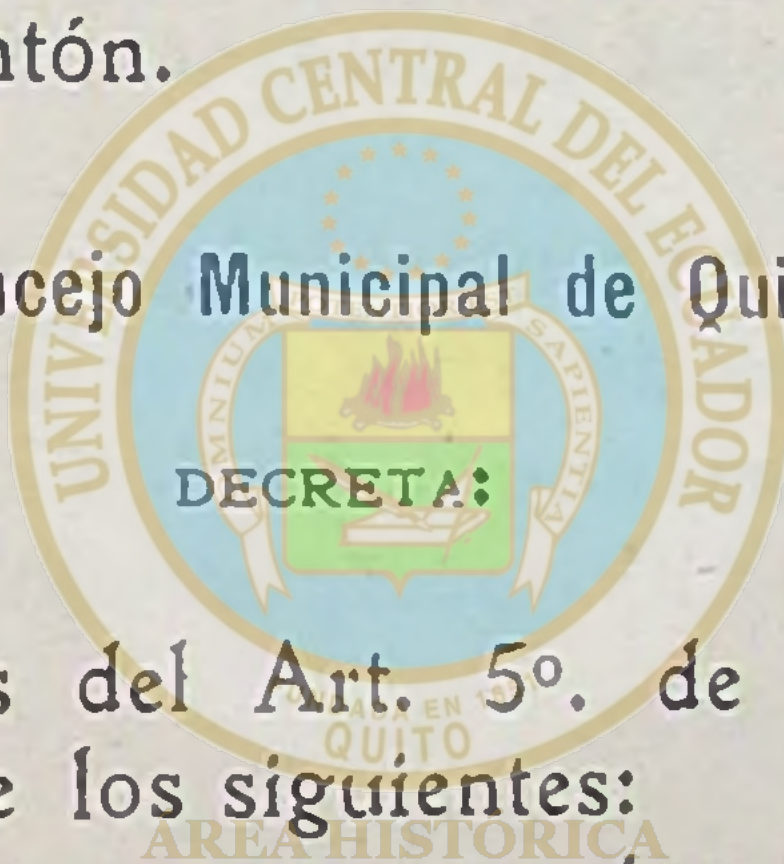
Para el cobro de las pensiones de los que principiaren sus negocios después de formados los catastros, el Asentista se sujetará a la calificación que, hecha por la Junta de que habla el Art. 3º. haya sido aprobada por el Concejo.

Art. 10 c) inc. 2. Ord. 1926. Dero-ga el artículo

El impuesto a que se refiere el Art. 2º. de esta Ordenanza, se cobrará también en las parroquias rurales del Cantón.

Id. Id. ch) artículo análogo  
Tiene adiciones.

El Concejo Municipal de Quito,



«Art. 3º. Después del Art. 5º. de dicha Ordenanza, agréguese los siguientes:

»Art. .... Las personas que ejercen los negocios determinados en el inc. 1º. del Art. 1º. si no hubieren obtenido eliminación del Catastro respectivo, continuarán constando en el Catastro del año siguiente, para el pago del impuesto aunque no se hubieren renovado las inscripciones conforme lo prescribe el inc. 2º. del antedicho artículo.

Ordenanza reformativa de 20 de noviembre de 1931 (G. M. Nº. 45-46 1931).

«Art. .... Los dueños de hoteles, casas de posada, etc., están obligados a comunicar diariamente a la Tesorería Municipal o al Asentista en su caso, los nombres de las personas que hospedan en dichos establecimientos, indicando el objeto de su venida al Cantón y el negocio que ejerzan.

La falta de cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior o a la falsedad en la información será penada por el señor Comisario Muni-



cipal con la multa de S/. 100,00 a S/. 500,00 previa denuncia del Tesorero o del Asentista.

El valor de la multa pertenece al Concejo y será recaudada por el Tesorero por medio de la jurisdicción coactiva.

«Art. .... Si el impuesto se recaudare por asentamiento, el Asentista no podrá cobrar pensión alguna a personas que no estuvieren inscritas en la Oficina de Comprobación, y si lo hiciere será obligado al reintegro por medio de las autoridades de Policía. Para hacer el cobro del impuesto a dichas personas, el Asentista pedirá al Concejo la calificación respectiva y que se las haga figurar en el Catastro correspondiente.

«Se exceptúan de esta disposición los representantes ocasionales de casas extranjeras o agentes viajeros.

«Art. .... La presente Ordenanza regirá desde el 1º. de enero de 1932 y el Secretario del Concejo hará una nueva edición de la de 24 de diciembre de 1930, incorporando las presentes reformas.

«Dado, etc».

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Art. 6º. El que denunciare que se está ejerciendo alguno de los negocios puntualizados en esta Ordenanza sin la respectiva patente, tendrá opción al 50% de la multa que se cobrarse.

Denuncias  
Art. 10 d) Ord.  
1926. Análogo

El pago se hará por la Tesorería Municipal, previa comprobación fehaciente de la exactitud de la denuncia por la Policía Cantonal. El Comisario Municipal juzgará, en juicio verbal sumario, todas las infracciones puntualizadas en la presente Ordenanza.

Art. 10 d) inc. 2º.  
Reforma el Art.

La omisión en obtener la patente en todos los casos en que la requiere esta Ordenanza, será penada, por el Comisario Municipal, con una multa de S/. 50,00 a S/. 500,00, según los casos, sin perjuicio de que se satisfaga el valor de los impuestos que se estuvieren debiendo por

Omisión en obtener la patente  
Art. 1º. ch) (Ver comentario)



haber ejercido el negocio. Para la imposición de la multa se tendrá en cuenta la categoría de las patentes.

Art. 7º. Los dueños o empresarios de vehículos que los tuvieran en servicio en la ciudad, pagarán mensualmente el siguiente impuesto:

Vehículos  
Art. 6º. a) Ord.  
1926. Suprime el  
artículo

Por cada automóvil de servicio privado .....	S/. 10,00
Por cada automóvil destinado al servicio público .....	» 10,00
Por cada autobús con neumático ..	» 12,00
Por cada autocamión, hasta de una tonelada ..	» 8,00
Por cada autocamión, hasta de dos toneladas ..	» 10,00
Por cada autocamión de más de dos toneladas ..	» 12,00
Por cada autocamión con llantas macizas, de cualquier tonelaje .....	» 25,00
Por cada coche destinado al servicio del público .....	» 5,00

Reformado

El Concejo Municipal de Quito,

CONSIDERANDO:

Que la Ley de 30 de diciembre de 1930, que señala rentas para las Municipalidades, fija en la suma de tres a cinco sucres la que se cobrará por rodaje en los coches de los Cantones:

Ordenanza de 16  
de enero de 1934

DECRETA:

la siguiente reforma a la Ordenanza Municipal de 22 de diciembre de 1930, que reglamenta el cobro de impuestos municipales:

Art. 1º. El inc. 9º. del Art. 7º., dirá:

Por cada coche destinado al servicio público ..... S/. 3,00 .

Art. 2º. La presente reforma entrará en vigencia desde el 1º. de febrero del año en curso.

Dado, etc.



Por cada coche de servicio particular .....	S/. 5,00
Por cada birloche o faetón .....	» 5,00
Por cada carreta de tracción animal sin re- sortes .....	» 5,00
Por cada carreta de tracción animal con re- sortes .....	» 3,00
Por cada motocicleta .....	» 3,00
Por cada motocicleta con carro lateral .....	» 4,00

Art. 8º. En las parroquias rurales del cantón, el impuesto a los vehículos se cobrará de la siguiente manera:

Por cada automóvil de servicio privado .....	S/. 10,00
Por cada automóvil destinado al servicio pú- blico .....	» 5,00
Por cada autobús con neumáticos .....	» 8,00
Por cada autocamión hasta de una tonelada .....	» 6,00
Por cada autocamión hasta de dos toneladas .....	» 10,00
Por cada autocamión de llantas macizas de cualquier tonelaje .....	» 20,00
Por cada coche destinado al servicio del pú- blico .....	» 3,00
Por cada coche de servicio particular .....	» 5,00
Por cada birloche o faetón .....	» 2,00
Por cada carreta de tracción animal .....	» 2,00
Por cada motocicleta .....	» 1,00
Por cada motocicleta con carro lateral .....	» 2,00

Art. 9º. El dueño de un vehículo que quisiera retirarlo del servicio, dará aviso por escrito a la Oficina de Comprobación Municipal. En este caso el cobro del impuesto cesará desde el mes siguiente a aquel en que se hubiere dado el aviso. El que volviere a poner en servicio un vehículo que hubiere sido retirado sin comunicar previamente el hecho a la Oficina de Comprobación, pagará una multa de S/. 30,00 a S/. 60,00 que le impondrá el Comisario Municipal, previo el juicio respectivo, sin que esta multa exonere de abonar en lo sucesivo el impuesto establecido en los Arts. 7 y 8 de esta Ordenanza.

Retiro de vehículos  
Art. 6. b) Ord.  
1926. Análogo

Art. 10. Quedan exentos del pago del impuesto los vehículos de propiedad del Estado, de las Municipalidades, de los Ministros Diplomáticos, de la Junta de Asistencia Pública y de la Cruz Roja. Estos vehículos deben ser inscritos

Exenciones  
Art. 6. c) Ord.  
1926. Análogo



y recabar la respectiva patente que no ocasionará derecho alguno.

Art. 11. Los vehículos en tránsito no pagarán impuesto alguno, siempre que estuvieren matriculados en el lugar donde reside el dueño o está radicada la Empresa de Transporte a que pertenecen. Si no presentaren la matrícula y recibo correspondiente de pago, el Tesorero Municipal de Quito cobrará el impuesto.

Vehículos en tránsito

Art. 12. Los dueños o empresarios de Agencias Funerarias pagarán por cada vez que sus carrozas salgan al servicio, el siguiente impuesto:

Agencias Funerarias  
Art. 7. a) Ord. 1926. Análogo

Por cada autocarroza .....	S/. 50,00
Por cada carroza de tracción animal de clase extra .....	» 50,00
Por cada carroza de tracción animal de clase primera .....	» 30,00
Por cada carroza de tracción animal de clase segunda .....	» 10,00

Art. 13. Los impuestos establecidos por esta Ordenanza, los hará efectivos el Tesorero Municipal, a partir del 1º. de enero de 1931.

Art. 10 a) Ord. 1926. Derogado

Art. 14. En el cobro de los impuestos determinados en los Arts. 2º. y 7º. de esta Ordenanza, el mes principiado se tendrá por acabado.

Art. 10 b) Análogo

*Arts. 15 al 26 inclusive. (1)*

Art. 27. Los Agentes de Policía prestarán el auxilio necesario al cumplimiento de esta Ordenanza.

Art. 10 f) Análogo

Art. 28. Prohíbese la exoneración de los impuestos determinados en esta Ordenanza, la que regirá desde el 1º. de enero de 1931. (2)

(1) Los Arts. del 15 al 26 inclusive de esta Ordenanza, relativos a la recaudación de impuestos de Alcabalas y Registros, el producto de veinte centavos por cada cajetilla de cigarrillos extranjeros que se vendan en el Cantón y el de cincuenta centavos por cada litro de aguardiente, que se venda, se los ha puesto, para mayor claridad, después de la Codificación de la Ley de Alcabalas, etc.

(2) Reformado: Art. .... de la Ordenanza reformativa de 21 de noviembre de 1931.



Art. 29. En lo que no se oponga a esta Ordenanza, subsistirán las Ordenanzas sobre la misma o análoga materia y las sanciones en ellas establecidas.

#### DISPOSICION TRANSITORIA

Art. 1º. Las inscripciones de que habla el Art. 1º. de esta Ordenanza, por el año de 1931, se harán del 1º. al 15 de enero y la formación de los Catastros y la exhibición de éstos al público, se hará del 15 al 31 de enero, todo, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 1º. y 3º. de la Ordenanza precedente.

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal, en Quito, a 22 de diciembre de 1930. El Presidente del Concejo, *Carlos Freile Larrea*. El Secretario Municipal, f.) *J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN. Quito, a 24 de diciembre de 1930. EJECÚTESE. f.) *Enrique Bustamante L.* El Secretario, *J. A. Espinosa*.



## CAPITULO QUINTO

### REFERENCIAS

Ley de Impuestos Municipales

Art. 4º.

Ley de Régimen Municipal

Art. 83.

ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

### COMENTARIOS:

Art. 1º. inc. 3º. OFICINA DE COMPROBACIÓN Y CATASTROS:

El Art. 1º. inc. 3º. de la Ordenanza, indica que: «Si por cualquier circunstancia dejare de existir la Oficina de Comprobación... etc.»; y, el Art. 3º. indica que hechas las calificaciones el Jefe de Comprobación remitirá los datos e indicaciones al Jefe de Catastros. Hay que aclarar que de acuerdo con la Ordenanza de Presupuesto de 1934, la Oficina de Comprobación y la de Catastros se hallan refundidas en una sola oficina. De ahí que estas disposiciones quedan tácitas.



des. Por último, téngase presente, que el Art. 72 de la Ordenanza de Presupuesto, expresa claramente que quedan reformadas todas las Ordenanzas que se opongán a la presente —la de 1934— y, por consiguiente, todas las disposiciones de la Ordenanza en estudio.

Art. 6º. Dice: «El que denunciare que se está ejerciendo alguno de los negocios puntualizados en esta Ordenanza sin la respectiva patente, tendrá opción al cincuenta por ciento de la multa que se cobrará. El pago se hará por la Tesorería Municipal, previa comprobación fehaciente de la exactitud de la denuncia por la Policía Cantonal.»

Este artículo, sin más comentarios, debiera suprimirse. Es lesivo a la dignidad social y se contrapone al levantamiento moral del individuo. Las leyes se dictan para encauzar, en lo posible, y dentro de lo justo y lo humano la corriente de las colectividades hacia su engrandecimiento. Nunca debiera, ni debe anteponerse el criterio económico al de la hombría de bien. Primero se desvía al hombre de su cometido de integridad inteligente social, para dedicarse a un acto de todo punto contradictorio a esta integridad, y segundo, y como consecuencia, tiende a aplanar esa dignidad, arista fundamental, del entendimiento progresivo entre los asociados.

Art. 6º. inc. 3º. Dice: «La omisión en obtener la patente en todos los casos en que la requiere esta Ordenanza, será penada, por el Comisario Municipal, con una multa de CINCUENTA a QUINIENTOS SUCRES, según los casos ....etc.»

Esta Ordenanza, —de 24 de diciembre de 1930— indica en el Art. 29, que en lo que no se oponga a la Ordenanza, subsistirán las Ordenanzas sobre la misma o análoga materia y las SANCIONES en ellas establecidas. Es decir, subsisten las disposiciones de la Ordenanza de 27 de febrero de 1926, y las consiguientes adiciones de la Ordenanza Reformatoria de 9 de



diciembre de 1927, en tanto no se opongan a la del año de 1930.

La del año de 1926, además de los impuestos consultados en la de 1930, regula los que deben cobrarse a los dueños de establecimientos de licores y bebidas fermentadas extranjeras, las casas de préstamos sobre prendas y retroventa, los de salones de billares. La Ordenanza de 1926 —que regula en general a todos los impuestos— manifiesta en el Art. 1º. letra ch) que la omisión en obtener la patente en todos los casos que requiere la Ordenanza, será penada con la multa de diez a cincuenta sucres, según la categoría de las patentes.....etc. Y, la de 1930, que regula especialmente a algunos, dejando subsistentes los de la Ordenanza de 1926, con las respectivas sanciones, expone en el Art. 6º. inc. 3º, que la omisión en obtener la patente, será penada con multa de S/. 50,00 a S/. 500,00. Esta Ordenanza no incluye la venta de licores extranjeros, casas de préstamo y billares.

Si el dueño de una casa de préstamos, supongamos, ejerce el negocio, sin obtener antes la respectiva patente, ¿en cuál de las dos multas incurre? ¿En la de S/. 10,00 a S/. 50,00 de que habla la Ordenanza de 1926? o, ¿en la de S/. 50,00 a S/. 500,00 de que habla la de 1930?

Mi criterio, —que bien puede estar errando— sobre este particular, es el siguiente:

Aparentemente puede creerse que subsistiendo también la Ordenanza de 1926, en lo que no se oponga a la de 1930, con las respectivas sanciones, y, como subsisten los artículos relativos a bebidas extranjeras, casas de préstamos y billares, debe aplicarse la multa de S/. 10,00 a S/. 50,00.

Para la dilucidación de este asunto, sin entrar a un análisis jurídico, que no es objeto de este trabajo, debe tenerse en cuenta, solamente, que la Ordenanza modificatoria de 9 de diciembre de 1927, indica en el Art. 1º. letra e) que: «los dueños de vehículos destinados al servicio



de transporte..... están obligados a matricularse ... y, en caso de omisión, a pagar una multa de CINCUENTA A QUINIENTOS SUCRES.»

Es decir, que a partir del año de 1927 el pensamiento del Concejo fué el de que la multa llegue a este máximo de S/. 500,00, pensamiento que se lo cristalizó en la Ordenanza de 1930, para todos los impuestos que regula.

La ley no crea privilegios, en su balanza se pesan igualmente todos los individuos. No hay ley que haga a unos ciudadanos de mejor o peor condición que otros (Constitución de la República). Si se regulan impuestos creados por una misma Ley (la de 30 de enero de 1926 de la Junta de Gobierno Provisional), las sanciones tienen que aplicarse a todos ellos igualmente. Habiendo Ordenanza posterior a la de 1926, y estableciendo ésta la multa de hasta S/. 500,00, es lógico suponer, por los antecedentes indicados, que los que negociaren en bebidas fermentadas y licores extranjeros, casas de préstamos y billares, y ejercieren estas actividades sin sacar la respectiva patente, pagarán una multa de hasta S/. 500,00.

La subsistencia de las sanciones a que se refiere el Art. 29 de la Ordenanza de 1930, se aplicarían a los casos del Art. 1º. letras c) y d) de dicha Ordenanza, que establece sanciones para los que no conserven las patentes o las tengan en un lugar no adecuado, o, a los que no comunicaren que han cesado en el negocio o empresa: *la sanción, en este caso, es la de seguir constando en los Catastros del próximo año.*



## CAPITULO SEXTO

### JURISPRUDENCIA DEL CONCEJO

*Acerca del cobro de impuestos municipales a los Agentes de Aduana, corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías y otros negocios de esta índole.*

El Art. 4º. letra b) de la Ley de 30 de enero de 1926, sobre fondos para las Municipalidades dice así:

«Los Agentes de Aduana, los corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías y de cualquier otro negocio de esta índole, pagarán de S/. 30,00 a S/. 50,00 mensuales».

El Concejo Municipal de Quito. por Ordenanza de 27 de febrero de 1926 y de 7 de diciembre de 1927, sancionada el 9 del mismo mes, reglamentó el cobro de este impuesto en los siguientes términos:

Art. 3º. letra a) de la Ordenanza de 27 de febrero:

«Los Agentes de Aduana, los Corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías y cualquier otro negocio de esta índole, pagarán el siguiente impuesto:



Los de primera clase .....	S/. 50,00
Los de segunda clase .....	» 40,00
Los de tercera clase .....	» 30,00

Letra b)

»Los corredores que pertenecen a la raza india, quedan exentos del pago del impuesto a que se refiere este artículo.»

Art. 3º. de la Ordenanza de 7 de diciembre de 1927:

«Al Art. 10 de la Ordenanza de 27 de febrero de 1926, agréguese los siguientes incisos:

h) En el caso de que un industrial tuviere más de un establecimiento para la venta de licores, etc., cada establecimiento será calificado separadamente para el impuesto. Lo propio se observará respecto de los corredores o agentes comerciales que ejerciten sus actividades de correduría, o agencia de negocios por cuenta de una casa principal, sea que esa forma de negocio la disfracen o no con contratos que celebren con agentes ya inscritos o que corredores que obtengan las patentes establezcan oficinas servidas por corresponsales o apoderados de ellos.

i) Conforme al Art. 4º., N°. 2, letra b) del Decreto Supremo de 30 de enero de 1926, son corredores para el efecto del pago del impuesto no solamente los titulados en la forma que prescribe el Código de Comercio, sino todo aquel que interviene como intermediario de negocios, de la índole que fueren, en lo que respecta a la colocación de valores fiduciarios, bienes raíces, de mercancías en general, sea que se titulen agentes, corredores, despachadores, vendedores o cualquier otra denominación análoga.»

La aplicación de estas Ordenanzas de 27 de febrero de 1926 y de 7 de diciembre de 1927, ha dado lugar a dudas y dificultades que el Concejo ha ido resolviendo a medida que se han presentado y que forman una interesante jurisprudencia administrativa acerca de corredo-

Gaceta Municipal  
Nº. 26 de 31 de  
marzo de 1930,  
Pág. 576.

Antecedentes

Motivo de esta  
Jurisprudencia



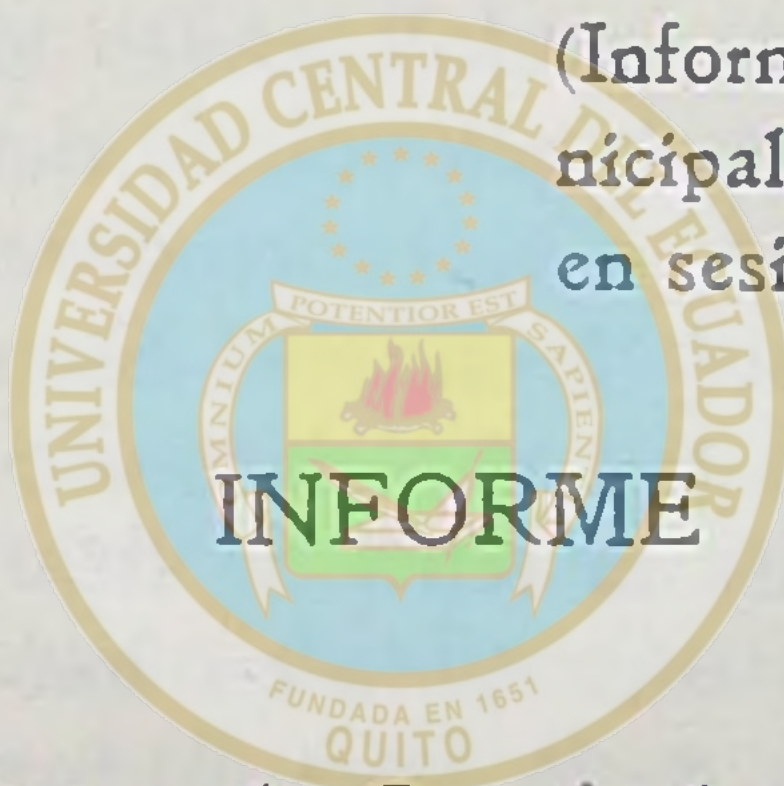
res de valores, que puede servir para los demás Concejos de la República.

Publicamos los informes aprobados de dos Procuradores Municipales, haciéndoles preceéder de un resumen en el que se expresa la cuestión dilucidada por cada uno de ellos. (1)

## I

*¿Los agentes de mercancías pueden ser considerados como corredores de las mismas, para el efecto del cobro del respectivo impuesto municipal?*

(Informe de la Procuraduría Municipal, aprobado por el Concejo en sesión del 30 de julio de 1926).



### INFORME

El Jefe de la Oficina de Comprobación Municipal al dar cuenta de que algunas personas que anuncian en los diarios ser agentes de algunas casas de comercio y que, sin embargo, se han negado a hacerse inscribir como corredores de mercancías, alegando que sus almacenes u oficinas dependen de las casas principales para la venta de artículos y cobro de cuentas y giros, pide que el Concejo se sirva determinar cuáles son los agentes que deben pagar el impuesto a que se refiere la letra a) del Art. 3º. de la Ordenanza de 24 de febrero último, y si las personas a que alude estarían en el caso previsto por la citada Ordenanza, advertido el hecho de que en el Catastro se ha hecho figurar como

---

(1) (NOTA. Lo que antecede es publicación de la Secretaría del Concejo en la Gaceta Municipal que se indica al margen).



Corredores a los señores Juan Grimm y Alfredo Demhlow, representantes de la Sociedad Continental éste, y aquel de la Casa Poppe y Cía.

Por su parte el señor Tesorero Municipal solicita que el I. Concejo resuelva un oficio del señor Comisario de Demandas relativo a pedir que se le dé una norma a que deba ceñirse para el juzgamiento de quienes ejercen actos de comercio como Representantes de Casas Extranjeras, y que según el sentir de ellas no pueden ser considerados como Corredores de Mercancías.

Por lo visto, se trata de saber: 1º.) ¿Quiénes deben pagar el impuesto contemplado en la letra a) del Art. 3º. de la Ordenanza de 24 de febrero del presente año, y si las personas que ejercen actos de comercio con la denominación de «Agentes» son o no corredores, en el sentido que emplea este término el Decreto Supremo de 30 de enero del año en curso.

La enunciación de la letra a) del Art. 3º. de la Ordenanza está concebida en los mismos términos que el texto de la letra b) inc. ii) del Art. 4º. del Decreto Supremo de 30 de enero de 1926. De manera que para saber las personas quienes deben pagar el impuesto como corredores según la Ordenanza, bien cabe analizar de preferencia la disposición legal.

La ley en la letra b) inc. ii) del Art. 4º. grava con el impuesto de S/. 30,00 a S/. 50,00 mensuales a los corredores de mercancías, y cualquier otro negocio de esta índole, y aquí manifestaré lo que expuse en mi informe de 6 de marzo respecto a los vendedores ambulantes: «Según el Código Civil las palabras de la Ley deben entenderse en su sentido natural y obvio de acuerdo con el uso general de las mismas palabras, siempre que el Legislador no las haya definido legalmente y cuando el sentido de la Ley no es claro. es preciso recurrir a la intención del Legislador», Del contexto de la Ley de Impuestos, se deduce que lo que quiso el



Legislador, fué gravar con impuesto el ejercicio del comercio por medio de intermediarios, suprimiendo las denominaciones particulares con las que se designa en el mercado, como son agentes de negocio, agentes viajeros, vendedores a comisión, corredores, etc., y al tratar de comprender en sus diferentes giros y operaciones, ha usado la palabra CORREDORES.

Fijada así la intención y alcance de la Ley, no cabe admitir que el término empleado específicamente a los agentes nombrados para el ejercicio de su profesión, conforme a los Arts. 71 y 72 del Código de Comercio. De consiguiente hay que acudir al sentido natural y obvio según el uso que se dé a la palabra CORREDOR y está considerado en el léxico las diversas especies del ejercicio de esa actividad. Así, dice que es CORREDOR de mercaderías el que asiste a los mercaderes para despacharles sus géneros solicitando personas que los compren. «CORREDOR, según el Diccionario de Escriche, es un agente auxiliar de comercio que tiene por oficio mediar entre los comerciantes para facilitarles los contratos y negociaciones mercantiles».

De lo expuesto se deduce que el corredor es un agente, un intermediario que no hace los negocios por su propia cuenta, sino por la del principal procurando que sus comitentes o interesados coloquen sus valores o mercaderías, siendo de anotar que aún a los corredores de título les prohíbe el Art. 78 del Código de Comercio, realizar operaciones por cuenta propia.

Atento, pues, el léxico y dados los términos tan generales de la expresión de la Ley: «Corredores de mercancías y cualquier otro negocio de esta índole» parece indudable que todo el que interviene por cuenta de un tercero principal en colocar mercaderías y más operaciones conexas es un corredor, con cualquier nombre con que se designe esa actividad; porque es a ella, a la especial manera de intervenir en los



negocios, a la que se ha gravado, considerándola como operación de correduría; tanto que si un comerciante matriculado como tal en la plaza, ejecuta actos de comercio, como intermediario de otro, ni aún su carácter principal de comerciante le excluye el ser intermediario o corredor, con respecto a alguno o algunos de sus principales;

Tan evidente es ésto que un corredor de valores fiduciarios, no dejaría de ser tal y no podría eludir el impuesto por el hecho de llamarse agente, pongamos el caso.

Por tanto, estimo que, dada la latitud de los términos de la Ley, *deben ser considerados como corredores todas aquellas personas que se dedican a ejercer el comercio por cuenta de otro, asistiendo a los mercaderes o principales para la venta de sus géneros y buscando colocación para éstos, sin que puedan quedar exceptuados de ese carácter por el hecho de que se hayan matriculado como comerciantes, si al a vez que al hacer sus negocios propios de comercio sirvan de intermediarios de un principal o mercader.*

Aclarado el primer punto, esto es, de quienes están obligados a pagar el impuesto de correduría, examinemos ahora si los intermediarios de comercio que se denominan agentes, son o no corredores en el sentido del Decreto Supremo.

Los agentes de negocio según el léxico son los que tienen por oficio gestionar negocios ajenos y si ellos intervienen en el real comercial, es decir, en la colocación de mercaderías por cuenta ajena, parece indudable que los denominados agentes de casas de comercio en mercancías y cualquier otro negocio de esa índole, son verdaderos corredores y están obligados como tales a matricularse y pagar el impuesto.

#### *Jurisprudencia*

¿Cuáles son corredores?..... y por tanto los obligados a pagar el impuesto de correduría

Los agentes de negocios son corredores

id. id.

Procurador Municipal,

f.) Augusto Egas.







ambulantes de mercaderías de bazar y de los de productos naturales del país. Se quiere objetar que son corredores sólo los que tienen el respectivo título, según el Código de Comercio o sea en forma legal; pero no hay tal porque la Ley de 30 de enero de 1926 es general, generalísima, en este sentido, pues dice: «Los corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces y cualquiera otro negocio de esta índole». La palabra corredor ya la hemos estudiado y definido, hace más de un año, si mal no recuerdo, pues yo mismo fui encargado de informar acerca de ella, con motivo de una solicitud de unos señores que querían rehusar el pago del impuesto. Entonces dije yo y repito que la palabra «Corredores» comprende a todo agente intermediario que no hace los negocios por su propia cuenta, sino por la del principal, procurando la colocación de los valores o mercaderías de éste, sea cualquiera el nombre con que intervenga, porque es la intervención en los negocios ajenos a la que se ha gravado con el impuesto. Se exceptúan solamente los vendedores ambulantes de mercaderías que se provean de ellas para la reventa, girando con capital propio y siempre que estas mercaderías sean las de bazar, como también los vendedores de productos naturales del país, sea que se expendan en consignaciones o por comisión. De manera que en mi concepto, los individuos de quienes habla el señor Jefe de Comprobación en su segundo oficio, o sea aquellos que aparecen como socios dependientes o auxiliares de los que han obtenido patente y que sin embargo realizan verdaderos contratos, están obligados a pagar el impuesto respectivo. Por eso propongo en mi informe los incisos h) e i) al Art. 10 de la Ordenanza vigente, inciso este último por el que se dice que pagarán por separado el impuesto los corredores o agentes comerciales que ejerciten sus actividades de correduría, agencias de negocios, por cuenta de una casa principal, sea que esa forma de ne-

Razón de la Ordenanza reformativa de 9 de diciembre de 1927, que adiciona incisos al Art. 10 de la Ordenanza de 1926



gocio la disfracen o no con contratos que celebren con agentes ya inscritos, o que corredores que hayan obtenido la patente, establezcan oficinas servidas por apoderados».

(Este informe lo dió el Sr. Dr. Dn. Augusto Egas, siendo Procurador del I. Concejo).

### III

*¿El dependiente de una Casa de Comercio puede ser considerado como intermediario y debe quedar sujeto al pago del impuesto municipal respectivo?*

(Informe de la Procuraduría Municipal, aprobado en sesión del 21 de marzo de 1928)



**INFORME**

**ÁREA HISTÓRICA**

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

El señor T. A. Páez, asentista del impuesto municipal que grava a los intermediarios de negocios comerciales, solicita la revocación de la providencia mediante la cual se eliminó del Catastro de Agentes, Corredores, etc., al señor Julio C. Pozo. El señor Páez opina que el señor Pozo está obligado a pagar el impuesto que grava a los intermediarios de comercio por ser el señor Pozo, en el fondo un corredor, aunque sin título, que dispensa su mediación a una casa de comercio para facilitar ventas y contratos mercantiles. A fin de resolver el asunto con claridad, me permitiré analizar con algún detalle la cuestión. CONSIDERACIONES PREVIAS: Dos actitudes principales me parece que puede tener un individuo en negocios comerciales. O vende

Los dependientes no son corredores y no están sujetos al pago del impuesto



él por su cuenta mercaderías de cualquier clase que sean, relacionando al productor principal con el consumidor; o, sin vender artículos o mercaderías propias, sin ser dueño de depósitos de mercaderías, busca compradores para las mercaderías de otras personas, acerca el consumidor al comerciante, dispensa su mediación a los comerciantes y les facilita la conclusión de sus contratos. En ambas aptitudes el individuo que las adopta trabaja por su cuenta y riesgo, ejerciendo una profesión mercantil con caracteres propios y específicos. El que adopta la primera actitud se llama genéricamente corredor o, con más amplitud, intermediario de negocios. Llamo simplemente la atención hacia el siguiente hecho: el Corredor, o, si se prefiere, el intermediario de negocios, desenvuelve una actividad suya propia, se crea una renta para su vida, gana dinero en su negocio autónomo. César Vivanti, Comentador del Código Italiano, caracteriza así a los agentes corredores, en general. Los corredores son comerciantes que se ocupan en facilitar el trato de los negocios comerciales ajenos. Su trabajo consiste en relacionar entre sí a las personas dispuestas a concertar un negocio y ponerlas de acuerdo presentando muestras, haciendo que cesen las diferencias acerca de los precios, atrayéndolas a una conformidad en la entrega de las mercaderías o de los valores en el pago. «Como los comerciantes y los intermediarios de comercio —corredores— se crean cada uno en su esfera propia, rentas y riqueza para su vida, justo es que los comerciantes y los corredores estén sujetos a impuestos distintos.

Un dependiente, un factor, no ejerce una actitud mercantil aparte, distinta, propia suya; un dependiente, un factor, no ejerce más actividad que la misma actividad del comerciante principal, ayudándole a éste ya en la gestión de la empresa, ya como empleado subalterno. En una misma plaza hay y puede haber distintos



establecimientos mercantiles que pertenezcan a un mismo comerciante principal. Este necesita factores y dependientes que le ayuden en la administración de sus distintos establecimientos mercantiles que pertenezcan a un mismo comerciante principal. Un comerciante principal puede tener establecimientos mercantiles en distintas plazas. En este caso le son más necesarios al comerciante principal, factores y dependientes. Pero en ambos casos los distintos establecimientos mercantiles, con sus factores y dependientes, provienen de la actividad de un comerciante principal, o de una compañía principal. Los dependientes y factores son el mismo comerciante principal vendiendo y acercándose al consumidor mediante una cierta multiplicación de su persona, gracias al auxilio de administradores y empleados subalternos. Es el caso del señor Julio C. Pozo.

El señor Jefe de la Oficina de Comprobación Municipal, en su informe de 10 de marzo, expresa que el señor Pozo, según lo ha observado personalmente el Jefe de la Oficina de Comprobación, ejerce actos de comercio como dependiente del señor Poppe. Siendo su negocio como el de los almacenes de los señores Carlos Mateus, Manuel María Casares, etc., etc. De esto, dice el señor Jefe de la Oficina de Comprobación, puede convencerse cualquiera persona que vaya al establecimiento mencionado. No he sabido, dice el señor Jefe de la Oficina de Comprobación, que el señor Pozo sea intermediario entre comerciantes y consumidores. El informe de hecho del señor Jefe de la Oficina de Comprobación Municipal, me parece ajustado a la verdad. La Casa Poppe de Guayaquil, tiene su Sucursal en Quito. Hace aquí ventas al por menor y las ventas al por mayor provienen directamente del depósito principal de Guayaquil. El señor Pozo es un representante del señor Poppe, quien, no pudiendo multiplicarse realmente para atender al consumidor quiteño,



guayaquileño, etc., despliega su actividad en Quito mediante su representante con el carácter de factor o dependiente, poco importa. Como lo dice el señor Jefe de la Oficina de Comprobación Municipal, cualquiera que se acerque al establecimiento del señor Julio C. Pozo, se convencerá de que este señor no es un intermediario por su propia cuenta y con propias ganancias sino un dependiente de una casa principal.

En el Ecuador, el impuesto a la venta, establecido el 17 de octubre de 1923, y el 18 de octubre de 1924, es un impuesto fiscal que grava a todo aquel que se ocupa en la venta, tráfico o cambio de artículos del país o extranjeros, para el consumo interno, ya sean dichos artículos mercaderías, primas o manufacturadas parcial o totalmente (Art. 49, Ley de 18 de octubre de 1924). Al impuesto a la venta está sujeto y lo paga la Casa Poppe, ya por las ventas en Guayaquil, ya por las ventas al por menor en Quito. El impuesto a los intermediarios corresponde a la Municipalidad y está reglamentado, en toda su amplitud, en la Ordenanza de 7 de diciembre de 1927. Declara esta Ordenanza que «son corredores para el efecto del pago del impuesto, no solamente los titulados en la forma que prescribe el Código de Comercio, sino todo aquel que interviene como intermediario de negocios, de la índole que fueren, en lo que respecta a la colocación de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías en general, sea que se titulen agentes, corredores, despachadores, vendedores, o con cualquier otra denominación análoga.» La Ordenanza citada se propone evitar que se burle el impuesto municipal, por parte de los vendedores corredores, sin más que adoptar nombres equívocos o engañosos, no obstante de en el fondo, desenvolver una actitud propia como intermediarios de negocios. Que éste es el espíritu de la Ordenanza nos revela la expresión siguiente: Son corredores para el efecto del pa-



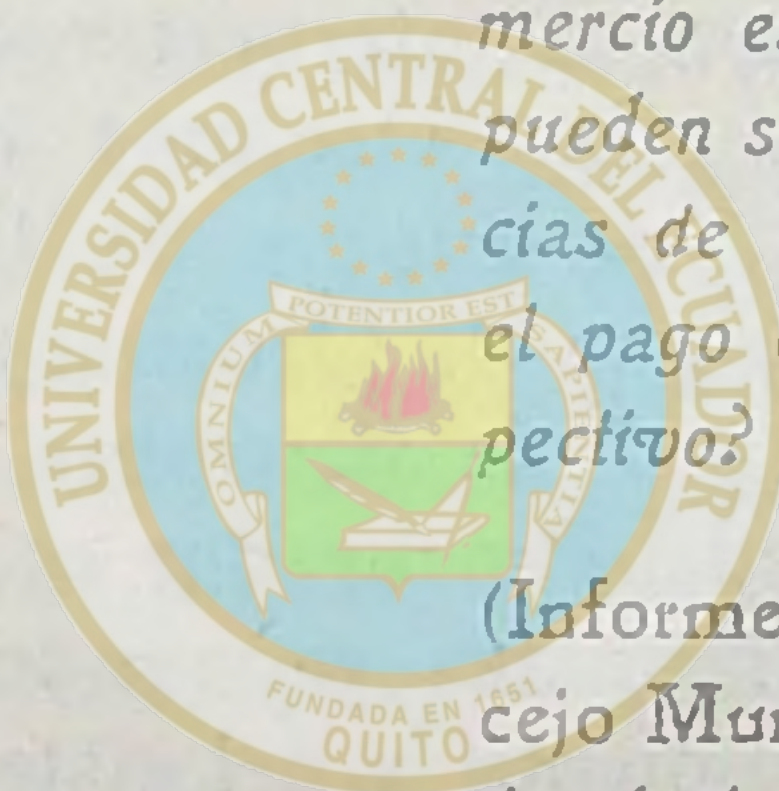
go del impuesto, no solamente los titulados, sino todo aquel que interviene como intermediario de negocios. El señor Pozo dependiente de la Casa Poppe, no es intermediario de negocios y no está sujeto al respectivo impuesto municipal.

Procurador Municipal,

f.) J. M. Velasco Ibarra.

#### IV

*¿Las sucursales de casas de comercio establecidas en otras plazas pueden ser consideradas como agencias de negocios mercantiles para el pago del impuesto municipal respectivo?*



(Informes aprobados por el Consejo Municipal en sesiones de 25 de abril y 7 de setiembre de 1928.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

(Procuraduría Municipal):

#### INFORME

El señor Herman Dreier ha presentado una solicitud para que se elimine el nombre del señor Ernesto Drier del Catastro de Agentes de Comercio. El señor Herman Dreier manifiesta que, a fines del año anterior, para ampliar sus negocios, abrió en esta ciudad una sucursal de su establecimiento comercial de Guayaquil, poniendo al frente de la Sucursal, como dependiente, a sueldo fijo, a su hermano Ernesto recientemente llegado al Ecuador. He visitado el establecimiento comercial que tiene en Quito,

Las sucursales de comercio de casas de comercio, establecidas en otras plazas, no están obligadas al pago del impuesto



como Sucursal de su Casa de Guayaquil, el señor Herman Dreier, y a este respecto me permito reproducir en todas y cada una de sus partes el informe N<sup>o</sup>, 54 de esta fecha, a propósito de la dificultad con el señor Julio C. Pozo. El caso del señor Ernesto Dreier me parece idéntico al caso del señor Julio C. Pozo. No será por demás añadir algunas observaciones para prevenir reparos a este informe. Pudiera ser que la eliminación de nombres de ciertos dependientes o factores de casas de Comercio del Catastro para las contribuciones municipales a los intermediarios, perjudique a los asentistas del impuesto e indirectamente al Municipio. De esto es inútil advertir que no tiene la culpa el Procurador Municipal al dar su informe; el Procurador se limita a interpretar el sentido legislativo creado por los Decretos de 30 de enero de 1926, de 17 de octubre de 1923 y 18 de octubre de 1924 y por las Ordenanzas de 26 de febrero de 1926 y 7 de diciembre de 1927. Si la interpretación del Procurador es justa, las dificultades de los Asentistas provendrán de sus contratos de arrendamiento y del sistema legal. He de permitirme también un ligero reparo a la opinión del señor Jefe de comprobación Municipal, señor don José Pompeyo Sánchez. El señor Sánchez opina que el señor Ernesto Dreier es intermediario de negocios por ser factor o dependiente del señor Herman Dreier. Me parece que los factores o dependientes no son los intermediarios que pagan el impuesto a que alude la Ordenanza de 7 de diciembre de 1927. Los factores o dependientes deben pagar el impuesto a la venta, ya que hacen actos de comercio vendiendo mercancías del comerciante principal al que simplemente ayudan o representan.

*El intermediario de negocios, gravado con el impuesto municipal, es el que sin tener mercancías, sin vender éí, sin permutar él, se gana su vida y se crea su riqueza, por su cuenta y*



*riesgo acercando el consumidor al comerciante y el comerciante al consumidor, sea cual fuere por otra parte el nombre con el que ejerce o disfraza ésta su aptitud.* Encontré en el Almacén Sucursal del señor H. Dreier que un joven empleado trabajaba en ocasiones como Agente Viajero de la Casa, es decir como intermediario, como corredor, aunque carezca del título legal respectivo. Este joven empleado del señor Dreier que, en ocasiones, hace actos por su cuenta propia como intermediario, paga entonces el impuesto municipal respectivo. Me mostró un recibo del impuesto. Que en el anuncio de la Casa Dreier se emplea los términos «Importación»; «Comisión», «Sección Técnica», no quiere decir que el señor Ernesto Dreier dependiente en Quito de don H. Dreier sea corredor en un sentido genérico, o si se prefiere intermediario de negocios. El contrato de comisión es un contrato especialísimo, regido en un capítulo especial del Código de Comercio, con absoluta independencia del título en que se trata de los corredores, factores, dependientes, etc. El Comisionista respecto de terceros es pura y simplemente un comerciante que ejerce actos de comercio en su propio nombre; el comisionista no está obligado a declarar a la persona con quien contrata el nombre de su comitente; el comisionista no es un agente que, sin poseer mercaderías propias para la reventa o permuta, se ocupa sólo en acercar el consumidor al comerciante o viciversa. Creo que el nombre de don H. Dreier y de don E. Dreier debe ser borrado del Catastro de los intermediarios y sujetos al impuesto municipal, a menos que ante la Policía Municipal se probara que don E. Dreier, hace actos de comercio, como intermediario de negocios, además de ser, como es evidentemente dependiente de una casa comercial.

Procurador Municipal,

*f.) J. M. Velasco Ibarra.*



## INFORME

A propósito de las solicitudes de los señores Jorge Montero Vela, empleado de la Casa V. Vignolo e Hijos de Guayaquil, y que trabaja en la Sucursal de dicha Casa en Quito, y de las Sucursales en Quito de las Casas González Rubio y Cía. y Sociedad Continental de Alfredo Demhlow, establecidos en Guayaquil para saber si están o no estas Sucursales sometidas al impuesto municipal que grava a los intermediarios de negocios, lo esencial era aclarar el siguiente hecho:

Igual caso que el anterior. (Sucursales)

Los señores Demhlow, Vela y Miguel Ángel López, ¿tienen como profesión propia y por su cuenta y riesgo el acercar entre sí los productores y comerciantes a los consumidores, o son ellos mismos comerciantes o dependientes de Casas de Comercio a sueldo fijo y sin desarrollar por su cuenta y riesgo ninguna actividad comercial? En el primer caso, siendo intermediarios con negocio propio, por su cuenta y riesgo están sujetos al pago del impuesto que grava a los intermediarios, en el segundo caso están sujetos al impuesto fiscal a la venta. Para aclarar esta cuestión visité ayer en compañía del señor Jefe de la Oficina de Comprobación, los tres establecimientos sucursales y de los papeles y correspondencia se desprende que esos establecimientos son en realidad verdaderas sucursales de las Casas de Guayaquil. Las personas que trabajan en estos establecimientos sucursales no tienen ningún negocio por su cuenta sino que son empleados de establecimientos comerciales que pagan el impuesto a la venta. Opino que el Asentista del Ramo de Impuestos a que se refiere la Ordenanza de 24 de febrero de 1926 no tiene derecho a cobrar el impuesto que grava a los intermediarios, a los señores Jorge Montero Vela, Alfredo Demhlow y Miguel An-



gel López. Las razones jurídicas de ésta mi opinión las expuse en mi informe N°. 54, del 13 de marzo a cuya sección CONSIDERACIONES PREVIAS me remito hoy totalmente.

Procurador Municipal,

*f.) J. M. Velasco Ibarra.*

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA

a) El impuesto municipal a los intermediarios de negocios, no puede cobrarse a los consignatarios de mercaderías, pues, tales consignatarios no son intermediarios, legalmente hablando.

b) Los factores y dependientes no son intermediarios y por lo tanto no están sujetos al pago del impuesto municipal que grava a estos últimos.

c) Los comisionistas no son intermediarios y por tanto no recae sobre ellos el impuesto que grava a estos últimos.

d) La jurisdicción coactiva sólo puede ejercerse contra los sujetos al pago de los impuestos municipales, por constar sus nombres en los respectivos catastros, o por haber sido declarados deudores de tales impuestos.

a) (Informe aprobado por el Concejo en sesión de 6 de mayo de 1931).

El Sr. José B. Granja, apoderado del Sr. Julio Arbeláez, asentista de impuesto que grava a los intermediarios, expone los siguientes puntos:

Que es necesario hacer efectivo un impuesto, siquiera ínfimo a los consignatarios situados junto a los mercados sur y norte, cuya activi-



dad es la de un intermediario por facilitar el negocio entre el productor del artículo y el consumidor;

Que se debe hacer las calificaciones de 16 consignatarios;

Que al exonerar el impuesto que grava a los intermediarios a los consignatarios nombrados por el Sr. Granja, se le causaría un grave perjuicio al asentista, quien, para tomar el remate, contó con el derecho a cobrar impuesto a toda actividad intermediaria.

Debo manifestar ante todo, y para que desde ahora queden claramente establecidos ciertos principios, que la base sobre la que hicieron su contrato los asentistas, según expresa disposición del Art. 102 de la Ley de Régimen Municipal, es el producto de cada ramo en el año anterior, aumentado o disminuido prudencialmente por el Concejo. He aquí una ley que obliga a todos los habitantes de la República. La base del asentamiento es el producto de cada ramo en el año anterior. El ramo a que se refiere la disposición citada es la actividad mercantil o industrial gravada por la Ley. Para definir las actividades mercantiles o industriales gravadas, no nos hemos de atener únicamente ni principalmente al significado etimológico o gramatical de las palabras con que se denotan las actividades. Lo principal es tener en cuenta el carácter y valor jurídico de cada una de las actividades mercantiles o industriales, la denominación y alcance que a estas actividades les dá la Ley y los Códigos. Si las actividades están gravadas por una ley hay un derecho a cobrar el impuesto. Si el impuesto es a favor del Municipio y el impuesto está dado en asentamiento, el asentista tiene derecho a cobrarlo. Pero si el impuesto es para el Fisco, el asentista de impuestos municipales no tiene derecho a cobrarlo. Partiendo de estos derechos indiscutibles, de acuerdo con el sistema del Derecho Positivo Ecuatoriano, el impuesto que tiene de-



recho a cobrar el asentista señor Arbeláez, es el que grava a los Agentes de Aduana, corredores de valores fiduciarios, de bienes raíces, de mercancías y CUALQUIER OTRO NEGOCIO DE ESTA ÍNDOLE. (Ley de 30 de enero de 1926). El Código de Comercio en los Arts. 70 al 99 estudia ampliamente el problema de los corredores: los define e indica su naturaleza y deberes. No es pues, un concepto de gramática el que ha de determinar el RAMO a que tiene derecho el asentista, sino el concepto jurídico establecido por el Código. Y ¿cuáles son los otros negocios de esta índole, gravados por la citada Ley de 1926? El I. Concejo Municipal en marzo de 1930 aprobó una detallada reglamentación respecto a las actividades mercantiles, análogas a la correduría, que, según interpretación del Concejo, están gravadas por la Ley. La Reglamentación fué publicada en la Gaceta Municipal de 31 de marzo de 1930, antes de que el señor Arbeláez hiciera el asentamiento. El Arbeláez, debió conocer estos antecedentes para saber qué volumen tenía el ramo arrendado por él y gravado como actividad mercantil intermediaria. Según la reglamentación citada, los intermediarios, cuya actividad mercantil se grava, son las personas que, sin ejecutar operaciones de comercio por su cuenta, ni tomar interés en ellas bajo nombre propio o ajeno, relacionan entre sí a los que están dispuestos a concertar un negocio, presentando muestras, haciendo que cesen las diferencias respecto de precios, etc., etc. La esencia del intermediario consiste en que una vez acercado el comprador del vendedor, el productor del consumidor, el intermediario se hace al margen del negocio y no tiene interés en él bajo ningún concepto.

En cambio desde marzo de 1928, el I. Concejo resolvió en sesión pública, que el comisionista, es decir, el consignatario a que se refiere el señor Arbeláez, es pura y simplemente un comerciante que ejerce actos de comercio en su



propio nombre, que paga el impuesto a las ventas y que no puede pagar el impuesto que grava a la correduría. Hay, en efecto, un abismo entre el contrato de comisión y la correduría. Los corredores están estudiados por el Código de Comercio, en la Sección II del Título II; el contrato de comisión se estudia en el Título VII del Libro II.

El comisionista es simplemente un apoderado, y los apoderados no están gravados con el impuesto a los corredores de acuerdo con la Reglamentación de marzo de 1930. El comisionista no está obligado a declarar el nombre del comitente. En suma, ante la Ley, ante las exigencias del Derecho, ante terceros, el comisionista no es intermediario, es apoderado de alguien cuyo nombre puede no saberse, único responsable de la negociación, dueño del dinero recibido en el negocio.

El señor Asentista emplea la palabra CONSIGNATARIO, en su exposición; pero estos consignatarios son los que el Código llama comisionistas, o sea los que ejecutan actos de comercio, en su propio nombre.

El señor Asentista parece indicar que si quiera un impuesto ínfimo es necesario que grave a los que él dice consignatarios. Pero la forma en la imposición no es la simple necesidad, conveniencia o utilidad; no es que el impuesto sea más o menos grave. La norma es la Ley que crea el impuesto y el carácter jurídico y verdadero de la actividad gravada con el impuesto. El Comisionista tiene ya bastante con pagar el impuesto a las ventas y el comitente paga, por su parte, el impuesto predial y a la renta. El impuesto propiamente municipal es el de los intermediarios definidos como ya se ha hecho por el I. Concejo, en cien sesiones, el de los representantes de Casas extranjeras ya que éstas no pagan el impuesto a la venta, y el de los agentes de Aduana.



Resumiendo: no creo que el I. Concejo deba acceder a la solicitud del señor José B. Granja, sin pretender, desde luego, prevenir el más acertado criterio del I. Concejo Municipal.

Procurador Municipal,

*f.) J. M. Velasco Ibarra*

b) (Informe de la Procuraduría Municipal, aprobado en sesión de 27 de Mayo del año 1931.)

En siete fojas útiles, remito la Consulta relativa a si la Andean Trading Co. que vende directamente en Quito pasajes por cuenta de la Compañía Real Holandesa, está sujeta a pagar el impuesto municipal que grava a los intermediarios. He presentado muchísimos informes al respecto, y, en el caso actual, hago míos los razonamientos del señor doctor José María Ayora y el magnífico parecer del señor Antero Santos, Jefe de Comprobación. La Andean Trading Co., no me parece que está sujeta a pagar el impuesto municipal.

Como este problema de los intermediarios está convirtiéndose en caos, he de permitirme tan sólo una observación. En el caso de los intermediarios hay tres personas que hacen negocio, el consumidor por una parte, el productor por otra, y el intermediario que les acerca a los dos. O si se quiere, el vendedor por una parte, el comprador por otra, y el intermediario que acerca compradores y vendedores entre sí. El negocio que hace el intermediario no es el mismo negocio que hacen entre sí productores y consumidores, vendedores y compradores.

El intermediario tiene un negocio aparte, propio de él, gana en cuanto acerca a los dos extremos: productores y consumidores o vendedores y compradores. Al tratarse de factores, de dependientes, de comisionistas, no hay tres per-



sonas jurídicas distintas. El dueño del establecimiento principal no pudiendo realizar él solo su negocio lo hace haciéndose ayudar, haciéndose representar, por factores, dependientes o comisionados, al mismo negocio de su jefe, de su poderdante. El representante jurídico es la misma persona que el representado. No hay aquí tres personas distintas. Supongamos el establecimiento de papelería del señor don Roberto Cruz. Hay allí dos o tres personas que se entienden en vender los artículos. ¿Diremos que esas personas son intermediarias entre el señor Cruz y el público que deben pagar el impuesto municipal? No: esas personas son simplemente representantes del señor Cruz, son el mismo señor Cruz para los efectos de vender, y si en lugar de funcionar esas personas en el establecimiento citado, fueren a hacer sus ventas por cuenta del señor Cruz, en un almacén de otra calle, ¿diremos que son intermediarias entre el público y el señor Cruz? Tampoco. La simple distancia material no les priva de su carácter de dependientes, de apoderados, de representantes del señor Cruz. Lo único que pasa es que el señor Cruz ha extendido más su radio de acción y que paga el impuesto a la renta en la misma extensión en que prolonga su acción: paga por el establecimiento principal y por la sucursal.

Procurador Municipal,

*f.) J. M. Velasco Ibarra.*

c) Informe de la Procuraduría aprobado en sesión de 1º. de julio de 1931.

He leído la exposición que en siete fojas —que devuelvo junto con este informe— hace el señor Asentista del impuesto a los interme-



diarios, para insistir que los comisionistas deben pagar el impuesto municipal que grava a los intermediarios. A fin de que el señor Asentista no crea que jamás pretendo yo definir dogmáticamente los problemas cuyo estudio me confía el Municipio y a fin de que se convenza de que mi intervención obedece al único deseo o mejor deber, de cumplir con las obligaciones de mi cargo, ruego yo mismo que tanto mi informe anterior como la documentación actual pasen al estudio del señor Presidente de la Comisión de Legislación.

Si el señor Asentista prevalece, no tendré yo ningún motivo de disgusto sino todo lo contrario. Me complacerá de que por un camino de legalidad y de razón el señor Asentista mejore su negocio.

Mientras tanto me reafirmo en mi anterior tesis: El comisionista no es intermediario, su naturaleza jurídica no es la de intermediario. El comisionista no está sujeto al impuesto municipal que grava a los intermediarios sino al impuesto fiscal que grava a las ventas. Además es competente, competentísimo el I. Concejo Municipal para resolver si tales o cuales comerciantes han de figurar en el Catastro en que constan los intermediarios gravados por el I. Concejo Municipal en ejercicio de una facultad legal. COMPETENCIA: según el Art. 10 letra c) de la Ordenanza de 24 de febrero de 1926 y según el Art. 5º. de la Ordenanza de 24 de diciembre de 1930, ambas anteriores al asentamiento hecho por el señor Arbeláez, el asentista «se someterá al catastro especial, sin poder excederse en el cobro de las cuotas fijadas en éste.» «Para el cobro de las pensiones de los que principiaren sus negocios después de formados los catastros, el asentista se sujetará a la calificación que, hecha por la Junta de que habla el Art. 3º., haya sido aprobada por el Concejo.» Todo el mundo sabe que el catastro especial es el catastro municipal respectivo. Por consiguien-



te no es contra ley, ni contra la razón, ni contra el interés de nadie, ni contra nadie..... el que el Concejo haya resuelto que tales o cuales comerciantes no son intermediarios ni están sujetos al impuesto municipal.

EL COMISIONISTA NO ES INTERMEDIARIO. El impuesto a los intermediarios grava actividades que ante la misma ley tienen el carácter y el valor de actividades intermedias, o mejor, intermediarias. Por ejemplo el Art. 70 del Código de Comercio, declara que los corredores dispensan su mediación a los comerciantes y les facilitan sus negocios. Hay pues actividades de mediación que tienen valor real, objetivo ante la Ley misma, y estas actividades son las gravadas por el impuesto municipal, junto con las agencias de aduana, de casas extranjeras, de seguros, etc.

El comisionista no es intermediario, es un comerciante que contrata a su propio nombre y se acabó la cuestión. La acuciosidad de un cobrador de impuestos puede descubrir que el comisionista A vende en su tienda papas del hacendado B. Pero este descubrimiento es cosa enteramente particular, es noticia enteramente privada, extra legal, que en nada modifica el carácter jurídico esencial del comisionista, comerciante que vende mercaderías en su propio nombre. El comisionista ante las autoridades públicas, aun suponiendo que se descubriese que todas las mercaderías que vende en su tienda son mercaderías ajenas, es ni más ni menos que cualquier comerciante que vende sus propias mercaderías. Basta leer atentamente el Art. 7º. del Código de Comercio, para convencerse de lo anterior. El Comisionista ejerce actos de comercio en su propio nombre. Al comprador el comisionista no está obligado a declararle en nombre de quién contrata. El comisionista queda directa y personalmente obligado hacia el comprador como si el negocio fuera suyo propio,



es decir, del comisionista. Sólo el comisionista puede reclamar lo que venda del comprador. El comprador sólo puede reclamar del comisionista. Por tanto el comisionista es como cualquier otro comerciante. Entonces, se dirá, ¿por qué el Código de Comercio se ocupa en más de treinta artículos del contrato de comisión?... Por una razón muy sencilla: el comisionista ante terceros, ante el público es como cualquier otro comerciante. Pero pudiera haber dificultades entre el comisionista y el comitente. En caso de que ante el Poder Judicial se probare que entre dos personas ha habido el contrato de comisión, la Ley quiere garantizar tanto los derechos del comisionista como los del comitente. Para facilitar pues, la representación comercial, la ley regula las relaciones posibles cuando éstas aparecieren ante el Poder Judicial —entre el comisionista y el comitente—. Ningún Abogado sostendrá que el mandatario civil es intermediario. El mandatario es el mismo mandante dentro de los límites de la ley y del mandato. ¿Cómo puede sostenerse que el comisionista sea intermediario? Ya el Derecho Romano enseñó la verdadera teoría, respecto del mandato: QUI MANDAT IPSE FECISS VIDETUR ¿qué diremos del comisionista que contrata a su propio nombre...?

Procurador Municipal,

*f.) J. M. Velasco Ibarra.*

ch) Informe de la Procuraduría Municipal aprobado en sesión de 1º. de julio de 1931

El señor Tesorero Municipal, en oficio dirigido al señor Presidente del I. Concejo, con la fecha 22 de junio, dice:



Que el señor José B. Granja, apoderado del señor Julio Arbeláez, asentista del impuesto municipal que grava a los corredores, ha presentado ante la Tesorería el 12 de mayo último una solicitud pidiendo que el señor Tesorero ejerza la jurisdicción coactiva para el cobro del impuesto a varios consignatarios de mercaderías, a los que el apoderado del asentista les considera como intermediarios; que no ha considerado legal negar el pedimento del asentista, por cuanto el Art. 24 de la Ley de 7 de octubre de 1921 que reformó el Código de Enjuiciamiento Civil dice que si las rentas o impuesto se hubieren dado en asentamiento, la coactiva se ejercerá a petición del asentista o contratista.

Que si por este aspecto no es posible negar la jurisdicción coactiva solicitada por el apoderado del asentista, por otro no es posible concederla, ya que los consignatarios a los que alude el asentista no constan en el catastro de que habla el Art. 3º de la Ordenanza de 22 de diciembre de 1930, ni han sido calificados por la respectiva Junta, calificación a la que debe someterse el asentista;

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Que a causa de las leyes anteriormente citadas, la una general para el país, la otra local que están entre sí en contradicción, se le ha planteado al señor Tesorero un dilema: o ejerce la coactiva sin previa calificación y viola la Ordenanza que he citado o niega la coactiva y quebranta el Código de Enjuiciamiento Civil;

Que esta dificultad sube de punto, ya que el señor Tesorero por una parte es funcionario dependiente de las resoluciones del Concejo, y por otra —desde el punto de vista judicial— miembro del Poder Judicial, revestido de poder coactivo;

Que una negativa respecto a la jurisdicción coactiva que se le solicita, significaría, sin lugar a duda, una privación completa del derecho que el asentista tiene de perseguir el impuesto.



Hasta aquí el extracto de lo que expone el señor Tesorero. Debiendo yo informar en cumplimiento de lo que se me ha ordenado, me permito manifestar que, en mi modesta opinión, no hay contradicción alguna entre el Art. 24 de la Ley Reformatoria del Código de Enjuiciamiento Civil de 7 de octubre de 1921 y la Ordenanza de 22 de diciembre de 1930. La Ordenanza completa, reglamenta, hace vivir prácticamente el artículo respectivo del Código de Enjuiciamiento Civil. Nada más. No hay contradicción entre las dos disposiciones legales. El Código de Enjuiciamiento Civil dice que si las rentas estuvieren dadas en asentamiento, la coactiva se ejercerá a petición del contratista. No dice más el Código. Pero, ¿contra quién ha de ejercerse la coactiva pedida? Esto no lo dice el Código, y es natural que esta coactiva pedida por el contratista o asentista no ha de ejercerse contra el mundo entero, contra el primero contra quien quiera ejercerla el asentista. La coactiva ha de ejercerse contra el que deba el impuesto y nada más. Y es la Ordenanza Municipal la que, al reglamentar la ley determina quienes son los que deben el impuesto por haber sido calificados de intermediarios. Para éstos la Ordenanza impone la formación de Catastros y crea la Junta de calificación. Francamente no veo en dónde esté la oposición. El señor Tesorero antes que funcionario del Poder Judicial para el efecto de la coactiva, es empleado municipal y miembro de la Junta de calificaciones, y no puede ejercer la coactiva contra individuos a quienes el Concejo no ha declarado contribuyentes municipales. En otras términos, ni el señor Tesorero ni el asentista, a menos de exponerse a las sanciones establecidas por el Código Penal, si los particulares quieren defenderse mediante un Abogado, pueden cobrar impuestos a cualquier ciudadano si antes la Municipalidad no les ha declarado contribuyentes suyos. Lo contrario sería incalificable abuso, violación de la



Constitución de la República y un motivo de enjuiciamiento criminal, si los perjudicados despliegan un poco de energía, como deberían hacerlo. Es un absurdo querer ahora cobrar el impuesto que grava a los intermediarios en cabeza de los comisionistas. Estos no son intermediarios. Son apoderados, son mandatarios: así lo ha declarado por dos veces el Concejo Municipal y no cabe ya que el asentista insista en cobrar impuestos a los comisionistas. ¿Por qué antes de afanarse por su contrato y de lanzarse a una licitación, lo cual revela sumo interés, el asentista no se informó, mediante un abogado, respecto al carácter propio de los comisionistas y a la jurisprudencia desde antes establecida por el Concejo?... En ciertas pretensiones del Asentista del impuesto sobre los corredores, hay ya cosas verdaderamente insoportables... Si el asentamiento no le produce al asentista las utilidades a que éste aspiró, no ha de pretender el asentista desquitarse cobrando impuestos al primer ciudadano que aparezca. Y esto —y no otra cosa— está haciendo el asentista al calificar por su cuenta, riesgo y autoridad, de intermediarios, a los comisionistas que no son intermediarios, según el Concejo.

Si acaso mi modesto parecer tiene alguna importancia en concepto del señor Presidente del Concejo, rogaría que cuanto antes se los haga conocer del señor Asentista y del señor Tesorero Municipal. Del primero para que no se cometan atentados contra la Constitución de la República y del segundo para que en jamás de los jamases la autoridad municipal coopere a la comisión de atentados.

Procurador Municipal,

*f.) J. M. Velasco Ibarra.*

(Continuará)